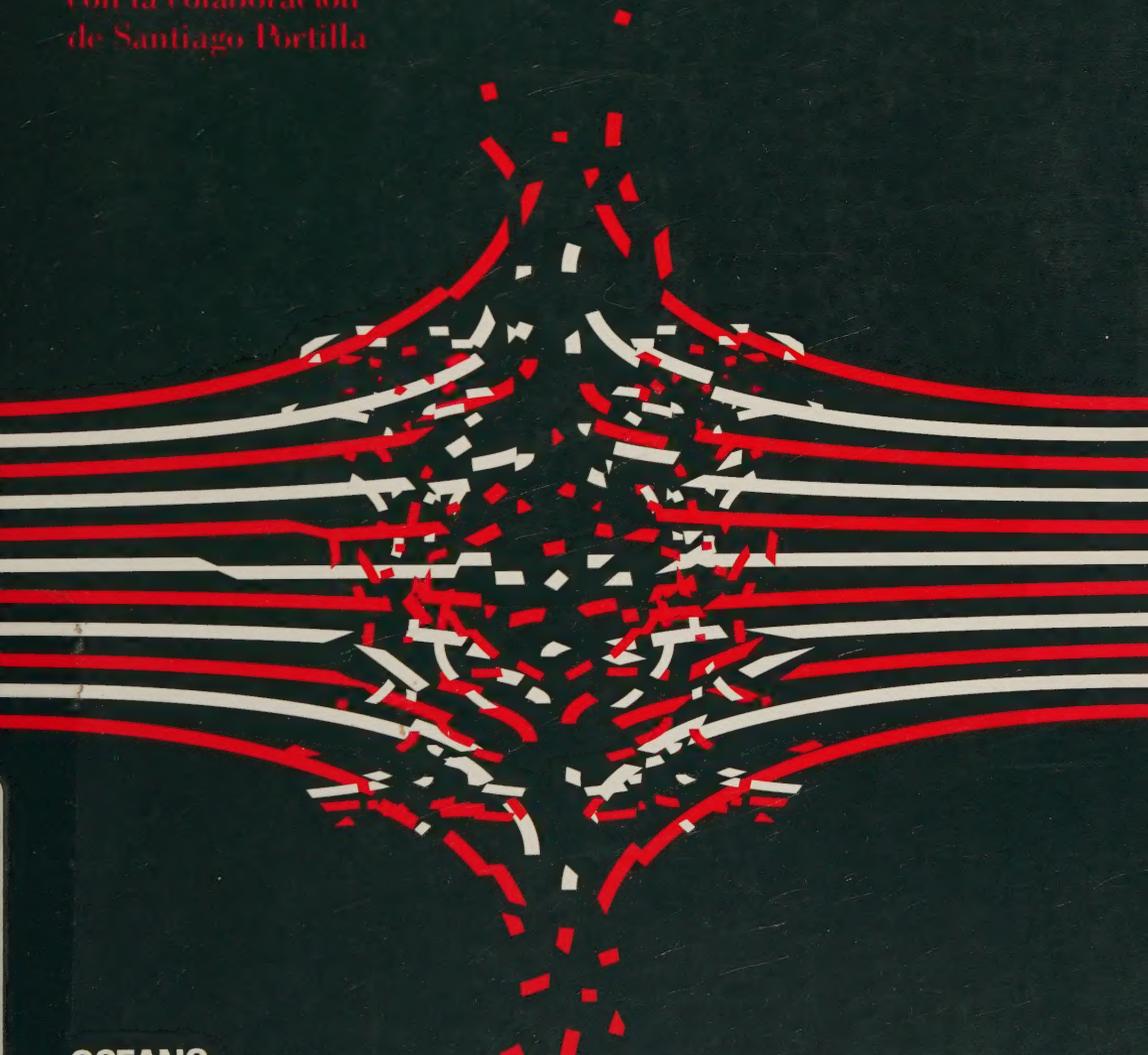


CONFRONTACIÓN DE AGRAVIOS  
La postelección de 2006

Alejandra Lajous

con la colaboración  
de Santiago Portilla



OCEANO

La democracia mexicana en la cuerda floja



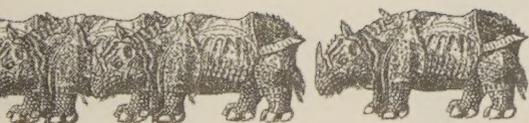
Las elecciones celebradas en México el 2 de julio de 2006 y los sucesos derivados de este proceso dieron lugar a uno de los pasajes más críticos de la historia mexicana reciente. Durante varios meses el país entero se debatió entre la incertidumbre, el desconcierto, la indignación y una beligerancia que dividió a la opinión pública y llevó a amplios sectores de la población a adoptar posiciones contrapuestas e irreconciliables. La joven democracia mexicana fue sometida a una dura prueba y los avances políticos logrados en los últimos años se vieron seriamente comprometidos. En el centro del conflicto —el cual enfrentó a Felipe Calderón y a Andrés Manuel López Obrador, candidatos a la presidencia por el PAN y el PRD, respectivamente— se encontraba el supuesto fraude electoral cometido durante los comicios. En esta obra, Alejandra Lajous reconstruye paso a paso los diversos hechos que dieron lugar a esta confrontación de agravios y analiza las razones y las sinrazones de los protagonistas.

**WITHDRAWN**  
**UTSA LIBRARIES**



---

# Tiempo de México



---

# Confrontación de agravios

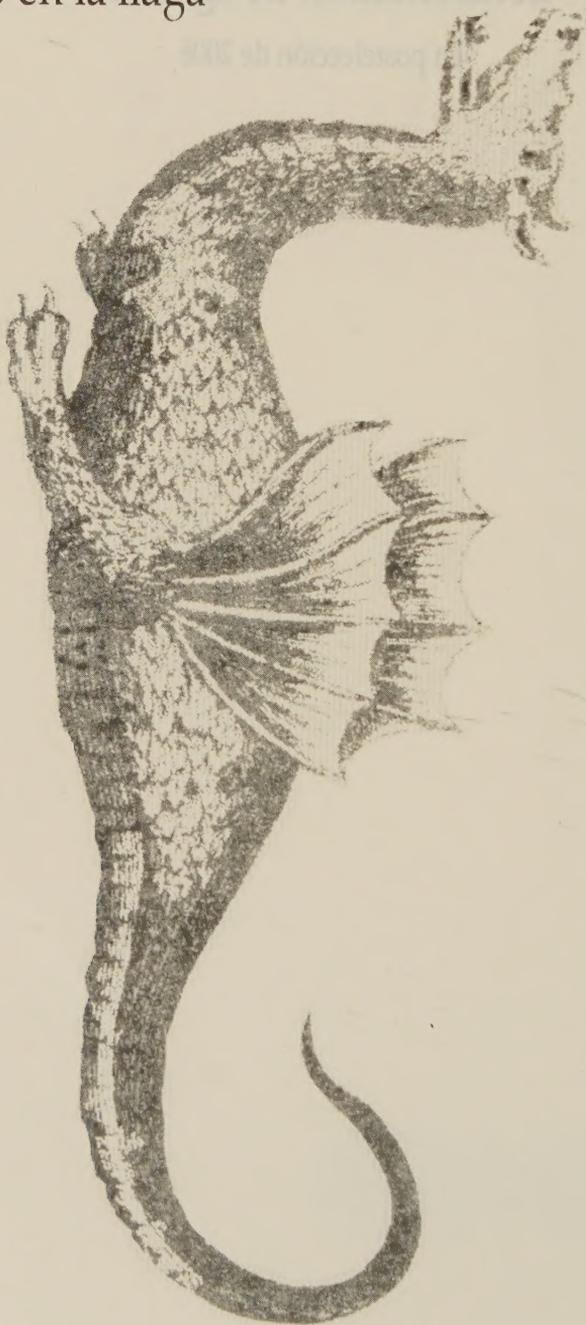
La postelección de 2006

Alejandra  
con la colaboración de

DETERMINADO

---

El dedo en la llaga



---

# Confrontación de agravios

La postelección de 2006



## Alejandra Lajous

con la colaboración de Santiago Portilla



---

**OCEANO**

---

**CONFRONTACIÓN DE AGRAVIOS**  
La postección de 2006

© 2007, Alejandra Lajous

D. R. © EDITORIAL OCEANO DE MÉXICO, S.A. de C.V.  
Blvd. Manuel Ávila Camacho 76, 10º piso,  
Colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo,  
Código Postal 11000, México, D.F.  
☎ (55) 9178 5100 📠 (55) 9178 5101  
✉ info@oceano.com.mx

PRIMERA EDICIÓN

ISBN-13: 978-970-777-314-1

ISBN-10: 970-777-314-6

*Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización  
escrita del editor, bajo las sanciones establecidas en las leyes,  
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio  
o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento  
informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante  
alquiler o préstamo público.*

IMPRESO EN MÉXICO / PRINTED IN MEXICO

Library  
University of Texas  
at San Antonio

---

## ÍNDICE

---

Introducción, 11

Con el alma en un hilo, 15

*Las 24 horas que hicieron la diferencia, 15*

*La información como arma de combate, 25*

La estrategia de López Obrador, 33

*Las convicciones y las realidades, 33*

*La andanada contra el IFE, 40*

*El recuento total de votos, 47*

*La confrontación por diferentes caminos, 58*

*La escalada de tensiones, 68*

Rebeldía en marcha, 87

*El plantón: AMLO dobla la apuesta, 87*

*Los campamentos: instalación y reacciones, 91*

*El TEPJF niega el recuento total, 98*

*La vida en el plantón, 107*

*El camino del Tribunal Electoral, 109*

*La lucha más allá del Tribunal, 113*

*La elección en Chiapas, 119*

*La rebelión contra las instituciones, 121*

*El Tribunal Electoral valida la elección, 126*

*Los pasos del presidente electo*, 129

*La disputa por los símbolos: el grito y el desfile militar*, 133

*La Convención Nacional Democrática*, 138

Políticos al borde de una crisis de nervios, 143

*La descomposición del Estado*, 143

*El tormentoso camino al cambio de gobierno*, 157

*Índice de nombres*, 177

---

## INTRODUCCIÓN

---

El ciclo que se inició con la elección presidencial del 2 de julio y se cerró con la toma de posesión de Felipe Calderón el primero de diciembre dio la sensación de un mal, muy mal fin de fiesta.

Durante todo ese periodo se vivió un ambiente cargado de agresiones, de ansiedad y de incertidumbre. La capacidad de resistencia de la democracia mexicana fue puesta a prueba. Hubo momentos en que parecía que la casa se iba a caer.

El Partido de la Revolución Democrática, guiado por un caudillo iracundo, estuvo dispuesto a crear el mayor caos posible y quizá hasta inmolarsse en la plaza pública, antes que aceptar la derrota de su líder.

Andrés Manuel López Obrador no pudo entender y menos aceptar que no fue el candidato con más votos en la elección presidencial. ¿Cómo podían los ciudadanos haber votado por quien él consideraba moralmente inaceptable? ¿Cómo podían sus adversarios creer que él trabajaría pacientemente en la oposición para fortalecer a su partido y aspirar de nuevo al cargo de presidente de la República? Nunca. Su misión no es negociar, sino conducir al país a una nueva organización política, económica y social.

La estrategia que trazó AMLO la noche de la elección y en los días posteriores consistió en continuar su lucha por la vía de la confrontación al costo que fuera. Acusó al Instituto Federal Electoral de haber cometido fraude, sin jamás poder comprobar su dicho. No obstante, con su habilidad y carisma y gracias a un diagnóstico acertado de los problemas de desigualdad que caracterizan a nuestra sociedad

y de la falta de equidad en que se desarrolló el proceso electoral, logró que 30% de la población creyera en la existencia del fraude electoral.

México estaba dividido desde mucho antes de la elección de 2006. Siempre ha sido lastimoso ver que millones subsisten con un salario mínimo, mientras algunos obtienen utilidades millonarias en un solo día. Nadie debe sorprenderse de que haya mucha gente frustrada, agravada, que considera que los poderes fácticos de México le robaron la elección a López Obrador.

El PRI, pese a considerar que hubo inequidad flagrante en el proceso electoral, mantuvo siempre la línea de aceptar las resoluciones de las instituciones electorales. Su decisión de atenerse a la legalidad del proceso fue un importante elemento estabilizador.

Durante agosto y la mitad de septiembre, López Obrador trató de paralizar a la capital invadiendo vialidades cruciales para la vida cotidiana y simbólicamente significativas para todos los mexicanos. Pero la ciudad no paró. Su vitalidad, proveniente de la diversidad de intereses que en ella conviven, así como de las necesidades y la voluntad de sus habitantes, sobrepasó en mucho el efecto negativo del “plantón”. De igual manera, el Tribunal Electoral federal, al que se pensaba presionar perturbando la vida de una de las ciudades más pobladas del mundo y la más grande del país, no se dejó influir.

Fueron momentos aciagos. La población toda estaba irritada. Unos querían el uso de la fuerza pública y otros lo temían. Sin embargo, con tolerancia y paciencia, la sociedad y las instituciones lograron digerir el problema y convertir el plantón en contraproducente para López Obrador. Éste dilapidó la simpatía de que era objeto y la popularidad de su partido, el cual recobró la imagen de ríjoso.

No deja de ser sorprendente cómo los dirigentes del perredismo, incluso los considerados sensatos, adoptaron acríticamente el discurso radical de su líder. Desempeñaron, sin chistar, el papel que se les asignó, como víctimas de un extraño determinismo.

A mediados de noviembre, ya como presidente electo y cuando faltaban sólo unos días para que asumiera constitucionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón les envió una carta a los

coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista (PRD, PT, y Convergencia) en la que les proponía que trabajaran juntos en doce puntos de la plataforma legislativa que ellos mismos habían planteado. No respondieron. Ignoraron el gesto y prefirieron secundar el auto-nombramiento de Andrés Manuel López Obrador como “presidente legítimo”. Parecen convencidos de que pueden vivir, impunemente, como oposición legal en el Congreso y como oposición extralegal en la calle.

Lo más contundente, sin embargo, fue la actitud intransigente que mostraron en el Congreso al tratar de impedir la toma de posesión de Felipe Calderón. El amago creó muchas dudas de índole política y jurídica, pues la protesta solemne ante el Congreso es un acto que exige la Constitución y no, como se dijo, un asunto meramente protocolario.

Sin embargo, el conflicto, grave y escandaloso como fue, no dinamitó los puentes de diálogo. Después del susto es posible afirmar que, gracias al gran aguante de nuestra sociedad, no resultó un mal fin de fiesta. México demostró tener los consensos institucionales para hacer que la democracia se asiente y el país funde su orden social en las instituciones.

Narrar esta historia constituyó un reto complejo. No me hubiera atrevido a ello sin contar con el apoyo de dos amigos con quienes me unen años de trabajo. Santiago Portilla escribió el capítulo tercero y Concepción Ortega nos apoyó como asesora y editora.

*Alejandra Lajous  
diciembre de 2006*



---

## CON EL ALMA EN UN HILO

---

### Las 24 horas que hicieron la diferencia

A las ocho de la noche del 2 de julio, la incertidumbre cimbró al país. Luis Carlos Ugalde, presidente consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), anunció que no podía dar a conocer una tendencia del conteo rápido realizado por la institución para la elección presidencial y que a las once de la noche haría una declaración al respecto. Por su parte, las televisoras también informaron que no divulgarían el resultado de las encuestas de salida de la elección presidencial porque la votación obtenida por los candidatos punteros —Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Felipe Calderón— registraba una diferencia tan pequeña que se encontraba dentro del margen de error de dichos ejercicios.

El problema era que el país estaba dividido. Había también la conciencia de que esta vez se trataba de una auténtica elección entre dos concepciones políticas, dos formas de ver el futuro del país. López Obrador quería cambiar a fondo el régimen y Felipe Calderón sólo deseaba reformarlo. En unos comicios tan competidos, resultaba inevitable que un número importante de votantes quedara profundamente defraudado. Todos cruzaban los dedos para no quedar en el grupo de los perdedores.

En los días previos a la elección, la guerra de lodo promovida por las campañas de ambos bandos había llevado a los mexicanos a una sensación de hastío. Sin embargo, las últimas encuestas publicadas mostraban una gran probabilidad de que el resultado electoral presen-

tara un margen muy estrecho para definir al ganador, por lo que existía la sensación de que cada voto podría ser determinante.

Ello explica por qué más de 41 millones de mexicanos salieron a votar el 2 de julio de 2006. La jornada electoral se desarrolló sin contratiempos o violencia. Fue una elección compleja. Se compitió por la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las gubernaturas de Guanajuato, Jalisco y Morelos, 367 ayuntamientos, 16 jefaturas delegacionales y 359 diputaciones locales. Para estos comicios se requirió la instalación de 130,500 casillas, a cargo de más de 900,000 ciudadanos y otros tantos representantes de partido, así como de la supervisión de 693 observadores internacionales y 25,311 observadores nacionales.

Desde las seis de la tarde, hora en que cerraron las casillas, se dio a conocer, pues no afectaba la votación en estados con otro huso horario, que las encuestas de salida señalaban que la Coalición por el Bien de Todos (CBT) —compuesta mayoritariamente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)— había arrasado en el Distrito Federal, y que en Guanajuato y Jalisco el triunfo era del Partido Acción Nacional (PAN). La situación en el estado de Morelos permanecía incierta, pero la mayoría de las encuestas favorecían al candidato del PAN.

Estos datos, aunque importantes, no calmaban la ansiedad que imperaba por saber quién dirigiría los destinos de la nación y qué camino tomaría el futuro.

En un ambiente de paciencia forzada, los ciudadanos tuvieron que esperar todavía tres horas más, hasta las once de la noche, para que el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, diera a conocer los resultados del conteo rápido efectuado por dicho Instituto. Este ejercicio se aplicó en una muestra de 7,633 casillas seleccionadas como representativas de la votación nacional.

Mientras tanto, a partir de las ocho de la noche, los más interesados pudieron consultar, a través de internet, el avance que arroja el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IFE, que informaba de los resultados de las actas, casilla por casilla, conforme los iba recibiendo.

A pesar de que se consideraba que el proceso electoral estaba “blindado”, la inmadurez de los actores políticos no tardó en manifestarse. El primero en desbocarse fue el dirigente del PAN, Manuel Espino, quien aseguró, minutos después de las ocho de la noche, que su partido, conforme lo había solicitado el IFE, no haría pronunciamientos respecto al ganador de la contienda presidencial. Sin embargo, dijo que algunas casas encuestadoras, como Grupo de Economistas y Asociados (GEA), daban ventaja al candidato presidencial panista, Felipe Calderón Hinojosa.

Este albazo marcó el tono. El PRD reaccionó dando instrucciones a sus seguidores de acudir a todas las plazas públicas del país a festejar el triunfo del candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

A las nueve de la noche, desde el Hotel Marqués en Paseo de la Reforma —donde se encontraba el equipo de AMLO—, Jesús Ortega, coordinador de la campaña electoral, anunció que tenían información suficiente para asegurar que su candidato contaba con una ventaja de 2.5%. Respaldando a Ortega, estaban los líderes del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo (PT) y de Convergencia, así como la encuestadora Ana Cristina Covarrubias.

La mayoría de la gente, que no seguía tan al detalle las declaraciones de los políticos, esperaba expectante a que dieran las once de la noche. A esa hora, los televidentes, conteniendo el aliento, se dispusieron a escuchar, en cadena nacional, a la máxima autoridad electoral. A las once de la noche con cinco minutos, el presidente consejero del IFE dijo: “El comité técnico asesor ha informado que no es posible determinar, dentro de los márgenes científicos establecidos para el conteo rápido, al partido o coalición que haya obtenido el mayor porcentaje de la votación emitida”. Agregó que el IFE esperaría los resultados de los cómputos distritales, los cuales iniciarían el miércoles 5 de julio y se realizarían de manera ininterrumpida. Luego, Ugalde afirmó: “Cuando concluyan éstos sabremos quién fue el candidato que obtuvo más votos”. Por último, exhortó a los partidos y a sus candidatos a actuar con responsabilidad, y los llamó a observar los plazos establecidos por la ley.

Con esta declaración, quedó claro que el consejero presidente del IFE no volvería a informar sobre los resultados de la elección hasta varios días después, cuando concluyera el conteo distrital.

Para muchos mexicanos, los medios y el propio IFE se comportaron con responsabilidad al no anunciar a un ganador. Formalmente, si no coincidían todos los soportes técnicos, no había sustento suficiente para dar mayor información. Sin embargo, para otros resultaba incomprensible que el mensaje del presidente del IFE planteara la necesidad de esperar el cómputo de los 300 consejos distritales, pues ello quitaba validez al PREP y no medía el peligro de crear un vacío informativo.

A las once de la noche con diez minutos, inmerso en su eterna añoranza por los reflectores, el presidente Vicente Fox dirigió un mensaje a la nación. En él, se congratuló por la participación ciudadana y la imparcialidad y transparencia de las instituciones electorales. Fox respaldó la decisión del IFE de esperar los cómputos distritales para anunciar los resultados electorales definitivos. Minutos más tarde, sus palabras, al igual que las del consejero presidente del IFE, cayeron en el vacío, pues los candidatos punteros ignoraron la exhortación.

A las once de la noche con veinte minutos, desde el Hotel Marqués, ante más de 800 periodistas nacionales y extranjeros, López Obrador, desencajado, hablando con alguna dificultad, afirmó que era respetuoso del IFE, pero que, de acuerdo con los datos de su partido, “ganamos la Presidencia de la República. Tenemos información de conteos rápidos y tenemos, cuando menos, 500 mil votos arriba”. Después anunció que iría al Zócalo a hablar con la gente.

A las once y media de la noche, ya desatado el ambiente de madrugete, Felipe Calderón decidió no dejar a AMLO con la última palabra. Desde la sede del PAN, acompañado del presidente y el secretario general de su partido, así como de la coordinadora de su campaña y de su esposa, el candidato panista dijo, en clara alusión a López Obrador, “no ha faltado quien ha señalado datos que discrepan de los del IFE”. Para aclarar paradas, Calderón dio a conocer los resultados del PREP hasta ese momento, que, con 35% de las casillas computadas, le

daban ventaja a su candidatura. Luego citó las encuestas de salida de cuatro empresas muy conocidas, que también lo favorecían.

“Con estos datos a nosotros no nos cabe la menor duda que hemos ganado las elecciones presidenciales y estos datos se corroborarán por el propio IFE”, sentenció Calderón, y felicitó por su triunfo a los candidatos a gobernador de su partido en Jalisco, Morelos y Guanajuato. Finalmente, ya con tono de presidente electo, añadió:

Ha sido muy claro, los ciudadanos nos están exigiendo a todos, de manera contundente, que es tiempo de hacer a un lado nuestras diferencias y comencemos a buscar nuestras coincidencias. México requiere de la unidad de todos por encima de los contrastes partidistas. Es tiempo de iniciar una nueva etapa de conciliación nacional. Para lograrlo, a partir de mañana dedicaré todo mi esfuerzo [...]

A las once de la noche con cuarenta minutos, desde la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente de su Comité Ejecutivo Nacional, Mariano Palacios Alcocer, acompañado del candidato presidencial de su partido, Roberto Madrazo, dijo ante las cámaras de televisión: “No a la guerra de encuestas de conteos que favorecen supuestos triunfos virtuales”. Exigió respeto a la voluntad popular y a los tiempos que la ley establecía. Aclaró que el PRI se asumía como el factor más importante de estabilidad y gobernabilidad. Ya antes, a las ocho de la noche con veinticinco minutos, Palacios Alcocer había declarado: “Rechazamos categóricamente, por el bien del país, que se prefiera la probabilidad de una encuesta a la certeza del conteo de voto por voto que la ley prevé, ordena, vigila y protege”.

Ésta era una postura de control de daños. El PRI, que quedó como tercera fuerza electoral, quería presentarse como factor de gobernabilidad y de certidumbre. Los priístas estaban decididos a resistir las presiones de Jesús Ortega para llamar a López Obrador presidente, pero también se negaban a levantarle la mano a Calderón. Resultaba claro que pensaban negociar políticamente, haciendo valer la importancia de su apoyo.

A las once de la noche con cincuenta minutos, AMLO llegó al Zócalo capitalino en medio de una lluvia ligera que no logró apagar el ánimo encendido de miles de sus seguidores. Sin embargo, en la tribuna desde donde habló y en la que estuvo acompañado por los principales miembros de su equipo y de la CBT, el ambiente era tenso. El desconcierto se reflejaba en la cara de Marcelo Ebrard, quien, a pesar de que había triunfado holgadamente en la contienda por la jefatura de Gobierno de la capital del país, se mordía insistentemente el labio superior.

En su discurso, López Obrador aseveró: “Escuché el mensaje del presidente del IFE y del presidente de la República; soy muy respetuoso de las instituciones y, de manera particular, de lo que resuelva el Instituto Electoral”. Sin embargo, reiteró lo que ya había dicho antes: “Tenemos informaciones, con base en los conteos rápidos, de que estamos cuando menos 500 mil votos arriba [...]”. Y añadió: “Exijo, pido a las instituciones electorales que respeten estos resultados”.

Luego, hablando también ya como presidente electo, anunció que al día siguiente y los subsecuentes:

Cuando se vaya concretando este resultado, iniciaré la convocatoria para la construcción de un acuerdo nacional, un pacto nacional donde estén representados los empresarios, las Iglesias, la sociedad civil, los indígenas, los campesinos y los obreros [...] Quiero también tender mi mano franca. Siempre dije que yo no odio, que soy un hombre feliz y extendiendo mi mano franca para los que considero mis adversarios: nunca los he visto como mis enemigos [...] vamos a poner, por encima del interés particular o de los partidos, el interés de México.

Estas palabras no se correspondían con los gestos. La pesadumbre de López Obrador y de sus seguidores era perceptible. Los televidentes vieron con asombro cómo el candidato de la Coalición por el Bien de Todos se subió a su auto y se retiró a su casa. Pocos sabían que, en el curso de ese intensísimo día, AMLO no había sentido necesario compartir con los dirigentes de los partidos políticos que lo apoyaron el avance de la información que dijo tener.

Gran parte de la clase política y de la elite intelectual pensaba que la Coalición por el Bien de Todos ganaría la elección presidencial. En el círculo cercano a López Obrador no cabía la menor duda de ello, como lo prueba el artículo escrito por Manuel Camacho antes de conocer los resultados y publicado en *El Universal* al día siguiente de las elecciones, en el que adelantaba lo que haría el presidente electo.

Por ello, en esa larga noche en que los resultados del PREP consistentemente le dieron una ventaja a Calderón, AMLO buscó la manera de ganar tiempo. Para él, su derrota era inconcebible y necesitaba evitar que la victoria de su adversario se asentara en la mente de los ciudadanos.

Convencido de que había triunfado, López Obrador dedujo que sus adversarios estaban, de alguna manera imposible de determinar en ese momento, alterando los resultados. Esta intuición, pues no tenía datos en qué basarla, lo llevó a tratar de encontrar algún resquicio en la forma de presentación de la información, que le permitiera cuestionar la credibilidad de las instituciones electorales. Una vez más demostró que, para él, el fin justifica los medios.

Al día siguiente, la metamorfosis había ocurrido: AMLO salió del Zócalo con una gran incertidumbre sobre su triunfo y amaneció con la certeza de que se había orquestando un colosal fraude en su contra.

El lunes 3 de julio, a las ocho treinta de la mañana, López Obrador ofreció una conferencia de prensa en la que cuestionó los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Ante los medios fue concluyente:

Se tiene un padrón electoral de alrededor de 71 millones de ciudadanos, se habla de que en el PREP participó el 59 por ciento. Pensando en una votación del orden de 42 millones de participantes y la proyección con lo que va a ser del PREP es de 39 millones, es decir, hay 3 millones menos. Entonces ¿qué está pasando? Ésa es la pregunta que queremos hacer.

La radio corrió la voz como reguero de pólvora: “López Obrador afirma que están perdidos 3 millones de votos”.

Al actuar con tal celeridad, AMLO detonó las suspicacias a las que los mexicanos son tan afectos. La sospecha de que se estaba manipulando el resultado electoral para impedir que alcanzara la Presidencia de la República se esparció con rapidez. AMLO presentó el hecho como un capítulo más del complot, independientemente de que quienes ahora tenían que haberlo ejecutado eran los propios ciudadanos. Para el caso, más de dos millones de ellos: los que habían abierto las casillas, organizado la votación, contado los sufragios, y representado a candidatos y partidos.

La fragilidad de la cultura política del mexicano fue mayor que la solidez del sistema electoral. Todos los participantes atestiguaron la seriedad del proceso electoral. Los funcionarios de casilla eran ciudadanos escogidos aleatoriamente y su labor fue supervisada por los representantes de los partidos. Para votar, el ciudadano tenía que presentar su credencial de elector con fotografía y huella dactilar, misma que se cotejaba con las listas de posibles votantes, también con fotografía y huella, y se marcaron con tinta especial los pulgares de quienes habían ejercido su derecho.

Al término de la jornada electoral, cuando se cerraron las casillas, se llevó a cabo el cómputo de la elección y todos los representantes de partido se quedaron con una copia de las actas, en las que se consignaba el número de votos de cada candidato. El presidente de cada casilla, acompañado de los representantes de partido, se dirigió al Comité Distrital y entregó el paquete electoral que, entre otras cosas, contenía las actas de los cómputos. De manera que los partidos políticos, a través de sus representantes, fueron testigos privilegiados de la jornada electoral.

Por otro lado, también era pública la existencia de un comité técnico en el IFE, encargado de diseñar y supervisar la captura de la información electoral, el cual estaba compuesto por prestigiados científicos independientes. La captura de la información se realizó con un doble filtro y la publicación de los resultados de las casillas se dio de manera inmediata, a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

A pesar de todo ello, 24 horas después del cierre de las casillas, la confusión y las sospechas sobre los resultados electorales se multiplicaron. El fantasma del “empate técnico” cobraba cuerpo. Felipe Calderón y el PAN se aferraban a los números del PREP, que los favorecían, en tanto que el aspirante de la CBT, Andrés Manuel López Obrador, cuestionaba la limpieza de la elección y, para esta hora, exhibía actas que, por errores aritméticos, no correspondían a lo asentado en los resultados preliminares.

En una contienda tan reñida, nadie espera que uno de los candidatos reconozca de inmediato su derrota, pero sí es necesario, cuando menos, que los candidatos y sus allegados le otorguen el beneficio de la duda a la autoridad electoral.

Como no fue así, por todos lados brotaba, angustiante, el temor de que se descarrilara el proceso institucional. En ese contexto, resultó muy significativo que el PRI se aplomara y apostara por la gobernabilidad. Ese mismo lunes 3 de julio, a las once de la noche con quince minutos, su candidato presidencial, Roberto Madrazo, rodeado de 16 gobernadores priístas, aceptó que había perdido la elección y puso en manos del IFE la decisión final sobre el conteo de los votos.

La debacle del PRI fue impresionante. Sólo obtuvo 22% de los votos y no ganó ninguna de las gubernaturas en juego. Pasó a ser la segunda fuerza en el Senado y la tercera en la Cámara de Diputados.

Con el desfondamiento del tricolor, inmediatamente surgió en su seno la lucha interna. Sin embargo, también en forma acelerada, tanto Madrazo como los mandatarios estatales priístas comprendieron que lo que debían buscar era incluir puntos de la plataforma electoral del PRI en el programa del próximo gobierno, así como posicionarse para presidir comisiones en la nueva legislatura e, incluso, obtener puestos en el nuevo gabinete.

Según un análisis de Raymundo Riva Palacio publicado en *El Universal*, un par de días después, visto el mapa electoral, los gobernadores priístas concluyeron que el voto útil en contra de Madrazo había tenido un impacto en el sur, que se había traducido en alrededor de cinco puntos a favor de López Obrador. De igual forma, quedó muy

claro para ellos que la fuerza del voto corporativo, controlado en buena medida por Elba Esther Gordillo, había terminado por afectarlos enormemente. Estimaron que, cuando menos, cuatro puntos del Partido Nueva Alianza (PANAL), en la elección presidencial, se habían sumado a Calderón. Ello con independencia de que la profesora Gordillo hubiera promovido con éxito el voto útil contra Roberto Madrazo dentro del PRI.

El lunes 3 de julio, a las ocho de la noche, cerró el PREP, el cual, según lo señaló el IFE, había incorporado la información de 98.45% de las actas. Inmediatamente los simpatizantes de la CBT acusaron a las autoridades electorales de haber actuado con dolo, dando pie al triunfalismo panista, pues la información no incluía el archivo de inconsistencias, formado por 11,184 actas, referidas a 2.6 millones de votos.

La institucionalidad con que los mexicanos votaron el día anterior no impidió que muchos dudaran de la honorabilidad del millón de ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla, así como de los numerosísimos representantes de los partidos políticos y de todo el personal y la metodología del IFE. La memoria histórica era más fuerte que la experiencia personal de una elección bien llevada.

El daño estaba hecho: se había minado la credibilidad en las instituciones electorales. “Palo dado, ni Dios lo quita”, dicta el refrán.

Ese 3 de julio la contienda electoral terminó. Comenzaba otra contienda, la postelectoral, más envenenada y compleja que la anterior.

López Obrador ya estaba echado a andar: “El candidato perredista no reconoce los resultados del PREP. El programa, manipulado y con infinidad de anomalías, acusa”, publicó *La Jornada* el 4 de julio.

Ese día, los ciudadanos atentos al desarrollo del proceso vieron y escucharon en todos los medios cómo la inclusión de las actas del archivo de inconsistencias hizo bajar la ventaja de Calderón de 1.04% a sólo 0.62 por ciento.

Muchos ignoraron que, ese mismo 4 de julio, el IFE explicó que durante la construcción y desarrollo del PREP los partidos políticos y los miembros del comité técnico asesor habían acordado que las actas en que se reportaran inconsistencias serían registradas como procesa-

das y se almacenarían en un archivo especial denominado “Base de datos de inconsistencias”. Asimismo, el Instituto informó que se había convenido que esos datos no se sumarían a la base principal difundida en internet, para evitar posibles distorsiones.

Esta explicación, además de compleja, exhibe un error técnico y otro de comunicación del IFE. El primero, porque la liga al archivo de las inconsistencias en la página principal del PREP estaba a pie de página, y el segundo, porque no se dio a conocer a todo el público la existencia de este archivo.

Sin embargo, lo que resulta muy significativo es que, en la misma conferencia, el IFE dio a conocer que, tanto el 2 como el 3 de julio, la Coalición por el Bien de Todos había hecho múltiples consultas al archivo de inconsistencias.

### **La información como arma de combate**

Debido a que conocían bien las dificultades de acceder a esta información, los perredistas apostaron a que la mayoría de las personas que consultaran el PREP no la encontrarían. La declaración de López Obrador sobre los tres millones de votos perdidos tenía por objeto crear desconfianza en el proceso electoral. La especie dio en el blanco e hizo estragos.

El compás de espera electoral alimentó las dudas sobre la fortaleza institucional del país. Había que aguardar unos días para que concluyeran los conteos distritales y para saber si el resultado oficial sería reconocido como legítimo por todos. De ser así, la democracia se habría fortalecido. De lo contrario, se habría debilitado, con las terribles consecuencias que ello podría acarrear.

AMLO mostró su sentido de la oportunidad y un manejo ejemplar de los mensajes clave al exigir que se volviera a contar “voto por voto”. La sencillez de la frase y lo inobjetable de su contenido tuvieron una gran acogida. La cuestión era que eso precisamente fue lo que se había hecho el día de las elecciones y que no se necesitaba, ni se podía repetir, ya que, conforme al Código Federal de Instituciones y Proce-

dimientos Electorales (COFIPE), no existía la posibilidad de abrir los paquetes electorales, salvo durante el conteo distrital y en los casos contemplados por la ley. La única otra opción era por solicitud expresa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Abrir los paquetes en ese momento para volver a contar suponía una trasgresión legal. Sin embargo, López Obrador lo planteó como indispensable para evitar la inestabilidad del país.

Varios analistas vieron su solicitud como una forma de ganar tiempo para organizar una movilización que, en última instancia, permitiera anular la elección. Pero esta postura implicaba un despilfarro del capital político obtenido por el PRD. ¿Podía López Obrador suponer que sólo hubo fraude en la elección presidencial y no en las elecciones de diputados y senadores, o en la del gobierno capitalino?

El ambiente estaba impregnado de escepticismo, inquietud y desconfianza. Los errores del IFE justificaban, a los ojos de los seguidores de AMLO, la ferocidad de la batalla legal, mediática y política de los contendientes.

También el 4 de julio, Ricardo Monreal —integrante del grupo cercano a López Obrador— enumeró en el periódico *Milenio* lo que consideró conformaban las irregularidades de la elección. Destacó las campañas publicitarias negativas; el monto de los financiamientos; la participación del presidente Vicente Fox en la promoción del voto a favor de Felipe Calderón; la posible compra y coacción del voto a través de programas sociales federales, estatales y locales; la inequidad de una parte de las televisoras, e, incluso, la inducción del voto realizada por algunos empresarios. Varios de estos aspectos habían sido atestiguados por todos y habían crispado los ánimos de muchos. Naturalmente, el artículo omitió la mención al fuerte impulso que el Gobierno del Distrito Federal le brindó a la campaña de López Obrador.

El 5 de julio, dice la ley, se instalan los consejos distritales para hacer el cómputo de los resultados registrados en las actas de las casillas de las elecciones para presidente, diputados y senadores. En los consejos, además de un funcionario del IFE, hay seis consejeros electorales —que son ciudadanos reconocidos en sus distritos— y repre-

sentantes de todos los partidos políticos. Los partidos llevan a dicha reunión sus respectivas actas. Ahí, una por una, se confrontan los resultados de las actas, y si no coinciden o son notorias posibles alteraciones, se abren los paquetes con las boletas y se cuentan uno por uno los votos de la casilla dudosa. Todo eso se realiza en sesiones abiertas, de tal suerte que es imposible trucar los resultados.

Conforme a los tiempos marcados por la ley, a las nueve de la mañana del miércoles 5 de julio, inició de manera ininterrumpida el conteo distrital. En ese momento, nadie podía saber quién sería el próximo presidente de la República.

El temor invadió a los diferentes grupos y regiones del país. Sin embargo, fue admirable el ambiente de mesura con que los ciudadanos esperaron los resultados de las elecciones y, sobre todo, los de la contienda presidencial.

De manera sorpresiva, a diferencia de lo que sucedió en el PREP, en el que Felipe Calderón había tenido la ventaja durante prácticamente todo el tiempo, en el conteo distrital fue Andrés Manuel López Obrador quien mantuvo la mayor parte del tiempo la delantera.

La autoridad electoral y Felipe Calderón dieron por sentado que había que dejar fluir la información de cada uno de los 300 consejos distritales al ritmo marcado por las cargas de trabajo. No previeron que, para fines del flujo informativo, era conveniente que los datos se captaran equilibrando regionalmente el avance de los consejos distritales.

En cambio, mucho se dijo que la CBT utilizó una táctica para retrasar de manera artificial la entrega de resultados de las casillas en las que AMLO había perdido. Según dieron cuenta los medios, sus representantes llevaban la instrucción de impugnar dichas casillas y de resolver rápidamente aquellas que favorecían a su candidato.

De esta forma, cuando llegaran las actas de los distritos que le dieron un mayor número de votos al panista, ya se habría creado la percepción de que el resultado favorecía a López Obrador. Por lo mismo, a muchos les pareció inverosímil el vuelco a favor de Felipe Calderón. Se trató, en todo caso, de una promoción activa de la confusión, pues no hubo un sesgo que sustentara el alegado fraude. En las casillas don-

de se abrieron los paquetes, las rectificaciones favorecieron lo mismo a AMLO que a Calderón y, en algunas, incluso a Madrazo.

Ese miércoles, los mexicanos vivieron una experiencia singular: pasaron el día y, sobre todo la noche, esperando los resultados de los cómputos distritales. La tensión arreció cuando terminaron los noticiarios televisivos y, para evitar un vacío informativo como el del 2 de julio, las televisoras organizaron mesas de comentarios que dieron seguimiento al flujo de la información hasta las seis de la mañana, cuando comenzaban sus programas informativos cotidianos.

La incertidumbre se dio porque desde el inicio del recuento Andrés Manuel López Obrador iba arriba. Así transcurrió el día. En la tarde, los corresponsales extranjeros informaban que había contradicciones entre el PREP y el conteo distrital, en tanto que los colaboradores de Calderón explicaban que la brecha entre ambos se estaba reduciendo, lo que implicaba una inflexión en la tendencia. Fueron horas angustiantes para los seguidores de Calderón y para quienes le tenían miedo a AMLO.

A las cuatro de la mañana con un minuto del jueves 6 de julio, después de casi 20 horas en que López Obrador mantuvo la ventaja en el cómputo oficial, la pizarra electrónica del IFE se renovó y el aspirante panista remontó la desventaja y se colocó al frente, cuando aún faltaban varias plazas clave para la causa blanquiazul.

Unos 50 perredistas hacían guardia a las puertas del IFE. “‘Hace unos momentos [...] se consumó el fraude electoral’, gritó una voz grave, cansada”, relata Fidel Samaniego en su crónica de *El Universal*. “Por segundos se escuchó el silencio. Una mujer lloraba. Luego, los gritos de ira: ‘¡IFE vendido! ¡Corruptos!’”. Para terminar, en coro, se oyó la ya popular demanda: ‘¡Voto por voto, casilla por casilla!’”.

El jueves 6 de julio, a las siete y diez de la noche, el presidente del Consejo General del IFE, Luis Carlos Ugalde, informó de manera oficial, tras 31 horas de cómputo, que la suma de sufragios emitidos en los 300 Consejos Distritales del país y por mexicanos residentes en el extranjero era de 41'557,430. Luego, Ugalde dio las cifras totales de cada partido. Calderón aventajaba a López Obrador por 243,934 votos, lo que significaba sólo 0.58 por ciento.

Tras dar los datos, Luis Carlos Ugalde señaló que Felipe Calderón Hinojosa era el candidato que había obtenido el mayor porcentaje de la votación presidencial, y dejó en claro: “La regla de oro de la democracia establece que gana el candidato que tenga más votos”. Esta expresión enfureció a los perredistas, quienes consideraron que la única autoridad que podía determinar al ganador de la elección era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La labor de la CBT en ese momento consistía en impedir que el triunfo de Calderón fuera visto como oficial, porque no lo era.

La confusión creció, pues la mayoría de los mexicanos esperaban que al final del cómputo distrital las autoridades electorales declararan quién era el presidente electo de México. Sólo en ese momento se enteraron de que los resultados de las actas de los consejos distritales se entregarían al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual tendría que ponderar estos datos —haciendo los ajustes necesarios a las cifras— con los resultados que le dieran los casos impugnados que fueran aprobados.

Sólo así el Tribunal Electoral podría obtener el cómputo final de la elección presidencial y, en su caso, declarar o no la validez de la elección. Si se calificaba como válida, el TEPJF proclamaría, a más tardar el 6 de septiembre, de manera inapelable, al presidente electo. Mientras tanto, los mexicanos tendrían que sobrevivir en la incertidumbre y el temor.

El viernes 7 de julio, a las ocho y media de la mañana, López Obrador, desazonado, dio una conferencia de prensa en la que descalificó todo el proceso realizado por el IFE. Señaló que el día de la elección los consejeros del Instituto habían manipulado el PREP. Con respecto al recuento de las actas efectuado en los 300 distritos electorales sentenció:

No debieron actuar de esa manera, ese espectáculo de ayer, de montar a través de los medios de información la difusión de los resultados. Levantaron toda la expectativa, reanimaron a mucha gente, a millones de mexicanos y luego el golpe, eso es irresponsable, eso es un acto de provocación.

Después, AMLO añadió:

Sigue funcionando el aparato de Estado en los procesos electorales, es evidente que se utiliza [...] para favorecer al candidato de la derecha [...] a Calderón le debería dar vergüenza proclamarse triunfador. No se puede aspirar al cargo de presidente sin autoridad moral.

El IFE, en su opinión, había actuado con “una prisa inusual”, dada su falta de voluntad de conducirse con transparencia. Por ello, advirtió, acudiría a presentar pruebas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por último, López Obrador convocó a un mitin político para el sábado 8 de julio en el Zócalo de la ciudad de México, en el que rendiría un informe a sus simpatizantes sobre lo ocurrido en las elecciones. La reunión sería, necesariamente, un desplante de fuerza política.

Once horas después de que AMLO anunciara que impugnaría los resultados, Felipe Calderón apareció, a las siete y media de la noche, en la sede del PAN, para dar su primer mensaje como ganador de las elecciones presidenciales, conforme a los datos del IFE. Ahí, dijo triunfante:

Hemos asistido a la elección presidencial más participativa, más competida y también la más democrática en la historia del país. Mi primera felicitación es para los ciudadanos. Para millones y millones de mexicanas y mexicanos que con su voto han apostado a la paz y no a la violencia, han apostado a la democracia y no a la confrontación [...] con más de quince millones de votos hemos ganado la elección [...] los mexicanos me han conferido el honor y, a la vez, la gran responsabilidad de ser el próximo presidente de México [...] Ante una expresión ciudadana diversa y plural como la que se registró el domingo pasado, asumo como tarea personal hacer míos los anhelos y las razones que motivaron a millones de ciudadanos a votar por otros candidatos.

Más adelante, conciliador, Calderón afirmó:

Hoy quiero reiterar mi respeto a mis adversarios políticos, a sus equipos y a los partidos que abanderaron [...] con Andrés Manuel López Obrador [...] comparto su anhelo de justicia [...] Las elecciones han sido competidas y tendremos nuevamente un Congreso sin mayoría. En ello el mensaje que los mexicanos nos dan también ha sido muy claro: trabajen juntos, sumen sus prioridades, dejen a un lado la política de facción o de grupos por el bien de México, y eso haré.

La realidad fue que los políticos perdieron el control del proceso. Su lenguaje exaltado polarizó aún más a la sociedad. Mientras unos querían someter al presunto derrotado a como diera lugar, otros se irritaban por el triunfalismo prematuro del supuesto ganador.

Los panistas solicitaban apego a la legalidad y respeto absoluto a las instituciones, lo cual agraviaba a los perredistas, que no olvidaban que Vicente Fox, con motivo del desafuero, había utilizado al orden jurídico como un ariete político para tratar de eliminar a López Obrador de la competencia electoral.

A los seguidores de AMLO tampoco les resultaba creíble el discurso de reconciliación de Felipe Calderón, pues todavía resonaba en sus oídos que lo había calificado, durante la campaña presidencial, como “un peligro para México”.

Por su parte, López Obrador, quien quiso convertir la elección en la revancha de los pobres, no podía escuchar, y menos entender, a quien consideraba un personero de “los delincuentes de cuello blanco”. Para él, los resultados electorales sólo podían ser producto del fraude.

Ambos contendientes fundaban sus alegatos en “la autoridad moral”, lo que enardecía a sus respectivos adversarios, que andaban con el cuchillo en la boca. Muchos más se debatían en la duda: se sentían confundidos y atemorizados por la crispación social en que estaba cayendo el país.

Por primera vez, los mexicanos tuvieron que aceptar que el resultado de los cómputos distritales no fue el fin de la elección del fu-

turo presidente de México. Con horror, enfrentaron que había que esperar casi dos meses para que se diese la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaban atrapados en una nueva fase de confrontación política y judicial que tornó la incertidumbre en angustia. Era mucho lo que estaba en juego.

---

## LA ESTRATEGIA DE LÓPEZ OBRADOR

---

### Las convicciones y las realidades

El sábado 8 de julio, López Obrador entró al Zócalo de la ciudad de México por avenida Madero, entre gritos que lo aclamaban con insistencia: “Pre-si-den-te”, “Pre-si-den-te”. El Centro Histórico capitalino estaba atiborrado por medio millón de asistentes, según calcularon periodistas de *La Jornada*. Este hecho contrastaba notablemente con la noticia destacada por la prensa ese día: que el presidente de Estados Unidos, George Bush; el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, habían felicitado vía telefónica a Felipe Calderón por su virtual triunfo electoral.

La división política y emocional del país era un hecho. A partir de ese momento, los mexicanos verían desarrollarse “la realidad” en pistas diferentes. Por un lado, quienes respetaban los resultados electorales dados a conocer por el Instituto Federal Electoral y, por el otro, quienes los rechazaban o dudaban de ellos. Fueron días de emociones encontradas, de dudas, de exaltación de los ánimos, al grado de separar irreconciliablemente a amigos y parientes.

Todo análisis estaba cargado de emotividad, de historia personal, de valoración de las instituciones y de interpretación de lo que debía ser el futuro para México. Sin embargo, correspondía a los inconformes comprobar su convicción. Su divisa obligada era actuar, promover, convencer, denunciar, protestar.

Ese sábado 8 de julio, la ciudad de México fue cimbrada por una magna manifestación en contra del “fraude” electoral. Desde las doce de la mañana se fue llenando la Plaza de la Constitución. Algunos llegaron caminando en pequeños grupos; se trataba de familias, parejas de ancianos o amigos jóvenes. Otros bajaron de autobuses procedentes de distintas áreas de la capital y de diversos estados de la República. Estos manifestantes estaban organizados y uniformados con camisetas amarillas, banderines y mantas.

Todos comenzaron a reunirse frente a un templete monumental, en el que se había montado un marco metálico con un gran número de lámparas. Las bocinas, de gran tamaño, ubicadas sobre la tarima, aseguraban una acústica perfecta. El estrado, colocado frente a Palacio Nacional, permitiría que las cámaras de televisión captaran este simbólico monumento como escenografía de fondo durante el discurso de AMLO. Todo estaba listo para el momento del gran desafío.

A las cinco de la tarde, en medio de una gran algarabía, dio inicio el evento. Jesús Ortega, coordinador general de la campaña de López Obrador, calentó el ambiente, dando a conocer unas grabaciones de Elba Ester Gordillo en las que sostenía pláticas con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, y con el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández.

La inconfundible voz de la líder del sindicato más grande de América Latina se escuchó a través de las bocinas colocadas en la Plaza de la Constitución y en avenidas aledañas: “El PRI ya se cayó”, dijo y dio instrucciones al gobernador priísta de promover el voto útil a favor de Calderón. De manera vergonzosa, sugirió al mandatario estatal hablar con el candidato panista para “vender lo que tengan” y “no quedar mal”.

“¡Corrupta!”, “¡asesina!”, “¡sinvergüenza!”, “¿cómo te toleran los maestros?”, fueron algunos de los gritos que provocó el audioescándalo. Sin embargo, entre los que sólo se interesaban en escuchar a AMLO, surgió un clamor cargado de reproche: “¡Apúrate o Marcelo va a llegar tarde a su boda!”, pues, efectivamente, después de ese acto el jefe de Gobierno Electo, Marcelo Ebrard, contrajo matrimonio con Mariagna Prats, en un rumboso evento social.

Pero esa primera “asamblea informativa” no era para desesperados. Además de Jesús Ortega, tomó la palabra el novelista Fernando del Paso, quien en su alocución le brindó su apoyo al excandidato presidencial perredista y acusó al presidente Fox, al PAN, a Calderón y al IFE de haber cometido fraude electoral.

La palabra “violencia”, afirmó, había reaparecido en el vocabulario político mexicano tan sólo cuatro días después de la votación del 2 de julio, cuando Felipe Calderón habló del triunfo de los pacíficos. Su discurso cobró emoción y dejó ver el sentimiento de agravio que lo embargaba cuando reclamó:

¿En qué mundo vive este señor Calderón, que no se da cuenta que con estas palabras califica de violentos a 15 millones de mexicanos que votamos por Andrés Manuel López Obrador en el ejercicio pleno de nuestra libertad? [...] ¿en qué México se llama pacíficos a quienes encendieron el fuego de una campaña política de una agresividad sin precedente...? ¿qué es lo que pretende este señor, dividir a los mexicanos en los buenos y los malos?

Los cuestionamientos de Del Paso palidieron frente a las acusaciones de AMLO. Con todas sus letras, el tabasqueño expuso quiénes y por qué, en su opinión, habían promovido el fraude electoral. López Obrador inició su discurso así:

Creo que todos los que estamos aquí, y muchos otros que no pudieron asistir, sabíamos que no iba a ser fácil hacer valer la democracia en nuestro país. Estamos conscientes de que nos enfrentamos a un núcleo de poder económico y político que está acostumbrado a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. A ellos realmente no les importa el país, y mucho menos el sufrimiento de la mayoría del pueblo de México. El único propósito de esa gente es mantener y acrecentar sus privilegios.

Ha sido precisamente el predominio de ese grupo, de esa minoría rapaz, lo que ha llevado al país a la ruina y lo ha con-

vertido en un océano de desigualdades, con más diferencias económicas y sociales que cuando Morelos proclamó que debían moderarse la indigencia y la opulencia.

Son ellos quienes conspiran contra la democracia, porque se oponen a un cambio verdadero; son los que defienden la política económica imperante, antipopular y entreguista, que sólo ha llevado al país al estancamiento económico, al desempleo y a la migración de millones de mexicanos que, por necesidad, han tenido que abandonar su país y sus familias para ir a buscar trabajo, para exiliarse del otro lado de la frontera; son los que se han quedado con empresas y bienes de la nación; son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica; son los que han convertido al gobierno en comité al servicio de unos cuantos y son los que ahora quieren imponer en la Presidencia a un empleado incondicional, a un pelele que les garantice la corrupción, el influyentismo y la impunidad.

[...] Ese grupo ve amenazados sus intereses cuando postulamos y defendemos un proyecto alternativo de nación, capaz de crear una nueva legalidad que se necesita, que urge en nuestro país; una nueva economía; una nueva forma de hacer política más digna; una nueva convivencia social, con menos desigualdad y con más justicia.

AMLO puso a quienes lo escuchaban como testigos de situaciones que fueron públicas, pero también de acusaciones para las que no dio sustento o evidencia alguna. Mezcló estos hechos al sentenciar:

[...] ese grupo buscó con el desafuero quitarme mis derechos políticos [...] fue el que lanzó la leyenda negra sobre mi persona [...] Compraron espacios en televisión para difamarnos impunemente [...] gastaron en la campaña miles de millones de pesos que rebasan, con mucho, lo permitido por la ley [...]

Vicente Fox, sin recato alguno y sin cuidar la investidura presidencial, se dedicó a atacarnos y ha terminado por ser un traidor a la democracia.

[...] el Instituto Federal Electoral... se entregó por entero a la simulación electoral... ultrajando, pisoteando la dignidad, los sentimientos, la esperanza de millones de mexicanos [...]

De todo esto tenemos pruebas fehacientes. Por eso vamos a impugnar la elección ante el Tribunal Electoral. Vamos a demostrar, sin que quede ninguna duda, que se han violado los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad [...]

Vamos a pedir que se limpien las elecciones. Vamos a pedir que se cuenten los votos, voto por voto, casilla por casilla. Deben abrirse los paquetes electorales, porque hay evidencias contundentes de que nos quitaron sufragios para favorecer al candidato de la derecha.

Su propuesta central fue la convocatoria a dos movilizaciones masivas que, sin duda, tenían por objeto dar mayor volumen a su alegato. López Obrador citó a representantes de todos los distritos electorales del país para el miércoles 12 de julio, a fin de que manifestaran su inconformidad y se organizaran para acudir a la ciudad de México a la concentración del domingo 16 de julio. Ese día marcharían del Museo de Antropología al Zócalo, y ahí se celebraría su segunda asamblea informativa. Para esa ocasión, pidió a cada uno de los presentes que invitara a 10 personas más.

Después de dar las gracias, repentinamente recordó algo e intercaló: “Antes que nada, ¿aprueban ustedes esta propuesta para empezar así? [...] Que levanten la mano los que están de acuerdo con las propuestas. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias”.

Esta democracia de consulta inmediata, a mano alzada, no propicia la libertad de expresión, sino el fervor. Elena Poniatowska la explicó así en la crónica que publicó *La Jornada* al día siguiente:

La intimidad de la relación de Andrés Manuel López Obrador abarca toda la plaza. La conversación pública se vuelve privada. Cada hombre, cada mujer es su interlocutor personal. Andrés Manuel vuelve a consultar: “El domingo 16, ¿les gusta? ¿Les pa-

rece que salgamos desde el Museo Nacional de Antropología?” “Síiiii”. El “sí” ondea a través de todos los cuerpos, las banderas de México lo sostienen en el aire. “Síiiii”.

Las palabras de AMLO demostraron, una vez más, su convicción de la superioridad moral de su causa. Sin embargo, en el terreno legal, el discurso fue ambiguo. Por un lado, señalaba que los del 2 de julio habían sido unos comicios sin certidumbre, ni imparcialidad, lo que suponía la posibilidad de demandar al tribunal la no validación de la elección presidencial. Por el otro, hablaba de limpiar la elección mediante un recurso no contemplado por la ley: el recuento de todos los votos.

El Tribunal Electoral sólo puede resolver sobre aquello que expresamente le haya sido planteado por los partidos demandantes. Debido a ello, sólo cuando la CBT hiciese llegar los alegatos jurídicos a manos del TEPJF, podría éste determinar si existía o no sustancia para las acusaciones. Ése sería el meollo del asunto y no las expresiones beligerantes hechas en una plaza pública.

Ya para entonces Bolívar Huerta y Francisco Portillo, dos académicos de la UNAM, clamaban que se había realizado un fraude cibernético. Aseguraban que, por medio de un algoritmo dentro del PREP, se le habían quitado cientos de miles de votos a López Obrador para trasladárselos a Felipe Calderón. Para ellos, si se volvían a contar todas las boletas, voto por voto, les volverían a aplicar el mismo algoritmo, por lo que proponían realizar el recuento con sumadoras comunes. Esta especie tuvo mucho éxito entre quienes querían creer en el fraude y entre quienes siempre desconfían de los instrumentos modernos y prefieren hacer las cuentas mediante mecanismos que ellos dominan.

El domingo 9 por la noche, la Coalición por el Bien de Todos anunció que había presentado en la Junta Distrital Ejecutiva del IFE número 15, con sede en el Distrito Federal, a fin de que fuera turnada a la Sala Superior del TEPJF, la impugnación de 50.000 casillas en las que se hacían señalamientos concretos y que abarcaban los 300 distritos electorales del país. La CBT presentó un “recurso madre”, fundamentado en 850 cuartillas, con la argumentación total, mientras que en los

demás casos, en un formato tipo machote, sólo hacía señalamientos específicos.

El documento basaba su solicitud en hechos previos al 2 de julio —como la injerencia del presidente Fox en la elección— y cuestionaba el uso de recursos de diversos programas sociales con fines electorales. También hacía referencia a la desigualdad y parcialidad con las que habían actuado el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, y los demás consejeros, quienes, desde el punto de vista de la CBT, no habían detenido a tiempo la propaganda negativa en contra de Andrés Manuel López Obrador, o la participación abierta de organizaciones empresariales.

El escrito mencionaba, asimismo, las irregularidades que se registraron en el PREP, que si bien no tuvieron fuerza definitiva, resultaron un elemento que provocó desconfianza. Por último, la Coalición por el Bien de Todos acusaba a Ugalde de haber usurpado funciones del propio Tribunal Electoral, al haber declarado ganador a Calderón en la sesión de consejo general en la que se reportó la conclusión de los cómputos distritales.

La mayor debilidad de los recursos del PRD eran las pruebas aportadas al Tribunal Electoral que, en su mayoría, consistían en notas periodísticas, copias de spots de radio y TV, y documentos enviados por ellos mismos a diversas autoridades. Con sólo 70% de representación en las casillas, a la CBT le era imposible aportar la documentación requerida.

Los perredistas aclararon que no buscaban la anulación de la elección, aunque dejaron la puerta abierta a la causal de “nulidad abstracta” al reiterar su argumentación de que no había habido equidad, ni certeza en la elección. Por ello, arguyeron a favor de que se abrieran todos los paquetes electorales, para contar de nuevo todos los votos. El 11 de julio aparecieron en el periódico *Reforma* algunas reflexiones de Federico Reyes Heróles sobre el tema:

¿Cuál es el límite, dónde está la frontera que divide lo que es un acto jurídico responsable de una treta política para deso-

rientar a la opinión pública? ¿De verdad creen que hubo irregularidades intencionales en 50 mil de las 130 mil casillas? ¿De verdad creen que el PREP, el conteo y el cómputo distrital —cuyos resultados coinciden al dedillo— fueron manipulados? Piensan entonces que hubo un silencioso golpe de Estado en el IFE que involucró a cientos de servidores públicos, incluidos científicos de gran renombre, golpe de Estado del cual nadie se dio cuenta, por cierto, ni ellos. Una operación central de ese tipo involucraría a decenas de miles de ciudadanos. Allí el asunto no cuadra.

¿Estaba el PRD dispuesto en realidad a pedir la nulidad por la causal abstracta o incluso la anulación puntual de 50,000 casillas, aunque ello significara echar por la borda el mejor resultado electoral de su historia: 163 diputados, 37 senadores, 34 asambleístas, 14 delegaciones y la jefatura de Gobierno del Distrito Federal? ¿Realmente querían la elección presidencial o nada?

Para Miguel Ángel Granados Chapa, la doble petición no era incongruente, según explicó el 16 de julio en el periódico *Reforma*, pues en el Tribunal Electoral conviven dos órganos constitucionales con atribuciones diferentes, uno para resolver las impugnaciones y otro para declarar la validez de la elección.

### **La andanada contra el IFE**

Es natural que una elección de casi 42 millones de votos, decidida por apenas 243,934 sufragios, deje muchos lastimados. Los perdedores no tenían por qué resignarse hasta que hubiese una determinación del TEPJF.

La estrategia de la CBT para alegar el supuesto fraude consistió en descalificar al IFE y sus resultados, a fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considerara el recuento total de los votos o la anulación del proceso electoral.

Desacreditar a las autoridades electorales era fundamental, pues con base en esto, y no en datos específicos ocurridos en las casillas, se

pretendía sustentar el fraude electoral. Carlos Monsiváis lo expuso así en su editorial publicado en *La Jornada*, al día siguiente del mitin:

[...] un sector enorme que representa a los que sufragamos por López Obrador el 2 de julio, no cree en la imparcialidad y la eficacia de este IFE, y esto no es asunto menospreciable. Si se habla sin tregua de “concordia y tender puentes”, se sabe de antemano que esto no ocurrirá en una sociedad dividida, porque una parte de los votantes, efectivamente agraviados, está convencida del fraude y la elección de Estado.

Era evidente que el PRD y sus simpatizantes jamás creerían que el no haber diferenciado claramente en el PREP las casillas recibidas de las computadas fue sólo una decisión poco afortunada, que en nada alteraba los resultados. Para ellos se trató de un plan alevoso, destinado a fortalecer el albazo a favor de Felipe Calderón. El error de Ugalde, de declarar al candidato panista ganador, reafirmó su convicción.

De manera complementaria, y como parte de su estrategia, la CBT presionaría al TEPJF a través de manifestaciones masivas e impugnaciones cuantiosas, como lo aclaró Manuel Camacho en su artículo publicado en *El Universal* el 10 de julio. “La movilización social será un nuevo ingrediente de la política para los desenlaces y los tiempos por venir. Muchos mexicanos están convencidos de que hubo múltiples irregularidades en la elección y están dispuestos a movilizarse para que su participación se convierta en un factor clave para los desenlaces del proceso electoral y para lo que ocurrirá en los próximos meses.”

Si bien el propósito fundamental de la concentración en el Zócalo fue ejercer presión sobre el TEPJF, su éxito articuló el enojo de la izquierda. Éste y el de muchos priístas, que provenía de la convicción de que Felipe Calderón no hubiera ganado la elección si el presidente Fox y su gobierno no le hubieran dado el empujón definitivo.

El abierto proselitismo del presidente a favor de Calderón y el supuesto apoyo económico, con recursos públicos, a este candidato, enardecían a todos sus opositores. Los priístas, además, consideraban

que el gobierno había minado la candidatura de Roberto Madrazo, mediante una campaña de desprestigio y el estallido de conflictos en los estados donde el PRI esperaba una fuerte votación.

El domingo 9 de julio, mientras los noticiarios y los periódicos estaban saturados de imágenes impactantes de la concentración en el Zócalo y reproducían con amplitud lo dicho por AMLO, la respuesta al embate fue por demás débil. El presidente Fox, en las afueras de su rancho, contestó a los periodistas que trataron de entrevistarle: “Tengo el freno puesto”. “Hoy no hablo”. “Estoy en veda”.

Quien habló fue Televisa, que ese domingo en la noche transmitió el último capítulo de su muy exitosa serie cómico-política *El privilegio de mandar*. En esta emisión —que fue vista por casi 20 millones de televidentes—, el personaje de Carlinflas, que representa al pueblo, le pide a López Obrador que presente las pruebas del supuesto fraude electoral o que acepte el resultado de la elección.

Ante el vacío de poder creado por la ausencia de autoridad, los medios de información se dieron vuelo. Su fuerza y diversidad conjuntaron a un extenso universo de “opinionólogos” y de “expertos”. En este campo, destacó la radio, en la cual las entrevistas son en “tiempo real” —al mismo tiempo que los eventos que están reseñando— y el número de entrevistados puede ser casi infinito. La prensa y sus editorialistas ya tienen sus clientelas más o menos determinadas, y la televisión, por el tiempo limitado que se da a los noticiarios y la influencia de éstos, no ocultó su postura de apoyo a las instituciones. Así, los medios se ubicaron en el centro del debate. Leer el periódico, oír la radio y ver la televisión se convirtieron en una necesidad, porque la mayor parte de la gente se sentía confundida por los acontecimientos.

Las diferencias tenían que ver más con simpatías personales y con visiones sobre el modelo de desarrollo para el futuro que con las ofertas de campaña, pues quién podía diferenciar “primero los pobres” de “primero el empleo”. A fin de cuentas, eran dos presentaciones de la misma propuesta de solución a la misma demanda. Sin embargo, dialogar y discutir con los demás, aunque fuera a gritos, liberaba la tensión que generaba la incertidumbre.

El lunes 10 de julio, López Obrador ofreció una conferencia de prensa para presentar, finalmente, pruebas del fraude electoral. Se trató de dos videos que, en su opinión, comprobaban de manera irrefutable que en la elección del 2 de julio “participaron mapaches y hubo saqueo de urnas”. Ahí, AMLO expresó una generalización muy subjetiva: “Con un poquito de luz en la frente se puede concluir que la elección del 2 de julio estuvo plagada de irregularidades”.

En el primer video se mostraban escenas de lo que él llamó “embarazo” de una urna en una casilla en Salamanca, Guanajuato. En él, se observaba a un hombre depositar varias boletas en una urna. El segundo video se refería al distrito electoral de Querétaro, donde el presidente del Consejo Distrital se había negado a abrir los paquetes electorales, aun cuando el acta del cómputo registraba 400 votos en la elección para presidente a favor de Calderón y sólo 200 para candidatos a diputados y senadores.

Tras la exhibición de los videos, López Obrador manifestó la necesidad de abrir los paquetes electorales y contar voto por voto. “Estamos buscando el recuento, porque nosotros ganamos la elección presidencial con amplio margen”, declaró en esa ocasión.

La lógica de “esclarecer los comicios” promovida por AMLO cobró impulso. El rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, dijo:

[...] a todos, sin excepción, nos conviene que las dudas se disipen y corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asumir esa delicada tarea: aplicar la ley, pero no con un sentido restrictivo, sino de manera que garantice a plenitud el ejercicio de nuestras libertades en un sistema democrático.

Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación al IFE y una búsqueda de que no se cerrara la opción de la anulación de las elecciones.

Fuera de nuestras fronteras, el diario británico *Financial Times*, uno de los más influyentes del mundo en el sector financiero, destacó

en su editorial que las autoridades electorales mexicanas debían realizar un recuento total de la votación. El rotativo consideraba que si éste se hacía de manera apropiada, “resolvería de una vez por todas quién ganó la elección y enviaría un mensaje claro de que México es una democracia transparente”.

Luego, añadió: “si un recuento confirma su triunfo, eso ayudaría a Calderón a gobernar más efectivamente”, y, retomando el hecho de que el panista prometía buscar una reconciliación nacional, prevenía: “pero esto será difícil de lograr si un número sustancial de mexicanos pobres lo perciben como líder ilegítimo”.

El presidente Fox sostuvo otro punto de vista durante su primera actividad pública tras la “veda” que se autoimpuso por el proceso electoral. En Nuevo León, ante cientos de niños y jóvenes, el primer mandatario dijo que “por más que haya renegados”, el país avanzaba. Este comentario enfureció a los aludidos.

El martes 11 de julio, el periódico *Reforma* publicó en la parte central superior de su primera plana el rechazo que, desde la noche anterior, había manifestado el Instituto Federal Electoral a la versión de los videos presentada por el tabasqueño. El IFE aclaraba que no había habido irregularidad alguna. Respecto a la “urna embarazada”, explicaba que lo ocurrido era que a la hora del escrutinio se habían descubierto entre 8 y 10 boletas de la elección de diputados en la urna de la elección presidencial, por lo que el presidente de la casilla 2227 básica, ubicada en Salamanca, Guanajuato, había ordenado que se introdujeran en la caja correspondiente. El Instituto aclaró que las actas de ambas casillas contaban con las firmas de los representantes de la Coalición por el Bien de Todos.

El tinglado de López Obrador se cayó. Antes que reconocer su error, se volvió airado en contra de sus representantes de casilla. En conferencia de prensa ese mismo 11 de julio, afirmó: “No todos nuestros representantes actuaron con rectitud. Hubo mucho dinero de por medio, sabemos que les llegaron a ofrecer dinero a nuestros representantes”, que “no pudieron impedir la mapachería” y que sucumbieron “al poder del dinero y del Estado”.

Cuando los reporteros le preguntaron si tenía pruebas, AMLO respondió: “No... pero irán saliendo”. Ricardo Monreal lo secundó diciendo que no estaban obligados a convalidar lo firmado por sus representantes. Afirmación asombrosa, pues desdeñaba la importancia de los representantes de partido para convalidar la certidumbre en las votaciones, y ponía en duda la honestidad de sus propios representantes.

Al respecto, Juliana Barrón, quien fungió como representante de la Coalición por el Bien de Todos en la casilla 2227, en Salamanca, declaró que ella consintió el hecho, porque no se salía del marco legal. Todos los que estuvieron en la casilla fueron entrevistados varias veces por medios de información distintos, y siempre confirmaron la versión sobre la presencia de boletas de una elección en la urna equivocada y cómo el presidente de la casilla había depositado esas boletas en la correcta, a la vista de todos.

Este episodio fue un fuerte golpe a la credibilidad de López Obrador. Al recurrir a su ya conocida teoría de la conspiración contra los suyos, hizo evidente su convicción de que la gente es manipulable. Ahora resultaba que, desde su punto de vista, no sólo millones de ciudadanos fueron partícipes del fraude electoral o rebasados por él, sino que incluso sus partidarios eran indignos de confianza. ¿Cómo entonces justificar sus decisiones en plebiscitos a mano alzada?

En la conferencia de prensa del 11 de julio, López Obrador embistió también contra el IFE por haber comenzado a abrir, en su opinión, de manera ilegal, los paquetes electorales. Presentó pruebas documentales de un distrito de Tabasco en el que, “con el pretexto de información solicitada por el Partido Acción Nacional y la Coalición por el Bien de Todos”, se quitaron los sellos y se abrió la bodega en que se almacenaban todas las actas de votación del 2 de julio en esa localidad.

AMLO consideró que este hecho era preocupante, porque podrían darse mayores alteraciones. Pidió al ejército que no permitiera ninguna apertura más de paquetes, aunque el IFE lo solicitara, ya que sólo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía facultades para ello.

Al respecto, el representante de la CBT ante el IFE, Horacio

Duarte, precisó que esa apertura de paquetes era ilegal y Ricardo Monreal añadió: “nada justifica [ni el que ellos mismos lo hubieran pedido] que se abran paquetes electorales por autoridades administrativas, ya sea el IFE o las juntas distritales”.

En esa ocasión, López Obrador llamó delincuentes a los funcionarios del IFE y dijo que analizaría con sus abogados la conveniencia de presentar una denuncia contra el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde.

Para contribuir al desprestigio del Instituto Federal Electoral, *La Jornada* dio a conocer lo que a ojos de todos fue visto como un acto imprudente: en medio de la creciente polémica por su desempeño, la Junta General Ejecutiva del IFE había convocado a una sesión extraordinaria, “de manera urgente”, con el único punto en el orden del día de añadir una partida de 15 días a los dos meses adicionales de salario que ya se había aprobado entregar a consejeros, funcionarios y personal del instituto, por ser año electoral —periodo en el que el trabajo era más intenso.

Ese mismo 11 de julio, Gerardo Fernández Noroña, vocero de la CBT declaró: “El IFE está cada día peor. Esos señores [los consejeros electorales] tienen sus días contados”. Agregó que el PRD iba a promover la renuncia de todo el consejo general del Instituto.

El sentimiento de la izquierda quedó claro en el editorial institucional de *La Jornada* del miércoles 12 de julio: “[...] al agravio se añade la burla si se toma en cuenta la torpeza, la irresponsabilidad y la incoherencia que han exhibido los funcionarios electorales desde meses antes de los comicios del 2 de julio, defectos que en esa fecha, y en días posteriores, han resultado catastróficos”.

Durante esos días, la fachada de la casa de campaña de López Obrador fue tapizada con leyendas e imágenes alusivas al fraude electoral. Varias eran fotografías de Ugalde, con la inscripción “delincuente electoral”. El villano, muy al estilo de López Obrador, tenía nombre y rostro. Por ello, la andanada en contra de Luis Carlos Ugalde tocó poco a los otros consejeros electorales, aun cuando era sabido que las decisiones del IFE se tomaban por mayoría.

Preocupados por la avasalladora crítica a las instituciones, exmagistrados electorales, politólogos y exconsejeros del Instituto Federal Electoral afirmaron a *El Universal*, el miércoles 12 de julio, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía la fortaleza política y legal para calificar los comicios del 2 de julio y dar certeza y objetividad al proceso electoral. Además, descartaron que se fuera a dar la anulación del proceso.

Por su parte, Felipe Calderón designó a Josefina Vázquez Mota como responsable de conversar con otras fuerzas políticas y a Juan Camilo Mouriño como coordinador del equipo de transición. En general, la prensa comentaba positivamente el bajo perfil adoptado por el candidato triunfador, aunque para otros eso no era expresión más que de la falta de estatura de Calderón para ser presidente de México.

En la noche del día 11, Joaquín López Dóriga entrevistó a Andrés Manuel López Obrador en *El Noticiero* de Televisa. Ahí, el político tabasqueño afirmó que llevaría las movilizaciones tan lejos como la gente quisiera. AMLO repitió esta declaración en diferentes foros, lo que aumentó el ambiente de preocupación por sus acciones.

### **El recuento total de votos**

El miércoles 12 de julio en al menos 22 estados hubo manifestaciones de respaldo a Andrés Manuel López Obrador en las sedes distritales del Instituto Federal Electoral. La CBT entregó a los dirigentes estatales del PRD un manual de operación, en el cual se detallaba la organización de las movilizaciones y el traslado de los seguidores de AMLO al Distrito Federal para la asamblea informativa del siguiente domingo.

Ese mismo día, según el PRD, entre 40,000 y 50,000 ciudadanos salieron en caravanas hacia la ciudad de México, a fin de exigir al TEPJF que recontara los votos emitidos el 2 de julio, y para participar en la segunda asamblea informativa que encabezaría Andrés Manuel López Obrador el domingo 16 de julio.

En el Distrito Federal, aproximadamente 6,000 personas se reu-

nieron en una carpa que se instaló frente a la Catedral Metropolitana, la cual convirtieron en tribuna pública. Ahí se escucharon, además de la permanente consigna “¡Voto por voto, casilla por casilla!”, otras como: “¡Repudio total, al fraude electoral!”, “¡El pueblo callado, jamás será escuchado!” o, más significativamente, “¡Si no hay solución, habrá revolución!”.

Mientras tanto, en una entrevista concedida a *The Washington Post*, Felipe Calderón dijo estar dispuesto a un recuento parcial de los votos, pero descartó la revisión total, por considerarla “absurda e ilegal”, dado que eso era lo que habían hecho los ciudadanos el día de la elección.

En su conversación con el diario estadounidense, Calderón rechazó también que, para prevenir “la escalada de las tensiones”, pensara convocar a sus seguidores a que salieran a las calles a contrarrestar a los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. Concluyó que él respetaría el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cualquiera que éste fuera.

El jueves 13 de julio, el tema dominante del día fue la expulsión del Partido Revolucionario Institucional de Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y reciente exsecretaria general de ese partido.

Once días después de las elecciones, la Comisión de justicia partidaria aprobó, por unanimidad, el dictamen respectivo, el cual se fundamentó en el hecho de que la profesora Gordillo había promovido la formación del Partido Nueva Alianza e impulsado la candidatura presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Ella había sido clave para lograr el apoyo de los gobernadores del PRI en el norte del país a favor de Felipe Calderón. La grabación de su charla telefónica con el mandatario de Tamaulipas, Eugenio Hernández, dada a conocer por los perredistas el sábado anterior, era sólo un pequeño botón de muestra de la labor que había hecho contra su partido. Sin embargo, los gobernadores de Nuevo León, Natividad González Parás, y del Estado de México, Enrique Peña Nieto, trataron infructuosamente de parar esta determinación del CEN del PRI.

Elba Esther Gordillo fue una de los grandes ganadoras de la contienda electoral, porque demostró que podía darle vuelos a Nueva Alianza donde valía la pena: en el Congreso; pero también porque consiguió promover el voto útil en contra de Roberto Madrazo, contra quien estaban dirigidas sus maniobras.

El descalabro de Madrazo tuvo muchas explicaciones. La más evidente era la traición de Gordillo y de los gobernadores priístas del norte del país. Otra, que sostenía una corriente de opinión dentro del PRI, coincidía con Andrés Manuel López Obrador en que el gobierno de Vicente Fox había realizado manejos políticos complejos, sutiles y eficaces, y les había ganado la elección con imaginación y dinero. La tercera versión explicaba el revés del candidato priísta por la total descoordinación en las tareas internas del partido. Finalmente, había quienes veían en la apertura económica del país la pérdida de la ideología del PRI, y en la democratización, la pérdida de sus instrumentos de control político.

Al día siguiente de su expulsión, Elba Esther afirmó con enjundia: “Mucho me hubiera dolido ser expulsada por don Jesús Reyes Heróles, un grande del PRI; en cambio, me honra ser expulsada por esta camarilla de pequeños, que llevó al PRI al peor fracaso y descrédito de su historia”. Y remató de manera brutal: “¡Serví a México: Roberto Madrazo nunca será presidente de la República!”.

Elba Esther Gordillo acabó con Roberto Madrazo, pero el PRI, aunque muy reducido, quedó en una posición estratégica como partido “bisagra”, capaz de hablar con las diferentes partes en un Congreso muy dividido.

Dentro del PRD también se registraron problemas. Dirigentes partidistas se mostraron descontentos con los resultados obtenidos por las Redes Ciudadanas. Alberto Pérez Mendoza, encargado de coordinar la vigilancia de casillas, no había logrado reunir el número planeado de representantes de casilla. Además, hubo quejas porque los 300 millones de pesos dados a las Redes para que los entregaran a los ciudadanos que vigilarían las casillas no llegaron a su destino.

Para agravar la situación, el IFE dio un viraje que no ayudó a for-

talecer su imagen. Tras justificar la legalidad de la circular 071 —emitida para dar instrucciones a los Consejos Distritales para que abrieran algunos paquetes a fin de obtener la documentación requerida por la CBT y por el PAN— ordenó detener la ejecución de dichas instrucciones.

Miguel Ángel Solís, director ejecutivo del organismo, informó que:

[...] se dispuso la suspensión de apertura de paquetes. Preferimos plantearlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y solicitarle que ratifique la instrucción de aportar algunos documentos [...] Esto, quiero decirlo con toda claridad, se hace fundamentalmente no porque sea una irregularidad, sino porque el Instituto [...] quiere ofrecer su aportación a la tranquilidad de toda la sociedad mexicana, para esperar de esta forma, tranquila y armoniosa, el resultado que otorgue a la misma el Tribunal.

En un comunicado de prensa, el IFE explicó que, como había ocurrido en todos los procesos electorales anteriores, se habían tomado hojas de incidentes, escritos de protesta y actas de casillas, para integrar los expedientes que, por ley, se deben presentar ante el TEPJF, pero que se habían dejado intactos los sobres sellados con los votos.

Por su parte, López Obrador seguía a la ofensiva. En la entrevista que le hizo la periodista Carmen Aristegui en el noticiario matutino *Hoy por hoy* de la XEW, respondió que bajo ninguna circunstancia, ni aun si se contaban todos los votos y el resultado favorecía a Calderón, dejaría de llamarlo “espurio”, pues consideraba que la elección no había sido libre. En todo caso dijo, se abstendría de hacer movilizaciones, pero, advirtió, esa posibilidad no existía.

Para concluir la plática, AMLO fue al meollo del asunto. Insistió en el recuento total de los votos. Preguntó a la derecha política, y “a los verdaderos dueños de ese partido: ¿a qué le tienen miedo?, ¿por qué no contamos los votos? El que nada debe, nada teme. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene elementos para pedir una revisión de todas las casillas, puede ordenar que se abran todos

los paquetes. ¿Por qué no, por la salud de la República, se cuentan los votos y nos atenemos a ese resultado?”

El país parecía estar sobre un polvorín político y los magistrados tenían una responsabilidad de enormes proporciones. De su tino y sensibilidad para desactivar la bomba que les cayó en las manos dependería el futuro de todos los mexicanos.

Hartos de la presión política, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconocieron que diversos representantes de partidos o de alianzas buscaban influir en ellos para favorecer a sus candidatos presidenciales, a diputados federales o a senadores. Por ello decidieron que, con el fin de evitar presiones externas, no recibirían a nadie, ni tomarían llamadas telefónicas, hasta que quedaran integrados los expedientes correspondientes a la elección presidencial y de legisladores. También acordaron transparentar todo el proceso de calificación de las elecciones. Decisión que el periódico *El Universal* calificó de “blindaje”.

Esta reacción del Tribunal Electoral demostró que ya estaba bajo mucha tensión, lo cual era riesgoso, pues podía reventar o invalidar el último reducto institucional que quedaba. “Hay partidos, pero no hay dirigentes. Hay Presidencia de la República, pero no hay presidente de la República. Hay IFE, pero no hay consejeros. Hay legisladores, pero no hay parlamento. El momento es delicado”, apuntó René Delgado, el 15 de julio, en el periódico *Reforma*.

Era innegable que muchos ciudadanos, de ambos bandos, sentían que el país estaba al garete y que el único timonel que lo podía salvar era el TEPJF. Como se trataba de un organismo poco conocido entre el público en general, persistía la sensación de vulnerabilidad, al no saber cómo iba a actuar.

El sábado 15 de julio, se inauguró una exposición de carteles y pendones a favor del recuento voto por voto y en contra del fraude electoral en la Alameda, en Avenida Juárez y en el Palacio del Ayuntamiento, ubicado en el Zócalo. Fue una exposición cargada de enojo, lo cual se reflejó en las 153 obras, algunas de ellas realizadas por destacadas figuras de la plástica mexicana contemporánea, como Gilberto

Aceves Navarro, Manuel Felguérez, Vicente Rojo y José Luis Cuevas.

Ese mismo día comenzaron a llegar a la capital los contingentes ciudadanos, procedentes de diversos estados de la República, que iban a participar en la marcha programada para el domingo del Museo de Antropología al Zócalo.

En anticipación a la segunda asamblea informativa, Ricardo Monreal, uno de los encargados de la estrategia jurídica de la CBT, desglosó el argumento constitucional por el cual, según su interpretación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí tenía la atribución para optar por el conteo de cada uno de los votos:

La Constitución da base para que el Tribunal actúe de manera amplia en la interpretación del artículo 41, el cual señala que el proceso electoral tiene que observar cinco principios rectores: certeza, legalidad, objetividad, independencia y certidumbre. Estos cinco principios son los que rigen los comicios, y si uno de ellos faltara en cualquier proceso, incluso municipal o de un distrito local, y máxime de un proceso nacional, ha de considerarse que no se verificó una elección democrática y puede resolverse que se cuente voto por voto.

Como muestra de que no se habían cumplido estos principios en el proceso electoral, Monreal describió la forma de operar de Jumex, Sabritas, el CCE y la sociedad Ármate de valor, así como los recursos erogados por ellos en spots políticos, conforme al monitoreo realizado por la prestigiosa firma Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE). En él, se aclaraba que habían ayudado al PAN y a Calderón con pautas específicas y bien colocadas con un costo de casi 200 millones de pesos. Monreal consideró indispensable “tomar en cuenta, respecto a Televisa, todos los programas donde aparece la imagen de Calderón como integración de productos; tal es el caso del programa de Maribel Guardia, donde salían espectaculares de Felipe Calderón dentro del contenido del programa”. Puso también como ejemplo las declaraciones a favor de Calderón de protagonistas de la telenovela *La fea más bella*, que salieron al aire en un espacio con 10.83 puntos de rating.

El perredista añadió que en la estrategia jurídica que seguiría la CBT se exigiría el recuento voto por voto de las más de 130,000 casillas instaladas en el país, porque “es la única forma de confirmar quién ganó, y la coalición no se conformará con el dictamen de las 50,000 casillas impugnadas”. Con esto se reconocía que técnicamente no se habían impugnado la totalidad de las casillas.

Resultaba evidente que Andrés Manuel López Obrador había hecho suya la interpretación de sus asesores en materia electoral —Arturo Núñez, Ricardo Monreal y Horacio Duarte—, con respecto a que el TEPJF, como órgano de última instancia, podía interpretar o modificar sus propias leyes y, en consecuencia, hacer un recuento total de los votos. Prueba de ello es que puso toda su capacidad de presión política al servicio de esa idea.

AMLO y su equipo reiteraron en su discurso el argumento basado en el artículo 41 constitucional. Entrevistado a propósito del tema, un jurista de la UNAM, Lorenzo Córdova, explicó en la radio que el párrafo de la Constitución en que se enumeraban los principios aducidos se encontraba en la fracción tercera del artículo, dedicada a la integración y funcionamiento del IFE, mientras en la cuarta, que de modo expreso se ocupaba de cómo garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de las resoluciones electorales, se ordenaba establecer un sistema de medios de impugnación. Ese sistema, subrayó el jurista, era el que daba definitividad a las diferentes etapas de los procesos electorales y a él debían atenerse estrictamente los magistrados del TEPJF para emitir sus resoluciones. Eso suponía que el recuento de votos hecho por los ciudadanos era definitivo y sólo en caso de haber una impugnación válida, se podría abrir el paquete electoral correspondiente.

La posibilidad de que el Tribunal Electoral descalificara lo realizado por los ciudadanos ponía a muchos los pelos de punta. Lo escabroso del tema era cómo asegurar que se efectuara un recuento que satisficiera al perdedor. En vista de sus recientes acciones, parecía lógico pensar que si el recuento no le daba el triunfo, López Obrador trataría de imponer el recurso de fraude genérico. Por eso, muchos pensaban

que su solicitud de recuento buscaba demostrar que la elección había sido un “cochinero”, como él mismo señaló en varias ocasiones.



A las 9 de la mañana del 16 de julio, más de la mitad de la Plaza de la Constitución ya se había llenado. Otros participantes, muchísimos, se fueron ubicando en algún lugar por donde pasaría la marcha, que iniciaría en el Museo de Antropología. Había quienes por ningún motivo querían perderse esa reconfortante sensación de dejar temporalmente su individualidad para ser parte un grupo más amplio, y en este caso, enorme y sonoro.

Acompañado por sus tres hijos, López Obrador inició la marcha a las diez y media de la mañana en Chapultepec, en la Puerta de los Leones. A las doce y media llegó a la Alameda y no pudo seguir de frente, pues un tapón humano, de decenas de miles de sus partidarios, se había formado frente a las pantallas gigantes. Fue necesario que Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública de la capital, girara instrucciones para que un auto y una mancha de camisetas amarillas sacaran al candidato de allí. Una hora y cuarto más tarde, AMLO llegó al corazón político del país, en donde miles de simpatizantes ya lo aguardaban.

Durante la espera se oyeron miles de voces y lucieron centenares de carteles, mantas y playeras. El temor al desánimo, que posiblemente alentaba la agresividad, se exhibía en muchas camisetas y cartones que decían: “No estoy derrotado”, “No estoy frustrado. Estoy indignado por el fraude electoral” o “Yo también soy un peligro para México”. Otros carteles respondían así al comentario presidencial: “Somos miles de renegados y seremos más”.

Pero la competencia de “los malos de la película” estaba entre Felipe Calderón y Luis Carlos Ugalde. Un grupo vestido para velorio reeditó la tonada de “Martinillo” para vaciar en palabrotas su rechazo al candidato del PAN. A Ugalde le dedicaron miles de carteles con la leyenda “delincuente electoral”. Desde luego, no faltaron las críticas a los medios de información, a los que se calificaba de “vendidos” porque no asumían como propia su versión.

En el templete del Zócalo, la maestra de ceremonias fue la actriz Jesusa Rodríguez, quien ya no sabía qué hacer para entretener a la impaciente multitud. Ayudada por Héctor Bonilla y Daniel Giménez Cacho, exhibió *Un tal señor López*, el cuarto DVD producido por Luis Mandoki, en el que se describía el combate de López Obrador contra “las fuerzas del mal”. La Plaza de la Constitución empezó a estremecerse, como el teatro Metropolitano meses atrás cuando se estrenó el primer DVD de Mandoki: salía Calderón y se escuchaban mentadas de madre; aparecía el Peje —como llamaban a AMLO la prensa y sus seguidores— y se desgranaban aplausos.

A la una y media de la tarde, una avanzada de fotógrafos de prensa entró corriendo por el centro de la plaza, apurándose para tomar sus lugares y anticipando el arribo de AMLO. Doscientas mil gargantas rompieron a gritar: “¡Pre-si-den-te!” “¡Pre-si-den-te!”. En su entrada al Zócalo, a López Obrador lo arropaban con devoción sus seguidores. Alguien le aventó una rosa desde las alturas. Andrés Manuel la levantó, miró hacia arriba y sonrió. Ya para entonces el clamor de la multitud no dejaba escuchar nada más: “¡No estás solo..! ¡No estás solo..!”.

Allí se congregaron los escritores Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y Sergio Pitol; la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra; los actores Jesusa Rodríguez, Héctor Bonilla y Daniel Giménez Cacho; las cantantes Eugenia León y Regina Orozco; los gobernadores de Zacatecas, Amalia García Medina, y de Baja California Sur, Narciso Agúndez; el jefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas, y el candidato ganador de la jefatura de Gobierno, Marcelo Ebrard, además de dirigentes de los partidos que integraban la coalición.

Carlos Monsiváis dio lectura a un texto escrito al alimón con Sergio Pitol. En sus líneas desmenuzaban lo que ellos llamaron el empecinamiento panista en el linchamiento de López Obrador. Señalaban también que la violencia “ha partido de la derecha. Una violencia ideológica de mentiras y calumnias y difamaciones y fraudes hormiga” y reclamaban airadamente que se hubiese llamado al candidato de la CBT “un peligro para México”.

Monsiváis concluyó su lectura con una exhortación a los parti-

cipantes “No abandonemos nuestros votos en la fosa común de la resignación o la apatía. Voto por voto y casilla por casilla”.

El candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos empezó a hablar en punto de las dos de la tarde.

En su discurso, recalcó que, además de la actitud facciosa del Instituto Federal Electoral durante la campaña, de la manipulación de los sistemas de cómputo, de la falta de equidad en la compra de anuncios publicitarios en radio y televisión, del activismo ilegal de grupos de intereses creados, de la “guerra sucia” (la campaña publicitaria negativa), del uso de programas y recursos públicos en apoyo del candidato de la derecha, así como de la tozuda injerencia del presidente Vicente Fox, “ahora puedo decirles que se falsificaron los resultados en las actas de escrutinio y cómputo”.

AMLO explicó que la revisión hecha por la Coalición por el Bien de Todos mostraba que 60% del total de las 130,788 actas contenían “errores aritméticos. Lo aclaro más: hay cerca de 1 millón y medio de votos no sustentados en boletas electorales. O sea, las actas de escrutinio no reflejan la verdadera votación, porque apuntaron más o menos votos que los depositados en las urnas”.

López Obrador era constantemente interrumpido por la multitud, que en sus expresiones intercalaba la conocida consigna como en una letanía: “¡Por la estabilidad política, económica y financiera del país...! ¡Voto por voto, casilla por casilla!... ¡Para avanzar y dejar atrás la cultura política de la desconfianza...! ¡Voto por voto, casilla por casilla!”.

El tabasqueño afirmó contundente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía los elementos cuantitativos y cualitativos para ordenar que se abrieran los paquetes electorales. Una de las grandes mantas colocadas en uno de los costados de la plancha del Zócalo rezaba, como advertencia a los magistrados del TEPJF: “Estamos listos, ordene usted, señor”.

En un tono admonitorio que pareció derivar en la amenaza, AMLO sentenció:

Desde esta plaza pública, desde el Zócalo, hago un llamado al candidato de la derecha para que actúe de manera responsable y acepte sin ningún pretexto la revisión de las actas y el recuento voto por voto en todas las casillas del país. Si él sostiene que ganó, no tiene por qué negarse. El que nada debe nada teme. Le recomiendo por él, por sus familiares, por su gente más cercana, que piense, que piense muy bien, que la mancha de una elección fraudulenta no se borra ni con toda el agua de los océanos. Le recuerdo también que México, nuestro gran país, y su pueblo, no merecen tener un presidente de la República espurio, sin autoridad moral ni política.

Con el respaldo incondicional de sus simpatizantes, López Obrador propuso una serie de acciones. A partir de esa misma semana, dijo, se reforzarían los campamentos ciudadanos ubicados fuera de los 300 comités distritales, para evitar que se introdujeran o extrajeran de manera ilegal boletas de los paquetes electorales; se iniciarían las primeras acciones de resistencia civil pacífica, mismas que serían definidas por un comité ciudadano, y se celebraría la tercera asamblea informativa el 30 de julio, es decir, 15 días después, con otra marcha que iría del Museo de Antropología al Zócalo, en la que propuso duplicar la asistencia.

Embriagados por la adhesión de una multitud que sus partidarios calcularon en un millón de personas, los que estaban en el templete liberaron su emotividad. Eugenia León cantó los versos antiguos y modernos de “La paloma”, aquéllos contra la invasión francesa, éstos contra la imposición de Feli-pillo, así como una versión actualizada de “Amorcito corazón”, en la que la letra decía entonces: “yo quiero que Andrés Manuel sea presidente”. López Obrador se conmovió hasta las lágrimas. Finalmente, la plaza se vino abajo, extasiada, cuando la cantante entonó el Himno Nacional con todos los asistentes.

Podrá cuestionarse, haciendo cálculos técnicos, si realmente un millón y medio de mexicanos participaron en la marcha al Zócalo del 16 de julio, pero no hay duda de que el PRD demostró, una vez más, su gran capacidad de movilización de masas. El problema al que se en-

frentaban Andrés Manuel y el PRD era que las manifestaciones que generaban entusiasmo entre los ciudadanos más radicales tendían a alejar a los más moderados. Estos últimos percibían que López Obrador, con su discurso, estaba rechazando los principios fundamentales de la democracia y ello les confirmaba que era un peligro para el país.

### **La confrontación por diferentes caminos**

La polarización le daba a los mexicanos motivos fundados para estar nerviosos. Manipulados o no, esos centenares de miles de personas que participaron en el acto del Zócalo estaban convencidos del fraude. Ricardo Monreal, uno de los coordinadores de las famosas Redes Ciudadanas, ya había advertido que el movimiento iría “de menos a más” y su pronóstico se estaba cumpliendo. López Obrador aumentó su apuesta: amenazó abiertamente a Calderón y a su familia, y se propuso reunir el doble de personas en la tercera asamblea informativa, el 30 de julio. Resultaba claro que estaba convencido de que si no ocupaba la calle, el Tribunal Electoral no haría caso a sus reclamaciones.

Como sea, no deja de sorprender que, mientras Felipe Calderón señalaba que quería hacer suyas las propuestas de sus adversarios y lograr acuerdos con todas las fuerzas políticas, los simpatizantes de AMLO se manifestaban agraviados por el supuesto empecinamiento de Calderón en linchar a su candidato.

No soportaban que Calderón se comportara como presidente electo en espera de la confirmación legal de su triunfo, ni que el IFE y las autoridades gubernamentales aceptaran esto como un hecho consumado, cuando las elecciones aún no habían sido calificadas por el TEPJF.

Es evidente que los lopezobradoristas nunca pensaron que sus proclamas y acciones pudieran ser un agravio para Calderón, o para quienes votaron por él, incluso, para todos aquellos que no veían elementos objetivos para aceptar que el IFE y los ciudadanos hubieran cometido un fraude.

Tampoco pensaron que sus expresiones asustaran a otros. Al respecto, cabe citar la carta que el periódico *Reforma* publicó el 16 de

julio, enviada por María Castellanos, de la colonia Escandón en el Distrito Federal:

A mí también me asusta esta situación, tengo 60 años, nací en el Distrito Federal, he trabajado desde que tengo 18 años y pensar que a estas alturas de mi vida veo a mi país dividido, a gente que es “pobre, de los más necesitados” y que odia a los que tenemos una casa o departamento o un coche que compramos con nuestro esfuerzo, y piensa que por esa sola razón somos de “los ricos” y por lo tanto sus enemigos. Esto es grave y no lo debemos permitir [...] Qué podemos hacer [...] para demostrarle a este señor López Obrador que el otro 70 por ciento de los mexicanos no votamos por él.

Tras reunirse con los gobernadores electos de Jalisco, Morelos y Guanajuato, todos de filiación panista, Felipe Calderón le respondió a López Obrador, con respecto a las alusiones que hizo a su familia, de manera contundente: “Es por mis hijos y por los hijos de todos ustedes, por los hijos de todos los mexicanos, por su futuro, que no aceptaré chantajes ni amenazas”.

Y añadió: “Queremos que se respete la voluntad popular, la decisión que los mexicanos ya tomaron en las urnas, eso y no otra cosa es la verdadera defensa de la democracia, así que nadie pretenda ganar en las calles lo que no obtuvo en las urnas”.

Sobre un eventual recuento de votos, Calderón afirmó: “No depende de mí y no depende del PAN. Los ciudadanos ya los contaron y se recontó la votación donde fue necesario [en el cómputo distrital], no tengo ningún temor. Si el Tribunal encuentra causa legal y motivación para recontar los votos en los casos específicos, que lo haga; eso no hará sino corroborar el triunfo contundente que obtuvimos el 2 de julio”.

En los hechos, aunque López Obrador y sus partidarios exigieron en todos los foros públicos el recuento total de los votos, la CBT sólo impugnó ante el Tribunal Electoral 39% de las casillas.

El 17 de julio, todavía exultante, López Obrador aclaró durante una entrevista radiofónica con Miguel Ángel Granados Chapa: “Voy a decir algo que no he expresado... se habló mucho de fraude cibernético... [pero]... no está ahí el fraude, encontramos que está en los papeles, que es un fraude a la antigua... La información que tenemos es que se tomaron las casillas al estilo antiguo y se dieron estas falsificaciones”.

Al respecto, José Woldenberg —exconsejero presidente del IFE— comentó: “No me imagino siquiera la operación de compra. Habría que comprar a los funcionarios y a los representantes, un total de seis o siete personas por casilla. Y hacerlo en miles de casillas y que no se sepa, que ninguno lo denuncie. No lo creo. Yo sí confío en los ciudadanos”. En varias entrevistas con diversos medios de información, escritos y electrónicos, Woldenberg aseguró categórico: “Nadie ha podido probar, y no lo podrá hacer, que hubo fraude”.

En efecto, era sorprendente que una maquinación que debía haber significado la participación de miles, no hubiera dejado ni una huella con nombre y apellido; por ejemplo, algún representante perredista arrepentido de haber sido comprado. Con lo que un testimonio así hubiera podido valer, resultaba asombroso que nadie de los que supuestamente habían aceptado cometer fraude el 2 de julio aprovechara la situación y tratara de obtener altos beneficios con el conflicto poselectoral, documentando cuándo, cómo y con quién se había realizado la preparación del fraude. Nadie que, cuando menos, supiera de alguien que hubiera participado.

Pero la realidad y la percepción a veces no coinciden. Dos semanas después de la elección, López Obrador mantenía al país en vilo y estaba fijando la agenda. Los mexicanos tenían más incógnitas que certezas. Sabían que los cómputos distritales señalaban a Calderón como el candidato que había recibido la mayoría de los votos, pero no sabían quién sería presidente, pues no estaba claro si el candidato perdedor aceptaría el veredicto del Tribunal Electoral. Ni siquiera les quedaba claro si el 6 de septiembre habría presidente electo.

El 17 de julio los medios difundieron que Diego Valle, supuesto

estudiante de la UAM-Xochimilco y partidario de Andrés Manuel López Obrador, fue directo a Felipe Calderón, después de que éste saliera del Club de Periodistas, y le increpó a bocajarro: “¡Pinche marrano, corrupto!, ¿cuáles manos limpias hijo de tu puta madre?”, al tiempo que algunas mujeres encolerizadas exigían: “¡Voto por voto, casilla por casilla!”.

Al ver que el panista no detenía su marcha y que los elementos del Estado Mayor lo subían prácticamente en vilo a la suburban para protegerlo de una posible agresión física, el joven agresor intentó detener la camioneta a puntapiés y manotazos. Otras mujeres empezaron a zarandear el automóvil, mientras lanzaban consignas en contra del abanderado de Acción Nacional a la Presidencia de la República.

La intimidación de que fue víctima Felipe Calderón constituyó una acción condenable por sí misma y porque contribuyó a tensar los ánimos políticos, de por sí crispados.

En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, AMLO dijo no avalar el ataque, pero aseguró que había sido en “legítima defensa”. Si se contaban los votos, agregó, el país estaría en paz, pero “si quieren imponer al candidato de la derecha, se desataría mucha inestabilidad”.

Tan desafortunadas resultaron estas declaraciones que al día siguiente, martes 18, Jesús Ortega, coordinador de la campaña de López Obrador, aseguró: “No es verdad que Andrés Manuel no haya condenado acciones de esta naturaleza, lo que hizo fue tratar de explicar por qué suceden”. Por su parte, Fernández Noroña —vocero del PRD— afirmó que, en privado, López Obrador sí había lamentado la agresión; pero advirtió que Calderón “no puede ir por la vida llegando de manera fraudulenta a la Presidencia y pensando que nadie le va a reclamar nada [...]”.

En esa misma conferencia de prensa del 18 de julio, Jesús Ortega acusó al Consejo Coordinador Empresarial de actuar de manera facciosa e irresponsable al difundir spots en los que se aseguraba que los mexicanos ya habían votado y que sus sufragios ya habían sido contados. Al respecto, aseveró: “Al Consejo Coordinador Empresarial no le reconocemos representatividad de los empresarios del país, porque

ellos representan a una cúpula de dizque empresarios que tienen riquezas siempre arropados en el poder y, por lo tanto, están luchando por mantener esos privilegios mal habidos, están actuando irresponsablemente frente al país”.

Presente en el acto, Manuel Camacho añadió: “Aunque ellos tendrían el derecho a emitir su opinión [...] no tienen derecho a estar interfiriendo, como lo hicieron, en un proceso electoral no concluido, ni tendrían derecho de sacar spots en la televisión pagada. Eso está prohibido por el COFIPE”.

Pero parecía que violar la ley sí era válido sólo para algunos. Alejandro Encinas, al dejar colgados los pendones a favor del recuento de votos en el Palacio del Ayuntamiento, estaba violando las leyes locales de Desarrollo Urbano, Anuncios y de Salvaguarda del Patrimonio. Cuestionado por los reporteros sobre este asunto, Encinas declaró: “[...] nosotros cumpliremos nuestra responsabilidad como jefe de gobierno, ésa es mi tarea principal, pero también defenderé siempre mi derecho a dar mi punto de vista, a manifestarme libremente, lo he hecho toda mi vida, lo seguiré haciendo y si por dar mi punto de vista me quieren enjuiciar, pues no será la primera vez”.

Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, ese martes 18, que el “recurso madre” promovido por la Coalición por el Bien de Todos fuera asignado al magistrado presidente, Leonel Castillo. Esto marcó un hito, pues en los siguientes días, independientemente de las resistencias creativas, las críticas irónicas y los demás elementos que seguían enfrentando y distraendo a la población, se produjo un intenso tironeo entre el Tribunal Electoral y la CBT, el cual era central para el proceso judicial que determinaría la calificación de las elecciones. Como este proceso no puede separarse de su contexto, resulta conveniente tener presente el ambiente en que se dio.

El miércoles 19 de julio fue un día lleno de eventos indicativos de la confusión que vivía la sociedad. Comenzó con un acto de intolerancia. En la madrugada, al amparo de la oscuridad, fueron destruidos parcialmente a navajazos 53 carteles de pintores y escritores que formaban parte de la exposición para promover el recuento de los votos;

algunos de ellos incluían frases insultantes a los adversarios de AMLO. Cuatro presuntos responsables fueron detenidos, pero en la séptima agencia del Ministerio Público se decidió no iniciar la averiguación previa, porque no se había interpuesto una denuncia en su contra, y se les dejó en libertad.

Otro evento preocupante para la ciudadanía fue la “toma de Banamex”, como parte de la resistencia civil propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Para llevarla a cabo, el grupo “Resistencia creativa”, encabezado por la actriz Jesusa Rodríguez, organizó lo que fue una fiesta de desahogo para sus participantes y un hecho atemorizante para muchos otros. Elena Poniatowska la relata así en la crónica que publicó *La Jornada*:

A las siete de la mañana, mientras íbamos a la calle de Isabel la Católica, Jesusa [Rodríguez] aseguró que “los mexicanos creen que resistir es sentarse a resistir en su casa, y hay que innovar nuevas formas de resistencia pacífica” [...] “Mira estos nacos, mira estos léperos”, comentan los transeúntes en la calle de Isabel la Católica y Venustiano Carranza. Frente a las 13 puertas del bellissimo Palacio de Iturbide, más de 250 personas a las ocho de la mañana impiden el paso a los trabajadores de Banamex. “Les dimos el día libre”. “No hay trabajo, hoy hay descanso”. Mientras corean “voto por voto, casilla por casilla”, “repudio total al fraude electoral”, “banquerito, raterito” [con la melodía de “Martínillo”] y chiflan el resto.

En ese acto, se expresaron muchas consignas injuriosas más. Esos ataques al sector empresarial parecían suponer que la democracia sólo se lograría cuando se implantara un nuevo modelo de desarrollo. El supuesto fraude no era lo central, sino que el gobierno, una vez en el poder, aplicara una política económica claramente distinta.

A estas acciones, Felipe Calderón respondió, ese miércoles 19 de julio, convocando a todos los sectores sociales a una cruzada nacional para “pintar de blanco” a México y demostrar así que los mexicanos estaban a favor de la paz y repudiaban la violencia, el encono y el ren-

cor. Aprovechó la ocasión para manifestar que “como candidato ganador de la elección, ahora, como presidente electo después, y sobre todo como Presidente Constitucional, me comprometo a hacer mi prioridad de la superación de la pobreza y el combate a la desigualdad con ayuda de todos los mexicanos”.

Menos afortunado resultó para el panista el hecho de que la prensa destacara un tropezón de su coordinadora política, Josefina Vázquez Mota. En su afán por demostrar la adhesión de diversos grupos sociales a Felipe Calderón, Vázquez Mota arregló que el panista recibiera a Gastón Sáenz, quien dijo ser coordinador de asesores de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y aseguró que iba en nombre de Martín Esparza, dirigente del mencionado sindicato.

Al terminar la reunión, Vázquez Mota ejemplificó con esta visita las simpatías sindicales por el abanderado del PAN. Esto provocó un pequeño escándalo, pues horas después el dirigente del SME difundió un desmentido. En él, aclaró que se trataba de un jubilado que hablaba a título personal y que tampoco era coordinador de asesores, cargo que no existía en el sindicato.

Mientras tanto, los miembros de la Coalición por el Bien de Todos también tuvieron algunos reveses. En entrevista exclusiva con *El Universal*, Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, rechazó las acusaciones perredistas de haber traicionado la causa de Andrés Manuel López Obrador y descartó ceder ante quienes querían verlo fuera del PRD. Aseguró que el déficit de votos de ese partido no estaba en Michoacán, “como no está, por apretado que haya sido el resultado, ni en Zacatecas ni en Guerrero, donde también ha habido reclamos injustificados [...]”. Cárdenas Batel sugirió que mejor se buscara una explicación de por qué el PRD no crecía en Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Coahuila y Yucatán, estados a cargo de las Redes Ciudadanas.

Además, el movimiento lopezobradorista perdía simpatías en el extranjero. Ese mismo 19 de julio, *El País*, considerado como uno de los más influyentes periódicos españoles, señaló en su editorial, al referirse a la situación que vivía México, que “pretender trasladar la

reivindicación a la calle, manteniendo en estado de agitación a centenares de miles de personas, es una política irresponsable”. El diario aclaró: “En los países con instituciones solventes de arbitraje, las elecciones no se ganan en la calle”.

Dos días después, *The Economist* tituló: “Incivilmente resistente” su nota sobre México. En ella, destacó que: “Se ve improbable que el perdedor conceda nunca su derrota”, por lo que “la batalla por la elección presidencial de México será resuelta en las calles”. La revista asentó: “el desafiante tiene aún que ofrecerle a los mexicanos alguna prueba convincente de irregularidades”.

En México, el periódico *La Crónica* resaltó en su primera plana que, en su impugnación “madre” ante el Tribunal Electoral, la Coalición por el Bien de Todos había empleado frases del político José Stalin y largas citas textuales de la enciclopedia virtual Wikipedia, a fin de darle soporte a su exigencia de anulación de la elección.

El diario precisaba que, en la página 272 del texto de impugnación, se aseveraba: “Con lo que respecta al voto recordemos lo que expresó Stalin: ‘Aquellos que emiten los votos no deciden nada, aquellos que cuentan los votos lo deciden todo’”.

El mismo 19 de julio, en conferencia de prensa, Jesús Ortega y Manuel Camacho acusaron a Felipe Calderón de propiciar la violencia a través de una estrategia de miedo, porque con sus llamados a la paz estaba dividiendo a los mexicanos y generando la idea de que los simpatizantes de AMLO eran violentos.

El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Alberto Núñez, parecía darles la razón, pues declaró:

No es conveniente ni prudente, en estos momentos, que haya triunfalismo. Es necesario que Felipe Calderón actúe como un candidato que, de acuerdo con el Instituto Federal Electoral, ha tenido la mayoría de los votos, pero no es el presidente electo. Debe actuarse con gran prudencia en este caso, precisamente para no alebrestar los ánimos. Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diga quién es el ganador en-

tonces naturalmente todos, sea quien sea, festejaremos al próximo presidente de la República.

Al día siguiente, 20 de julio, el senador panista Javier Corral criticó que los empresarios estuvieran tratando de asumir una especie de arbitraje en el proceso electoral, función que no tenían. Al referirse a la petición que le habían hecho al virtual ganador de la Presidencia, Felipe Calderón, de frenar triunfalismos, Corral dijo que el PAN tenía todo el derecho y la legitimidad para informar públicamente a la sociedad sobre su diagnóstico del proceso electoral.

Por su parte, para convencer a la ciudadanía de sus acusaciones, el mismo jueves 20, al mediodía, López Obrador, acompañado de Claudia Sheinbaum, llevó al noticiario de Carlos Loret de Mola, en los estudios de la XEW, 21 cajas que contenían 30,000 actas. Esta voluminosa entrega física —que fue objeto de numerosas fotografías publicadas en la prensa— era una muestra de las 72,000 actas de escrutinio y cómputo con las que pretendía probar el llamado “fraude aritmético” cometido en las elecciones del 2 de julio.

Durante la entrevista, AMLO destacó que 60% de las actas tenían errores aritméticos. Sin embargo, no mencionó si existía o no un sesgo determinado en esos errores, tema que había sido central en el recuento distrital, en el que se demostró que los errores fueron aleatorios, por lo que no alteraron el resultado final.

Jesús Ortega y Manuel Canacho complementaron la estrategia de denuncia. Ese mismo 20 de julio, en conferencia de prensa, señalaron que la CBT había perdido toda la confianza en el Instituto Federal Electoral, por lo que estaba elaborando un paquete de denuncias judiciales contra todos los consejeros de ese organismo.

El viernes 21 de julio, durante una larga conversación con el periodista José Gutiérrez Vivó, difundida por radio y televisión por cable, AMLO salió con la novedad de que el fraude se había dado en la transmisión de datos de los conteos distritales, idea que, por cierto, no tuvo mucho éxito. Luego, reiteró lo que le había dicho días antes a Carmen Aristegui: si Felipe Calderón Hinojosa aceptaba que se limpiara la elec-

ción a través de un recuento voto por voto en las más de 130,000 casillas del país, se comprometía a detener las movilizaciones y a atenerse al veredicto del Tribunal Electoral.

Gutiérrez Vivó le preguntó entonces que si perdía ese recuento lo diría abiertamente a la nación. López Obrador contestó: “No voy a aceptar la elección, porque es una elección de Estado. Lo que acepto es no hacer ninguna movilización en lo que corresponde al proceso poselectoral, es decir, hasta el primero de diciembre”. López Obrador anunció que, después de la toma de posesión, seguiría en la lucha; por ejemplo, dijo, crearía una fundación “para defender el proyecto alternativo de nación, para luchar por mis ideales, por mis principios, para defender a la gente humilde”.

Mientras los dirigentes nacionales del PRD estaban concentrados en la contienda poselectoral emprendida por AMLO, los conflictos internos se agravaban en Tabasco a unos días que iniciara campaña el candidato perredista a la gubernatura, Raúl Ojeda Zubieta. Este personaje, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, estaba impugnado por la corriente de los fundadores del PRD local, que encabezaba el exdirigente estatal, Auldárico Hernández.

El domingo 23 de julio, en Teapa unos 200 militantes del partido del sol azteca se enfrentaron, por casi media hora, tras suspender por la fuerza una convención de delegados municipales para elegir al candidato a la alcaldía. Dos días antes, en Centla, en protesta por la imposición de candidatos a alcaldes y diputados, se interrumpió el procedimiento también con hechos de violencia.

Otro revés para Andrés Manuel fue que el periódico estadounidense *The New York Times* publicó: “Los analistas dicen que el señor López Obrador pudo desmotivar a sus simpatizantes al insistir hasta el cierre de campaña en que tenía diez puntos a su favor y ganaría fácilmente”. Además, el periódico planteó: “Un problema ahora para el señor López Obrador es cómo mantener el impulso de su movimiento para [esperar] una decisión de los tribunales, que podría tomar semanas, sin que sus simpatizantes recurran a la violencia”.

## La escalada de tensiones

La esencia del enfrentamiento entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Coalición por el Bien de Todos, al que se hizo mención antes, fue que el primero señaló que los documentos que se le habían entregado estaban incompletos y aclaró que si no tenía la documentación necesaria no podría resolver las impugnaciones. La CBT, molesta, fue completando los documentos, pero aprovechó cada paso para respingar. La tensión iba en aumento.

Éstos fueron los hechos: el martes 18 de julio, una semana después de que la Coalición por el Bien de Todos criticara al IFE por abrir los paquetes electorales y acusara a los funcionarios del Instituto de violar la ley, el Tribunal Electoral solicitó que se abrieran los paquetes, para sacar la documentación requerida. A fin de evitar suspicacias, determinó que esto se hiciera ante los integrantes de los consejos respectivos y los representantes de todos los partidos y coaliciones, que deberían firmar el acta que daría fe del procedimiento y de que los sobres que contenían los votos se mantuvieron sellados.

El jueves 20 de julio, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enviaron oficios a los partidos políticos para hacerles saber que más de 50% de los recursos de impugnación interpuestos con motivo de la elección presidencial registraban inconsistencias. En ellos, los magistrados señalaban que faltaban pruebas documentales de sustento e, incluso, que algunas impugnaciones carecían de los escritos de incidentes y de protesta — los cuales necesariamente tenían que presentar los representantes de los partidos al término de la jornada electoral. El Tribunal les concedió plazos de 24 y hasta 72 horas, una vez hecha la notificación oficial, para cubrir en su totalidad los requisitos legales de los juicios de inconformidad.

El viernes 21 de julio, el Tribunal Electoral solicitó a la CBT escritos formales de protesta de 25 casillas. La Coalición por el Bien de Todos le respondió que había solventado ese requisito en “más de 50% de los casos” y que, en aquellos en los que no lo cubría, se debía a que

no lo juzgaba necesario, pues sólo era indispensable cuando se solicitaba la nulidad de alguna casilla. Este constituía un punto delicado, porque en mayo de 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado que el escrito de protesta era un documento indispensable para que procedieran los juicios de inconformidad en las elecciones federales.

El mismo viernes 21, en Jalapa, la sala regional del Tribunal Electoral confirmó —por unanimidad— los resultados de la elección de diputados federales en 14 distritos ubicados en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo. En dos de los casos impugnados, amonestó a los representantes de la Coalición por el Bien de Todos y de la Alianza por México, en Oaxaca y Veracruz, respectivamente, por presentar pruebas subjetivas y sin sustento jurídico en sus alegatos, con lo que “cayeron en abusos, actitudes irregulares, poco serias y frívolas”.

El viernes 21 de julio, el IFE presentó un informe circunstanciado de 543 cuartillas, que luego entregaría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En él, aseguraba que su actuación había estado apegada a derecho y rechazaba los 21 agravios generales esgrimidos por la Coalición por el Bien de Todos en su “recurso madre”, para impugnar más de 50,000 casillas.

Al día siguiente, sábado 22, Horacio Duarte descalificó ese informe circunstanciado. Al respecto, dijo: “iRetrata al IFE tal cual, como el órgano ciego, omiso y autista que fue durante el proceso electoral!”.

Ese mismo sábado, la CBT entregó al TEPJF un primer paquete de pruebas adicionales para reforzar sus argumentos en el juicio de inconformidad con el que buscaba el recuento de todos los votos emitidos el 2 de julio. Informó que una segunda tanda sería entregada al día siguiente y estaría conformada por documentos relativos a la “apertura ilegal” de paquetes. Sin embargo, trascendió que en dichas pruebas se incluían recortes de un diario estadounidense en el que se había publicado propaganda a favor del panista Felipe Calderón Hinojosa los tres días previos a la jornada electoral; un casete con la conversación telefónica entre Elba Esther Gordillo y el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández; el oficio de respuesta de la Fiscalía Especializada

para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), en el cual negaba a la CBT copias de las averiguaciones previas relacionadas con el caso de la empresa Hildebrando. En fin, documentos diversos que no se referían a hechos ocurridos durante la jornada electoral.

Como sea, resultaba importante que se estuvieran cumpliendo, a regañadientes, pero con el mayor rigor posible, los plazos señalados por la ley. ¡Lástima que la película no fuera muda!, pues la banda sonora de las acciones de AMLO y sus seguidores, llena de bravatas, descalificaciones e improperios, sólo conseguía crispas el ambiente y preocupar a la sociedad.



La batalla poselectoral acaparó la atención de los medios. Los análisis de la inquietante situación empezaron a inundar los periódicos. Juan Enríquez en un artículo publicado en el periódico *Reforma*, el lunes 24 de julio, señaló:

[...] para la mayoría en el país, y especialmente para los pobres, lo legal no es sinónimo de justicia. A menudo lo llamado legal es sinónimo de corrupción, abuso, arbitrariedad y a veces violencia... Derecha e izquierda, criminal, oligarca y revoltoso llevan años amparándose, justificando, defendiendo y manteniendo posiciones que podrán ser legales, pero que son profundamente ilegítimas. Y aquí precisamente está el meollo del lío electoral, por eso es tan delicado que Calderón refriegue una y otra vez su triunfo basándose en lo legal.

Porque a muchos, legalmente, los han jodido en salario, empleo, prestaciones, vivienda, salud, pensión y educación... Es gente desesperada que al no poder albergarse en lo legal e institucional, personaliza en un caudillo su hartazgo y furia... El lío de fondo no es López Obrador. Él es un síntoma... Traemos entre manos un país profundamente dividido entre el siglo XXI y los millones que se sienten profundamente agraviados por lo moderno, lo legal, la apertura y la privatización. Ésta es batalla que se da a diario... en las diversas regiones de los tantos Méxicos.

La opinión de Juan Enríquez es válida en términos sociales, pero no de eficiencia política. En contraste, Jesús Silva-Herzog Márquez plantea, en ese mismo periódico el mismo día:

López Obrador no está dotado de paciencia y está dispuesto a quemar todos sus recursos, a quemarse él mismo, para impedir la asunción de Felipe Calderón... La inmolación de López Obrador está poniendo en riesgo los enormes avances del PRD no solamente como una opción exitosa de gobierno, sino como una organización confiable e institucional...

Nadie dentro de ese partido ha logrado construir un argumento de sensatez para los días que corren. Todos han seguido la obsesión del caudillo. Es una mala señal el que un partido no encuentre en su propia diversidad los reflejos de moderación y racionalidad que necesita. López Obrador se incinera y está dispuesto a quemar también uno de los grandes avances de México en su historia reciente. El complejísimo, barroco, carísimo pero a fin de cuentas confiable dispositivo electoral. No es un pleito contra el presidente del IFE, es un manifiesto contra los ciudadanos que organizaron y contaron los votos de millones de mexicanos.

En el campo lopezobradorista estaban decepcionados porque, a pesar de su esfuerzo, un número cada día más importante de expertos, de comunicadores y de miembros informados de la sociedad dudaban de la necesidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creara jurisprudencia para ordenar el recuento total de los votos, que veía AMLO como la única salida.

El lunes 24 de julio, César Yáñez entregó, a las cuatro y media de la tarde, en la casa de campaña de Felipe Calderón, una carta de López Obrador. En ella, señalaba: "Lo más conveniente para México es que ambos aceptemos el recuento de votos y nos comprometamos a respetar los resultados". Luego, AMLO le decía a Calderón que de no aceptar esa propuesta y resultar ratificado su triunfo en la contienda, "quedaría para siempre la sospecha o la certidumbre de que usted no ganó en las

urnas y de que hubo un fraude en la elección”. En ese caso, “usted será un presidente espurio y nuestro país no merece ser gobernado por alguien que no tenga autoridad moral ni política”.

Además de argumentarle al aspirante del PAN la conveniencia del recuento y reiterarle su ofrecimiento de abstenerse de realizar movilizaciones populares si ese cómputo favorecía a Calderón, López Obrador le reprocha la “calumnia” de considerar como “violentos” a quienes simpatizaban con la CBT y de ubicar a los votantes por la causa blanquiazul como los “pacíficos”. Tales calificativos sólo aumentaban la crispación política y social, “y en los hechos se vuelve un llamado al enfrentamiento entre mexicanos”.

AMLO concluía su misiva con un reto: “El que nada debe, nada teme. Usted tiene la palabra; espero su respuesta”.

La contestación de Calderón era totalmente previsible, pues ya había expresado su punto de vista al respecto. Sin embargo, el sentido de la carta de López Obrador era fortalecer el concepto de que “el que nada debe, nada teme” que, como buen dicho popular, sustentaba en la mente de todos los que no se preocupaban por las complejidades legales y prácticas del recuento, la idea de que efectivamente había habido fraude. Además, subyacía en la solicitud la amenaza de que si no se recontaban todos los votos el conflicto se iría a enfrentamientos en las calles, al desbordamiento de la fuerza pública y al dilema de la intervención de las fuerzas armadas.

Cinco horas después de que se entregó la carta de López Obrador en la casa de campaña del panista, Rogelio Carbajal, secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, llevó la respuesta a la sede de la Coalición por el Bien de Todos.

En ella, el candidato del PAN a la Presidencia de la República aseguraba que la contienda del pasado 2 de julio había sido equitativa y que las elecciones federales habían sido limpias, libres y democráticas.

Sobre la solicitud que le hiciera López Obrador, Calderón contestó:

La decisión de recontar votos no corresponde a los candidatos

ni a los partidos, sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, en ejercicio de sus atribuciones, aplicará la ley. Al final del proceso dictará sentencia definitiva a la que todos debemos someternos. La petición que usted ha formulado no depende de lo que los candidatos opinemos, sino de lo que la ley dispone. En mi caso respetaré escrupulosamente la resolución que el tribunal determine respecto a su petición y, desde luego, acataré lo que resuelva respecto de las impugnaciones presentadas...

Le reitero mi invitación para que dialoguemos sobre el momento tan importante que vive el país. Lo invito con sinceridad a que, por encima de nuestras divergencias, identifiquemos nuestras coincidencias. Lo invito a hacer política genuina que nos permita edificar el proyecto común que es México.

Calderón se mantenía en su posición de candidato triunfador: sobrio y dispuesto a cumplir lo que resolviera la autoridad electoral. La CBT, por su parte, no perdía ni un minuto en su campaña por demostrar públicamente el fraude. El mismo lunes 24 de julio, Claudia Sheinbaum, Arturo Núñez, Horacio Duarte y Ricardo Monreal ofrecieron una conferencia de prensa en la que aseveraron que, en el análisis realizado por la CBT, se habían detectado “errores aritméticos” en 72,197 casillas, lo que reforzaba su exigencia de volver a contar cada una de las boletas emitidas el día de los comicios.

Abrir esos paquetes tendría sentido si en ellos hubiera habido alguna evidencia de dolo o error en el cómputo de las casillas. Pero el PRD invocó errores en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, y sólo de la elección presidencial. Estas discrepancias numéricas resultaban de cotejar las sumas hechas por los ciudadanos con el número de ciudadanos que votaron o que estaban inscritos en la lista nominal. Los errores cometidos eran explicables a la luz del nivel educativo de la sociedad y de que el día de la jornada electoral es agotador. Empieza a tiempo para montar la casilla y abrir la votación a las ocho de la mañana y termina, cuando temprano, a medianoche, cuando se entregan en el comité distrital los paquetes sellados con los votos y todas las actas

firmadas por todos los funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos.

Los perredistas clasificaron en cinco tipos los errores aritméticos, todos ellos ajenos a conductas ilegales, como serían la adulteración de votos o la falsificación de actas. Al cuantificarlos, concluyeron que más de 1'600,000 votos en la elección presidencial carecían de sustento en boletas electorales, lo que representaba 3.88% de la votación total. El cómputo oficial del Instituto Federal Electoral ubicó en 0.58% la diferencia entre el candidato del Partido Acción Nacional y el de la Coalición por el Bien de Todos.

En entrevista radiofónica con Radio Red, Camacho Solís apuntó que el "límite de decisión de salida" para descartar la nulidad de los comicios era el recuento de votos. Sin embargo, reconoció: "Los magistrados pueden decidir que la elección estuvo suficientemente bien para declararla válida y darle a Felipe Calderón su constancia de presidente electo [...] Ésa es la idea más pesimista para nosotros [...]".

Sintiendo que el agua les llegaba al cuello, en conferencia de prensa, Arturo Núñez, miembro del equipo jurídico de AMLO, fue más a fondo. Dijo: "Ante el escenario de un presidente ilegítimo que no pueda gobernar, es mejor anular la elección presidencial, sin lugar a dudas".

De darse, la anulación de los comicios obligaría a que el nuevo Congreso eligiera a un presidente interino el primero de diciembre y a que se efectuara otra elección presidencial a más tardar 18 meses después. La promoción de esta tesis hizo que circularan las quinielas. Los dos punteros fueron: Cuauhtémoc Cárdenas y Juan Ramón de la Fuente.

A diferencia de lo que pregonaban sus defensores, ese procedimiento debilitaría a las instituciones y ampliaría el margen de confrontación, pues obligaría a construir en poco tiempo una nueva institucionalidad electoral confiable para ambos bandos, lo que no resultaría nada fácil, por no hablar de la inestabilidad política, social, económica y administrativa que una situación así podría generar.

Vendría después la selección de un presidente interino, que debería contar con el aval de las fuerzas políticas más importantes. Ahí era factible que funcionara la coalición PAN-PRI, que tendría la mayoría

calificada en ambas cámaras del Congreso. Pero la polarización, lejos de amainar, crecería de nuevo, pues como la ley no impedía que los mismos candidatos contendieran en los comicios constitucionales, éstos llegarían prácticamente en estado de guerra y no de simple rivalidad política. Todo apuntaba a que ese escenario resultaría muy peligroso.

Ricardo Monreal desmintió que el PRD estuviera auspiciando el interinato en la Presidencia. “Es totalmente falso que estemos promoviendo el interinato, no es así, no se ha discutido, no se ha comentado y nuestra única propuesta es el conteo voto por voto, así es que no nos van a distraer”, dijo. Sin embargo, aclaró que el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, amigo de López Obrador, era un posible candidato a presidente interino, en el eventual caso de que el Tribunal Electoral resolviera la anulación de los comicios.



Entre tanto, para el PRI y el PAN, la vida institucional seguía su curso. El mismo 24 de julio, los diputados priístas electos acordaron nombrar a Emilio Gamboa Patrón como su coordinador parlamentario. Manlio Fabio Beltrones, por su parte, fue elegido coordinador parlamentario de los senadores del tricolor. Días después, los legisladores panistas eligieron a Héctor Larios y a Santiago Creel como coordinadores de las bancadas de su partido en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente. Los perredistas, en cambio, concentrados en apoyar las acciones de AMLO, no tenían tiempo para esas cuestiones.

La vertiente jurídica de la contienda poselectoral estaba al rojo vivo y la de la “Resistencia creativa”, organizada por Jesusa Rodríguez, también cobraba vuelos, alcanzando tonos de ópera bufa.

Ese lunes 24 de julio, según narran Emir Olivares Alonso y Matilde Pérez en una crónica publicada en *La Jornada*, la “Resistencia creativa” organizó un tour turístico por “el mundo de los ricos”. Desde las ocho de la mañana se dieron cita en el Hemiciclo a Juárez 200 manifestantes. Mientras esperaban a que se congregara todo su contingente, los participantes aprovecharon para lanzar consignas reclamando

el reconocimiento del triunfo del tabasqueño en los comicios del 2 de julio y criticando a Felipe Calderón. Cada vez que un automóvil con propaganda a favor del PAN se acercaba, los perredistas lo rodeaban, gritando insultos y reclamos.

En un momento dado, Jesusa Rodríguez, vestida con “casco militar, botas trotamundo y uniforme de boy scout”, ordenó colgar un moño tricolor —símbolo de la resistencia civil— en el monumento al Bénérito de las Américas. Afirmó que si el también considerado padre del presidencialismo mexicano viviera, apoyaría a López Obrador. Entonces, elementos del Agrupamiento Femenil y de Protección Ciudadana de la (SSP) del Distrito Federal intentaron impedir la acción, pero Jesusa Rodríguez alegó que tenía permiso del secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, según declaró la agente Lilia Vázquez.

A las once y media de la mañana, los manifestantes se dirigieron a donde los esperaban los ocho metrobuses y los automóviles que los llevarían a Santa Fe. La caravana partió hacia su destino, siempre escoltada por patrullas de la SSP del Distrito Federal. Aprovechando esta protección, el convoy se pasó los altos que encontró en su camino.

La primera escala de la “visita guiada” a Santa Fe para protestar contra “los adinerados” fue la Universidad Iberoamericana. Ahí, la cantante Regina Orozco explicó que el dinero no era malo, sino que la maldad radicaba en el uso que se le diera. “Hay gente estúpida que no sabe qué hacer con el dinero y lo utiliza para explotar. No sabe repartirlo, porque tiene un grado menos de evolución que nosotros”.

Luego, los manifestantes se pasearon en la zona corporativa, donde se encuentran empresas como Bimbo, Banamex, Mercedes Benz, Suzuki, Hewlett Packard y Bancomer.

Jesusa Rodríguez y Regina Orozco calificaron a la zona de Santa Fe como un “insulto para los pobres [...] Éste es el México de la fantasía”. El recorrido por Santa Fe continuó. Los metrobuses llevaron a los perredistas al Centro Comercial Santa Fe, que fue el platillo fuerte de la gira. Ahí, las huestes de Jesusa Rodríguez caminaron por la plaza vestidos de amarillo y portando carteles y banderines, mientras lanzaban múltiples consignas y gritos. Frente a El Palacio de Hierro, Jesusa hizo

un plantón y dio un mensaje florido en contra de los empresarios que, según ella, habían sido los ejecutores del fraude electoral y estaban involucrados en el conflicto poselectoral. Desde luego que, en ningún momento, hizo referencia a que López Obrador fue un activo promotor de esta zona.

Los actos de esta “Resistencia creativa” fueron múltiples y se desarrollaron en empresas, bancos e instituciones: el martes 18 de julio en el Consejo Coordinador Empresarial; el miércoles 19 en Banamex; el jueves 20 en Mexicana de Aviación; el viernes 21 en Sabritas; el lunes 24 en Santa Fe y en la Bolsa Mexicana de Valores; el martes 25 en el Hotel Fiesta Americana Reforma; el miércoles 26 en Wal-Mart, Plaza Universidad y Televisa; el jueves 27 de nuevo en la Bolsa Mexicana de Valores, y el viernes 28 en la estatua de Manuel Clouthier, Maquío —candidato panista a la Presidencia en 1988, ya fallecido— y las oficinas de Halliburton en México.

El martes 25 de julio, la resistencia civil adquirió una nueva modalidad. Candidatos electos perredistas y simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador empezaron a realizar ayunos de 24 horas y organizaron un plantón frente a las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir que se recontaran todos los votos. La actriz María Rojo, senadora electa por el Distrito Federal, al comenzar su ayuno de 24 horas, aclaró que no se trataba de una cuestión radical, sino de exigir legalidad en la elección. No obstante, esta exigencia era a gritos, con insultos y con el coreo de consignas.

La tarde de ese martes, la Coalición por el Bien de Todos interpuso, ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia penal contra todos los integrantes del consejo general del IFE por no haber impedido la guerra de spots de Sabritas, Jumex, el Consejo Coordinador Empresarial y la asociación Ármate de valor, así como contra Demetrio Sodi —candidato panista a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal— y Víctor González Torres —conocido como doctor Simi, quien contendió por la Presidencia de manera independiente—, a los que también acusó de probable defraudación fiscal y lavado de dinero.

Los perredistas sostuvieron que los acusados habían violado las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que impedía a las personas físicas o morales extranjeras, o a las empresas mexicanas de carácter mercantil realizar donativos a partidos políticos y contratar tiempo en los medios para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas.

Felipe Calderón Hinojosa, por su parte, recibió, ese martes por la noche, el respaldo de diferentes corrientes políticas agrupadas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezadas por Elba Esther Gordillo. En ese acto, al tomar la palabra, la profesora Gordillo se refirió al panista como “presidente electo”. Llamó a reformar el sistema educativo, el cual, afirmó, estaba desvinculado de la realidad social. Más tarde, cuando los periodistas le preguntaron quién había ganado la elección presidencial, Elba Esther contestó: “Ganó ésta”, mientras levantaba su mano izquierda. Luego, añadió: “y ganó ésta”, al subir la derecha. Sus expresiones y gestos fueron ampliamente criticados e, incluso, ridiculizados por la prensa.

Como brisa en el caldeado ambiente fueron las declaraciones de Roger Bartra. Por fin, un académico de izquierda de gran prestigio se animó a criticar la posición de los principales actores del conflicto poselectoral. En una entrevista realizada por Ricardo Pacheco y publicada en el periódico *La Crónica* el miércoles 26 de julio, Bartra afirmó:

Lo que más me duele, porque yo vengo de ahí, soy un hombre de izquierda, es el comportamiento del Partido de la Revolución Democrática y sus aliados: me parece muy conservador y con importantes facetas antidemocráticas. Está poniendo en tensión las cosas. Aunque no cabe duda que también los panistas tienen malos humores; hay algunos ultraderechistas que no se acostumbran a vivir en espacios abiertos, democráticos, que vienen de las catacumbas. Y no se diga el PRI, éstos son la representación misma del antiguo régimen. A ellos les ha costado muchísimo trabajo, posiblemente más que a los otros, adaptarse a las condiciones democráticas.

A pregunta expresa de Ricardo Pacheco sobre las acciones y programas de López Obrador, Bartra respondió:

Lo que encabeza AMLO es un fenómeno de populismo. Yo creo que es un fenómeno populista caciquil; él suena más como cacique, como caudillo, pero le llamo conservador porque de alguna manera recupera muchos de los hábitos y de las ideas del antiguo régimen... Es la "dictadura perfecta" de la que hablaba Mario Vargas Llosa...

Desgraciadamente la cultura priísta yo la veo como el tumor maligno que llegó a enfermar la cultura política del país, y que está haciendo metástasis, por decirlo así, en los espacios de la izquierda. Eso es muy lamentable, porque me parece que es la causa por la cual López Obrador no ganó las elecciones con la gran ventaja que le atribuían las encuestas de hace un año o menos.

Ese mismo miércoles Andrés Manuel López Obrador se fue de la boca. En una entrevista con Jorge Ramos, de la cadena de televisión estadounidense Univisión, se autoproclamó presidente de México. El tabasqueño afirmó, contundente: "Sí, yo soy el presidente de México. Yo soy el presidente de México por voluntad de la mayoría".

En esa conversación, Ramos le preguntó si en su resistencia civil no descartaba efectuar bloqueos de aeropuertos y carreteras. AMLO respondió que haría "todo lo que pueda significar resistencia civil, todo lo que pueda significar defender el voto y defender la democracia". Sus palabras fueron reproducidas por la radio nacional hasta la saciedad, y destacadas como una muestra de que el líder de la Coalición por el Bien de Todos estaba desbordado.

Gerardo Fernández Noroña, el vocero perredista, no se quedó atrás y habló de la estrategia de radicalización que su partido pondría en marcha a partir del 30 de julio. Aseguró que las acciones serían delineadas por Andrés Manuel López Obrador durante la asamblea convocada para el siguiente domingo. Sin embargo, anunció: "Serán medidas contundentes, que no dejen dudas: no permitiremos un atro-

pello ni que se nos quite la Presidencia a la mala. Vamos a un periodo muy difícil, muy complicado, muy peligroso”.

Aunque no detalló las acciones, dentro del PRD comenzó a contemplarse el bloqueo de autopistas y pasos fronterizos, así como plantones permanentes en embajadas, bancos, centros comerciales, empresas, secretarías de Estado y otras sedes del gobierno federal.

La CBT lanzaba estas amenazas porque estaba viendo que el Tribunal Electoral no se estaba yendo por el camino que querían. Una prueba de ello fue que ese miércoles 26 de julio, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF confirmó la elección de diputados federales de cinco distritos electorales y ratificó la votación de senadores de la República en Baja California y Sinaloa. Lo más significativo de sus decisiones fue que negó la solicitud de la Coalición por el Bien de Todos de abrir los paquetes y contar voto por voto. La Sala Regional consideró “infundados los agravios planteados e inatendible la pretensión” expresada. Tampoco procedió la petición de nulidad abstracta argumentada con la “guerra sucia” en contra de la CBT.

Otro revés a la Coalición por el Bien de Todos lo dio, desde Saltillo, Cuauhtémoc Cárdenas. Ante la posibilidad de ser un tercero en discordia si se anulaban los resultados de las elecciones presidenciales del 2 de julio, Cárdenas se descartó como presidente interino de México. Aclaró que esperaría el resultado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues él no era juez para calificar si la elección había sido limpia o no.

El hecho era que, tres semanas después de los comicios presidenciales, ninguna de las posturas defendidas por los candidatos en disputa había logrado convencer a la mayoría de la población, de acuerdo con la encuesta poselectoral efectuada en esos días por la empresa Ipsos Bimsa. El electorado seguía dividido en dos bandos muy claros y, poco a poco, se había ido erosionando la opción intermedia. No obstante, una mayoría relativa de votantes seguía confiando en el desempeño de las autoridades electorales y consideraba que la mejor decisión que podía tomar el TEPJF era ratificar el resultado del conteo final del IFE.

El jueves 27 de julio, en una maratónica sesión que duró siete horas, el consejo general del IFE presentó su informe sobre los comicios del 2 de julio y el proceso poselectoral. La consejera Teresa González Luna fue la encargada de hacerlo. Recordó que el 2 de julio se habían instalado 99.99% de las casillas; es decir, 130,477, bajo la responsabilidad de 913,416 ciudadanos; además, había habido 25,311 observadores electorales nacionales y 693 visitantes extranjeros, provenientes de 60 países. González Luna concluyó:

El 2 de julio se llevó a cabo una jornada electoral limpia, apegada a la ley y bien organizada, en un ambiente de tranquilidad y confianza. Todos esos hombres y mujeres fueron testigos del desarrollo de la jornada. Los errores fueron mínimos. Hablar de irregularidades generalizadas o peor aún, tan siquiera sugerir, insinuar, la organización de un operativo de fraude electoral, implica desconocer lo que efectivamente todos esos hombres y mujeres vieron, oyeron y palparon el día de la jornada.

De inmediato pidió la palabra Horacio Duarte, representante de la Coalición por el Bien de Todos. Advirtió: “Nosotros creemos que el día de la jornada electoral sigue siendo un tema de revisión, y nosotros nos atenemos a la revisión que hará el Tribunal. Cualquier otra evaluación, evidentemente será sólo evaluación de carácter político o de carácter estadístico”.

Duarte planteó ante los consejeros algunas irregularidades detectadas por la CBT el 2 de julio que, en su opinión, podían tener impacto en el conteo de los votos en las casillas y en los Consejos Distritales. También presentó alrededor de 30 boletas originales de la elección de diputados, senadores, presidente de la República e, incluso, de comicios locales del Distrito Federal, que habían sido encontradas, dijo, en diferentes partes del país y que nunca fueron contabilizadas.

Incómodo, el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, respondió: “Creo que está obligado a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, porque eso está

catalogado como delito electoral”. Entonces, el representante de la Alianza por México, Felipe Solís Acero, acotó: “Si no mal recuerdo, la ley penal establece la obligación de quien tenga conocimiento de un delito, de denunciarlo. Y esa obligación es doble tratándose de una autoridad. Señor presidente, el que tiene que notificar a la FEPADE es el IFE”.

Luego, el representante de la Alianza por México reprochó a la autoridad electoral que le hubieran notificado 19 quejas en menos de 48 horas, algunas incluso durante la madrugada: “Si querían generar una crisis, lo están consiguiendo [...] limitan nuestro derecho de defensa”. Solís Acero también recriminó a la consejera Teresa González Luna: “No me gustó el tono de la intervención de la consejera [...] me parece un tono de reproche, un tono acusatorio, un tono admonitorio, sin establecer con claridad un destinatario. Es necesario precisar a quiénes se refiere”.

A petición del PAN, el consejo general del IFE emitió un informe preliminar en el que se establecía que, aun cuando la Coalición por el Bien de Todos sólo había presentado 2,294 escritos de protesta, estaba impugnando los resultados de la elección presidencial en 40,880 casillas.

En un intercambio de posiciones sobre lo que determinaba la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Germán Martínez Cázares, representante del Partido Acción Nacional, planteó que, a su juicio, los escritos de protesta eran un requisito necesario para la revisión de la votación contabilizada en las casillas impugnadas. El representante de la Coalición por el Bien de Todos, Horacio Duarte, contrargumentó que esos escritos de protesta eran requisito necesario sólo si se pedía la nulidad de la votación de las casillas, aspecto —agregó— que no habían solicitado ante el TEPJF.

Germán Martínez advirtió que presentaría ante el órgano jurisdiccional el caso de la ausencia de 38,586 escritos de protesta, y recordó que, precisamente por la falta de esos escritos, las Salas Regionales habían desechado los juicios de inconformidad presentados en la elección de diputados y senadores.

A partir de esta discusión, Felipe Solís Acero y Horacio Duarte se acompañaron en los señalamientos y acusaciones en contra de la au-

toridad electoral. Así, denunciaron que los consejeros del IFE habían permitido la apertura de paquetes electorales en consejos distritales, sin que estuvieran presentes representantes de partidos o coaliciones. Finalmente, descalificaron 11 de 12 informes emitidos por el pleno del consejo general del Instituto Federal Electoral.

Ante la rispidez de la situación, Luis Carlos Ugalde intervino para decir: “La valoración final la dará el Tribunal Electoral. El IFE apela a que mientras el Tribunal Electoral no emita sentencia, hay que evitar las valoraciones políticas; mientras no haya sentencia, cualquier aseveración es parcial. Hago un llamado a la prudencia”.

Además de agresividad, esa sesión del IFE tuvo también un espectáculo organizado por miembros de la Coalición por el Bien de Todos. Cerca de la una de la tarde, al grito de “ivoto por voto, casilla por casilla!”, los diputados federales Eliana García Laguna y Daniel Ordóñez metieron de contrabando a las instalaciones del IFE a más de un centenar de pollitos con moño tricolor en el pescuezo, para tomar por asalto la sala del consejo general del IFE.

Sorprendidos, los consejeros electorales se quedaron mudos. Nada pudieron hacer para evitar la irrupción. Con rapidez y decisión la diputada García Laguna se dirigió a la enorme mesa en forma de herradura donde sesionan los consejeros y ahí inició un juego de pon y quita con una edecán: la legisladora depositaba claveles blancos y amarillos frente a cada lugar y la edecán los quitaba.

En ese momento estaba en uso de la palabra el priísta Felipe Solís Acero, quien debió callarse. Luis Carlos Ugalde reaccionó entonces y llamó al orden en la sala. Eliana Laguna, sin prisa, concluyó la tarea y abandonó el salón de plenos.

Mientras estos singulares eventos tenían lugar en el IFE, el proceso de calificación de las elecciones se complicaba por falta de datos. El magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata llamó la atención a 12 presidentes de consejos distritales, porque no habían presentado de manera completa lo que se conoce como “acta circunstanciada” sobre la elección presidencial del 2 de julio. A cada uno de ellos, les dio un plazo de 24 horas para que entregaran el informe completo.

Como ya lo habían hecho otro tipo de asociaciones, el viernes 28 de julio, varias organizaciones campesinas se reunieron con Felipe Calderón para brindarle su apoyo. En esta ocasión, se trató de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, Plantar, representantes del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos, la Organización Campesina de la República Mexicana y la Red Nacional de Mujeres Rurales.

Apremiado, Calderón les dijo: “Como presidente electo los voy a convocar para que juntos construyamos un pacto para el desarrollo rural, pero miren, México no tiene tiempo que perder [...] no me voy a quedar sentado [...] México necesita trabajar cuanto antes”.

Mientras tanto, a su llegada al Museo Recinto de la Reforma, en pleno corazón del puerto de Veracruz, decenas de simpatizantes de López Obrador hostigaron al presidente Vicente Fox con el consabido grito de “¡voto por voto!” y “¡Obrador, Obrador, Obrador!”. El sitio se encontraba tapizado con mantas y pancartas criticando la actuación del Instituto Federal Electoral. Dentro del recinto se desató una guerra de consignas en favor de uno y otro candidatos. Los representantes de 16 países de América Latina que asistían a la Primera Reunión Internacional de Funcionarios del Registro Civil, que encabezaban el presidente y el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, fueron testigos involuntarios de estas protestas.

Al salir del evento, los periodistas abordaron al presidente y le preguntaron cómo veía las manifestaciones. De forma cortante, Fox contestó: “De eso yo no opino, en eso yo no me meto”.

El sábado 29 de julio, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —encabezados por su presidente, Leonel Castillo— recibieron en audiencia oficial a representantes de la Coalición por el Bien de Todos para escuchar sus alegatos en torno a los juicios de inconformidad de la elección para presidente de la República. El encuentro con el Partido Acción Nacional fue al día siguiente, a la misma hora.

Durante la reunión con la CBT —que duró una hora—, el Tribunal Electoral dejó en claro que no aceptaría ninguna información

“de oídas”. Duarte rechazó que la solicitud de apertura de paquetes electorales después de los cómputos distritales hubiese ocurrido, como decía el IFE, mediante una petición verbal.

Los delegados de la Coalición por el Bien de Todos dejaron en claro que no pedían la nulidad de la elección presidencial, pero sí el recuento de votos de todas las casillas electorales del 2 de julio. Como sustento de su solicitud, entregaron estudios aritméticos para evidenciar supuestas irregularidades graves.

El equipo jurídico de la CBT —Horacio Duarte, Ricardo Monreal y Arturo Núñez— solicitó a los magistrados del Tribunal Electoral no ceder a presiones ni sujetarse sólo a criterios doctrinarios o rígidos.

Desde otra trinchera, Elba Esther Gordillo respondió a las acusaciones que le hizo Jesús Ortega en el sentido de que había estado involucrada en un fraude electoral. Claridosa, la maestra Gordillo dijo, refiriéndose a los perredistas: “Su intolerancia, su actitud antidemocrática, rupturista, y la impunidad con que están acostumbrados a actuar, pueden ser precisamente las causas que les llevaron a perder las elecciones y no la intervención de una persona”.

El proceso electoral se vivió de manera apasionada, porque se desarrolló con el eje de un conflicto entre el presidente de la República y el candidato que durante mucho tiempo tuvo la mayor preferencia electoral, Andrés Manuel López Obrador. Además, la elección generó un fenómeno de alta expectativa por el cambio social.

Ciertamente, el proceso fue inédito en la historia moderna de México. La prensa, además de reseñarlo, publicó numerosos análisis que, desde una perspectiva psicológica, trataban de explicar la situación.

Así, según los expertos, la ciudadanía transitó por sentimientos contenidos de alegría o de despojo del triunfo. Los simpatizantes de Felipe Calderón no se mostraron gozosos, porque en momentos de incertidumbre la alegría puede ser entendida como una agresión. Y, por su lado, los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador no se sintieron derrotados, porque pensaron que podían ganar de una u otra manera.

Insomnio, agotamiento, angustia, dolencias físicas y estados de ánimo diversos aparecieron o se incrementaron en muchos mexicanos

como fruto de la efervescencia electoral que inundaba los medios de información, la casa, el trabajo y los cafés.

Los que estaban seguros del triunfo de AMLO presentaron sentimientos de confusión e impotencia. Para ellos, las marchas fueron un desfogue. A final de cuentas, las manifestaciones constituyeron una buena válvula de escape, porque a los enojados que asistían les dieron un contexto ideal para poder gritar, imprecar, usar máscaras, que les ayudaron a sacar su ira y la frustración de la incertidumbre por no saber quién era el ganador de las elecciones.

El cansancio psicológico fue ganando terreno y, a veces, se convirtió en depresión y abatimiento. Con el tiempo la frustración se fue transformando en una actitud de lucha. Las personas tendían a compartir sus ideas sólo con gente que pensaba como ellos, pues llegó el momento en que era imposible convencer a los que opinaban diferente. Los panistas veían como enemigos a los perredistas y viceversa.

Las diferencias políticas en las relaciones interpersonales, aun dentro de las familias y, desde luego, en el trabajo, generaron enojo y miedo. Un consejero matrimonial, incluso, contó a un reportero que las parejas ya estaban acudiendo a su consulta no para solucionar sus conflictos conyugales, sino para dirimir sus desavenencias políticas.

La única manera de aliviar ese clima de tensión era la resolución del problema poselectoral. Pero a finales de julio todavía faltaba, en el mejor de los casos, todo el mes de agosto y los primeros días de septiembre para que el proceso concluyera.

Por el momento, el país vivía las vísperas de la tercera asamblea informativa. La magna manifestación a la que había convocado la Coalición por el Bien de Todos para el domingo 30 de julio marcaría el fin de una etapa y el comienzo de otra. Gerardo Fernández Noroña ya había alertado que López Obrador radicalizaría las medidas de resistencia civil. Ello tenía sentido si se consideraba que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estaba próximo a determinar si atendía o no la demanda de abrir las urnas para contar de nuevo los votos. Mientras muchos se preparaban para participar, la población de la ciudad de México esperaba temerosa la concentración anunciada.

---

## REBELDÍA EN MARCHA

---

### El plantón: AMLO dobla la apuesta

Hasta quienes se preciaban de conocer políticamente bien a Andrés Manuel López Obrador fueron sorprendidos por el anuncio y la inmediata ejecución del plantón a lo largo del Zócalo, Madero, Juárez y Reforma para presionar al Tribunal Electoral. La acción fue inesperada, pero también congruente con la línea adoptada por AMLO de desconocer los resultados anunciados por el IFE. Ese 30 de julio, una vez más, López Obrador realizaba una jugada maestra.

Según narraron varios columnistas y reporteros en la prensa, uno de los extrañamente sorprendidos por la decisión de AMLO fue el jefe de gobierno que lo había sucedido en el cargo, Alejandro Encinas. De acuerdo con esos relatos, López Obrador le había dado a conocer su intención apenas 15 minutos antes de comenzar su discurso y someterlo a la aprobación de la asamblea.

AMLO justificó su propuesta ante un Zócalo lleno y con seguidores dispersos en las calles aledañas, que seguían sus palabras por altavoces bien distribuidos. Dijo que se jugaba el destino de México, pues estaba por decidirse la disyuntiva de instaurarse “en definitiva una democracia verdadera o [imponerse] un régimen de simulación democrática, donde [...] los privilegiados de siempre van a seguir decidiendo sobre el destino de toda la nación”.

Luego, López Obrador dirigió sus baterías contra los magistrados del Tribunal Electoral, que en ese momento eran su verdadero ob-

jetivo. Aunque esperaba que actuaran “como hombres y mujeres libres”, sabía que estaban sometidos a presiones muy fuertes por los poderosos de siempre. Por eso, afirmó que era necesario que el pueblo se mantuviera organizado y luchando por limpiar la elección. Añadió que había que recordar que todo lo que se había alcanzado en el país “en materia de libertades, de justicia y democracia” había sido así, con la organización y la lucha del pueblo.

Sabiendo que lo que estaba a punto de plantear afectaría a muchas personas —de hecho, en eso radicaría la fuerza de la medida—, ofreció una disculpa a quienes no pensaban como él y sus seguidores, por las molestias que les ocasionaban las movilizaciones. Esperaba que un día comprendieran que su lucha era por el bien de México.

Entonces AMLO propuso: “que nos quedemos aquí, en asamblea permanente, hasta que resuelva el Tribunal [...] día y noche, hasta que se cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos los mexicanos”.

En ese momento, según reseña Jaime Avilés en *La Jornada*, se hizo “un silencio de estupefacción... Boquiabierta, la gente alza las cejas, mira a sus vecinos... y no acaba de creer, de entender, o mejor dicho de digerir la propuesta”.

El mismo reportero cuenta que sólo un puñado de los partidarios de AMLO

estaba en el secreto y preparando la logística para que las ideas se convirtieran de inmediato en realidad. No era cosa de invitar al pueblo a instalarse en 47 campamentos sobre la vía pública del corazón de la ciudad y sólo entonces mandar a conseguir las lonas para construirlos. Por eso, en el instante en que la multitud levantó la mano para aprobar masivamente la histórica decisión, los campamentos empezaron a materializarse sobre la avenida Juárez y el Paseo de la Reforma [...] hasta la fuente de Petróleos en la entrada a las Lomas de Chapultepec.

López Obrador explicó en detalle que en el Zócalo se instalarían 31 campamentos, uno por cada estado de la República, y otros 16,

correspondientes a las delegaciones del Distrito Federal, a lo largo de Madero, Juárez y Reforma. Agregó que habría una coordinación por campamento, “integrada por senadores y diputados electos, jefes delegacionales electos, dirigentes de los partidos de la Coalición... de todos los estados y de las delegaciones, y habrá un representante de las Redes Ciudadanas en cada campamento”.

También anunció que en cada campamento habría actividades culturales y artísticas, para lo cual convocó a los intelectuales y artistas que lo apoyaban a contribuir en la organización de eventos.

Y remató, ante la expectación de sus correligionarios: “Yo también viviré en este sitio mientras estemos en asamblea permanente. Sé, amigas y amigos, que no es sencillo ni fácil lo que les estoy proponiendo, pero es lo que sentimos más conveniente para nuestra causa”. Entonces volvieron los vítores y el entusiasmo. Además, poco a poco los presentes fueron comprendiendo que no todos tendrían que quedarse, que ya se había pensado en que permanecieran sólo algunos representantes.

El candidato del PRD a la Presidencia dio así un paso mayúsculo en la presión ejercida contra el Tribunal Electoral, con una demostración de fuerza inédita en la historia de las movilizaciones políticas. Una vez más AMLO establecía un símbolo muy fuerte para la resistencia civil: tomar el centro de la capital del país y paralizar el tránsito en algunas de sus avenidas más importantes, como Madero, Juárez y Reforma.

Cuando ya el IFE había terminado su intervención en el proceso, y comprendiendo que los alegatos jurídicos serían insuficientes para revertir el resultado, López Obrador dobló su apuesta haciendo de su fuerza social un instrumento de presión directa contra la máxima y supuestamente irrecusable instancia, el Tribunal Electoral. Además de la argumentación legal procedimental, haría valer el peso político de una movilización social tumultuaria, acompañada con un discurso en la plaza llevado siempre al extremo y ajeno al ejercicio de la demostración.

El hecho de que miles de personas se presentaran a las movilizaciones que AMLO convocaba le daba sustento al discurso según el cual él hablaba en nombre del pueblo.

Así, a convocatoria de su líder, 4,000 personas, de acuerdo con *La Jornada*, 8,000 según *El Universal*, estuvieron en los 47 campamentos durante mes y medio. Como siempre ocurre, la ocupación geográfica de un espacio significativo amplificó el efecto de una movilización humana relativamente escasa si se compara con la que López Obrador conseguía en las marchas y asambleas informativas, o, más aún, con los 42 millones de electores que votaron el 2 de julio. AMLO demostró una vez más que era capaz de idear formas inesperadas de protesta popular.

La pregunta que surgió entonces, y que sigue resonando al analizar la rebelión electoral, era ¿por qué tanta gente estaba dispuesta a seguir a Obrador? Las explicaciones corrían por tres vías principales: agravios sociales, movilización clientelar en el Distrito Federal y repudio a maniobras de Fox y los “pirrurris” ricos.

En la primera, todo mundo reconocía la autenticidad de los agravios sociales por realidades o hechos reiterados de pobreza, desigualdad, injusticia y abuso. Bastaba observar las esquinas de las avenidas en las grandes ciudades mexicanas, con su mercadeo miserable de baratijas y mendicidad entre los automóviles, o las condiciones en las comunidades pobres del campo, muchas de ellas indígenas, para estar de acuerdo en que el lema de AMLO, “Por el bien de todos, primero los pobres” tocaba una llaga viva del país.

La segunda se refería a la relación de las distintas corrientes del PRD del Distrito Federal con organizaciones sociales, vecinales y delegacionales, de vendedores ambulantes, choferes y peticionarios de vivienda, entre otros, así como con los beneficiarios de los programas sociales del gobierno capitalino como ancianos, madres solteras, estudiantes y familias de discapacitados.

Entre López Obrador y estos segmentos de la sociedad urbana existía sin duda una identificación mutua. La relación entre ellos tenía también una base clientelar, de administración de beneficios cercana a la de un cacique, como lo describió en su momento Roger Bartra, aunque para Elena Poniatowska la percepción era otra: AMLO establecía una relación de intimidad con la masa que lo apoyaba; lo seguía por interés, sí, pero en gran medida también por convicción.

La popularidad de López Obrador también se explicaba como una reacción social de repudio a las maniobras que el presidente Fox hizo para sacarlo de la carrera presidencial. Paradójicamente, al querer anularlo en el terreno político, Vicente Fox se convirtió en el principal promotor de Andrés Manuel López Obrador. En la *ciudad de la esperanza* y con la primacía de los pobres, las acciones de Fox fueron como gasolina en la caldera del resentimiento y la manipulación social.

### Los campamentos: instalación y reacciones

El 30 de julio y al día siguiente, los simpatizantes de AMLO se apoderaron de las avenidas del corredor Zócalo-Reforma, cerrando la mayoría de los cruces con esa avenida. Quedaron abiertas las intersecciones de Reforma con Insurgentes, Circuito Interior y Eje 1 Poniente-Rosales, que funcionaron como escapes de este radical corte de tránsito.

Al poco tiempo de haberse instalado las grandes carpas que se convertirían durante las siguientes semanas en el paisaje familiar del plantón, el gobierno del Distrito Federal dotó a los campamentos de agua potable mediante grandes tinacos que eran llenados cotidianamente por el Sistema de Aguas de la capital. Asimismo, puso cerca de 200 casetas con letrinas. Por su parte, trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, simpatizantes de AMLO, habilitaron conexiones eléctricas para los campamentos.

Las administraciones delegacionales dispusieron también servicio médico para los manifestantes en carpas especiales, con asistencia diurna y nocturna. Éste, sin embargo, trató de disfrazarse como voluntario, aunque con el paso de los días y distintos reportajes de la prensa quedó clara su procedencia. La vigilancia también contó con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, entre ellos muchas mujeres policías.

En varios de los campamentos se instaló una cocina y se colocaron mesas para comer. Había dos “megacocinas”, una en la Diana y otra en el Zócalo. Según un artículo de Cynthia Ramírez, publicado en la revista *Letras Libres*, de algún lugar de la Colonia Avante llegaban

todos los días “3,500 raciones de comida para el desayuno y otras 3,500 para la comida” para los campamentos ubicados entre la Diana y la Fuente de Petróleos. La cena consistía en café y pan dulce.

Bajo las carpas se encontraban tiendas de campaña donde la gente dormía, así como espacios con televisiones, DVD, estufas de gas, sillas y mesas de plástico. Había también colchonetas, catres, cobijas a cuadros, tarimas.

Los habitantes de los campamentos eran personas acostumbradas a condiciones precarias de vida, no sólo por su nivel socioeconómico, sino porque muchos pertenecían a grupos que en algún momento habían invadido terrenos o vivido en asentamientos sin servicios.

El clima, sin embargo, a ratos fue inclemente. En 2006 hubo una temporada de lluvias intensas, de aguaceros frecuentes, de inundaciones de calles, puentes y avenidas, incluso de fuertes granizadas.

En todo caso, la medida provocó reacciones de indignación y hasta intolerancia desde el primer día. Al fin y al cabo, la fuerza de esta acción se basaba en su capacidad de dificultar la vida cotidiana de los habitantes de la zona afectada y de los que trabajaban o transitaban por ella. Los automovilistas que deseaban cruzar la línea bloqueada perdían considerablemente más tiempo que el habitual y se veían obligados a dar largos rodeos para pasar o evitar los embotellamientos.

Los negocios de la zona se vieron fuertemente afectados. Las tiendas, los restaurantes y otros comercios se quedaron sin clientes de la noche a la mañana. El 2 de agosto, los dirigentes de cinco cámaras empresariales, entre ellas las más importantes del Distrito Federal y las dedicadas a las actividades turísticas, estimaron pérdidas en esos primeros días por 435 millones de pesos. Advirtieron que estaba en riesgo “la viabilidad de 45,000 empresas y el empleo de 2.4 millones de personas”, según reportó *La Jornada*.

No fueron pocos los analistas que comentaron lo paradójico que resultaba que el candidato perredista a la Presidencia, quien había sido jefe de gobierno de la ciudad, castigara de ese modo a la población de su bastión político más fuerte, el Distrito Federal, que lo había favorecido con una votación contundente el 2 de julio.

La crispación aumentó. Los agravios se hicieron más profundos. Quienes estaban en desacuerdo con la medida y, en general, con López Obrador, vieron los plantones como una acción ilegal y violenta, pues afectaba el derecho al libre tránsito de miles de ciudadanos.

Desde el día siguiente a la instalación, muchos recordaron con frecuencia que el mismo AMLO había expedido un bando, el número 13, en diciembre de 2000, en el que al mismo tiempo que se garantizaba un respeto total al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, se prohibía expresamente “el bloqueo de avenidas o vialidades primarias que desquicien el tráfico, eleven la contaminación y afecten el libre tránsito de terceros”. Este bando sería uno de los argumentos más frecuentes en la crítica a los plantones.

En cambio, los adherentes a la causa del recuento total de votos elogiaban la prudencia de López Obrador, por haber escogido una vía pacífica de protesta ante el gran fraude que ellos percibían y que el candidato recordaba a cada momento como un hecho probado sin duda alguna.

Alejandro Encinas enfrentó fuertes y frecuentes críticas. Durante sus conferencias de prensa matutinas, a las seis y media de la mañana, se vio acosado por los periodistas, quienes desde un principio le preguntaban insistentemente si aplicaría el bando 13 para despejar la vía.

La respuesta del jefe de gobierno fue consistente en todo momento: no se recurriría a la represión, pues esa vía no solucionaría nada y sí agravaría el conflicto, poniendo en mayor riesgo de afectaciones a la población. En todo momento se mantendría un diálogo para persuadir a los manifestantes de levantar voluntariamente los campamentos.

En las calles del plantón, el encono entre los manifestantes y los afectados era evidente. Los primeros colocaron carteles contra el fraude, contra el presidente del IFE, a quien calificaban de delincuente; contra Vicente Fox, el traidor a la democracia; contra Felipe Calderón, a quien desde la campaña llamaban Fecal y más tarde Feli-Pillo. “No perdimos, nos quieren robar”; “No al pinche fraude”; “Legalidad o revolución”, eran algunas de las muchas leyendas que se podían ver en diversos carteles. *La Jornada* recogió la siguiente adhesión: “Que nos

diga López Obrador dónde, y nosotros vamos”, expresada el primer día del plantón. Desde luego, el lema dominante era “voto por voto, casilla por casilla”.

Del otro lado, los automovilistas perjudicados hacían sonar sus bocinas insistentemente, muchos de ellos con mentadas de madre y a viva voz con variados improperios. Todos los días surgían nuevos agravios de uno y de otro lado, que profundizaban la polarización que se había incitado por todas las partes durante las campañas electorales.

Aunque esta demostración de fuerza tuvo un efecto político innegable, también tuvo consecuencias negativas para su promotor. Desde el segundo día, la acción pareció demasiado radical a varios de sus más connotados simpatizantes, como el escritor Carlos Monsiváis, el economista y articulista Rolando Cordera y el actor Héctor Bonilla. Sin dejar de respaldar su causa, manifestaron públicamente su desacuerdo con el bloqueo, porque afectaba derechos de terceros y porque no debía quedar como precedente para presionar y obtener una determinada decisión jurídica. Al día siguiente, uno de los integrantes de la dirección colectiva de la Unión Nacional de Trabajadores, Agustín Rodríguez, líder del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), también exhortó a AMLO a recapacitar.

Como parte de la asamblea permanente en cuyo marco ocurría el plantón, López Obrador realizaba sesiones diarias de información y arenga en el Zócalo. Desde el segundo día del plantón, dio respuesta a las posturas contrarias al mismo: “Ante los cuestionamientos, unos de buena fe, otros malintencionados, pues hay dudas si estamos haciendo bien las cosas o no, si estuvo bien lo de tener los campamentos de Reforma o no, quiero preguntarles a ustedes: ¿vamos a seguir con los campamentos, sí o no?”. Los asistentes gritaron de inmediato y entusiastamente que “Sí”, y se consideró zanjada la cuestión.

Una de las razones que esgrimía AMLO para sostener su resistencia era que las acciones se decidían democráticamente en la plaza pública. Sus seguidores estaban convencidos de participar en un movimiento democrático, porque tenían esta forma colectiva de adoptar decisiones. Los críticos, por su parte, aseguraban que las decisiones to-

madras a mano alzada en una asamblea dominada por un líder que no aceptaba disensos, ni críticas, eran todo, menos democráticas. Argumentaban que se trataba de resoluciones impuestas por AMLO, sin posibilidad de razonamiento, ni de consulta directa y anónima; la única que podía ser considerada como democrática.

Con el plantón, como venía ocurriendo desde mucho antes de la elección, AMLO impuso nuevamente la agenda al conjunto de los actores políticos. El tema de los bloqueos fue el dominante en esas semanas, junto con el de los procedimientos del Tribunal Electoral.

Sobre los efectos negativos para AMLO, vale la pena recoger el comentario de Jesús Martínez Álvarez, expresado en un artículo publicado en el diario *La Crónica*, pues era coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, integrante de la Coalición por el Bien de Todos. Con el título “El enemigo de Andrés Manuel se llama [...] Andrés Manuel”, el autor expone que la posición de AMLO lo estaba haciendo perder seguidores a gran velocidad, pues hasta ese momento no se habían mostrado pruebas claras del supuesto fraude. “Tanto nacionales como extranjeros estábamos convencidos de la limpieza de la elección, hasta que el candidato perdedor sembró la duda. Y lo hizo sin pruebas. Sólo retórica [...] frases repetidas”. Y concluye: “AMLO siempre dijo que era indestructible. Que nada podrían hacerle sus enemigos. Se olvidó de uno que sí puede acabar con él: se llama Andrés Manuel López Obrador”.

En cambio, intelectuales lopezobradoristas como Elena Poniatowska y Carlos Montemayor justificaban la presión sobre el Tribunal Electoral, a pesar de las molestias que se causaban con el plantón, pues afirmaban que éste era menos peligroso que los intentos de sectores poderosos de influir sobre el mismo órgano judicial.

Como era de esperarse, la discusión llegó de inmediato al Congreso de la Unión. El 2 de agosto, la Comisión permanente se enfrascó durante casi tres horas en un debate a raíz de que diputados del PAN propusieron un punto de acuerdo, que finalmente fue aprobado por mayoría, para exhortar al jefe de gobierno del Distrito Federal a aplicar el bando 13 y garantizar el libre tránsito. Durante la ríspida discusión, el diputado Pablo Gómez, del PRD, aseguró que un acto de represión

para levantar los campamentos sería, en los hechos, un llamado a la violencia mucho más grave que la desatada en San Salvador Atenco en los primeros días de mayo, a raíz de una incursión policiaca.

Por su parte, el candidato triunfador, Felipe Calderón, fue recibido el 30 de julio por el Tribunal Electoral. En esa reunión, les pidió declarar presidente electo a quien los ciudadanos ya habían elegido. Expuso que era en el Tribunal y con argumentos legales, y no en la calle con movilizaciones, amenazas y medidas de fuerza en donde debía dirimirse quién había triunfado. “Quiero decirles con absoluta tranquilidad de conciencia, que gané limpiamente.” También dejó claro que acataría la decisión que tomaran los magistrados

Al salir del encuentro, en conferencia de prensa, Calderón aseveró que estaba por decidirse “si 42 millones de votos pueden suplantarse con campamentos y movilizaciones”. Luego, reiteró que él aceptaría la resolución de la instancia legal y exigió que todos hicieran lo mismo.

Al día siguiente, el PAN abrió una exhibición de las cerca de 130,000 copias de actas de casillas que estaban en su poder, a la que llamó “Expo-acta”. Manuel Espino, presidente de ese partido, invitó públicamente a López Obrador a visitar la exposición y constatar los resultados. Espino explicó que nunca habían querido ocultar algo, razón por la que ponían a disposición del público las pruebas de que el triunfo del candidato panista había sido limpio.

Por último, Manuel Espino consideró que sería ilegal que se llevara a cabo un recuento de todos los votos, pero que si la resolución del Tribunal Electoral fuera en ese sentido, los panistas lo aceptarían.

La división política se había trasladado también a los ámbitos intelectual y artístico. El 3 de agosto, se publicó en diversos diarios un desplegado firmado por cerca de 140 intelectuales, académicos y periodistas con el título “La coexistencia de la pluralidad política reclama la defensa de las instituciones de nuestra democracia”.

Los firmantes se manifestaban “preocupados por un clima público que puede erosionar lo que tanto trabajo ha costado construir”. Explicaban que habían votado por diversas opciones, pero compartían la necesidad de la tolerancia entre fuerzas legítimas y diversas. Respec-

to a la “aguda controversia en torno a la limpieza y validez de la elección presidencial”, declaraban haber seguido argumentos y pruebas, sin haber encontrado “evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. En una elección que cuentan los ciudadanos puede haber errores e irregularidades, pero no fraude”. Concluían que las instituciones electorales eran un patrimonio que nadie debía lastimar, pues constituían el soporte de la libertad esencial “de votar y ser votados sin que nadie manipule nuestro mandato”.

Entre los que suscribían el desplegado se encontraba José Woldenberg, primer presidente del IFE de 1996 a 2003, y quien gozaba de un gran prestigio, pues su gestión había sido generalmente aceptada y aprobada por todos los partidos políticos.

Al día siguiente, otro grupo de intelectuales y de artistas, en conjunto más de 500 personas, publicaron otro desplegado, con el título “A favor de un recuento voto por voto”. El texto estaba dirigido a la opinión pública y al Tribunal Electoral.

Razonaban que en un contexto de encono, las autoridades electorales debían actuar con apego a la ley y también de acuerdo “con la circunstancia excepcional por la que atraviesa el país. Los argumentos legalistas no tienen lugar ante una situación que pone en juego, hoy como nunca, la legitimidad de quien habrá de gobernar a los mexicanos durante los próximos seis años”. Visto lo estrecho del resultado, cada impugnación cobraba mayor relevancia, y ya que podía haberse alterado el sistema de cómputo a favor de un candidato y esa alteración no se percibía a simple vista, “se hace imperativo el recuento voto por voto”.

Entre los firmantes se encontraban intelectuales y artistas de primera línea, como Fernando del Paso, Sergio Pitol, Juan Villoro, y, desde luego, Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis.

A fin de cuentas, como entonces lo hicieron ver algunos articulistas, en el desplegado se reconocía entre líneas que el supuesto fraude cometido a través del sistema electrónico no se había demostrado, al menos con claridad, al afirmarse que no era detectable “a simple vista” y no se tenía más evidencia que el dicho de quien lo había “sostenido”.

## El TEPJF niega el recuento total

Detrás de la decisión de bloquear las avenidas más importantes del centro de la ciudad, estaba la idea de que si no se hacía algo espectacular, el Tribunal Electoral sencillamente haría caso omiso de los alegatos de fraude y de la demanda del recuento total, sin costo alguno para los magistrados. Como lo expresaría el propio López Obrador más adelante, si no hubiera sido por el plantón, “simplemente ya no existiríamos” para los medios de información.

Sin embargo, esta lógica era ajena a los procedimientos a los que el TEPJF se apegó estrictamente. De esta manera, el sábado 5 de agosto, el Tribunal Electoral dio a conocer una conclusión del análisis realizado hasta ese momento de las impugnaciones y el material electoral: las impugnaciones del PRD y su candidato no tenían sustento legal y, por lo tanto, no procedía el recuento total.

La noticia fue recibida en la asamblea permanente, en el Zócalo, con total indignación y furia. Andrea Becerril, reportera de *La Jornada*, narra el instante vívidamente. En cuanto se comprendió que no habría recuento total, sino parcial, dice la periodista, “entre los cientos de ciudadanos ahí reunidos estalló la cólera: ‘¡Nos quieren dar atole con el dedo digital! ¡Fox será el responsable del derramamiento de sangre!’”, gritó un hombre ya mayor colocado en la primera fila, y fue secundado por muchos otros que expresaron su rabia y rebeldía mediante consignas como ‘¡Si no hay solución, habrá revolución!’’, la más repetida, o ‘¡Si no abren los paquetes, sacaremos los machetes!’”, haciendo alusión a las armas de Atenco con las que se había derrotado al presidente Fox al comienzo de su gobierno.

En otro lado de la ciudad, en el campamento que se había instalado afuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la reacción no fue menos emocional y colérica. José Galán, reportero de *La Jornada*, la describe así: “Ante las puertas del TEPJF, la incredulidad primero dio paso a la consternación y ésta, a su vez, a la furia [...] Tan pronto conocieron el resultado comenzaron los gritos: ‘¡Vendidos, bandidos, vendepatrias, traidores!’”.

La presión debió ser fuerte para quienes se encontraban en las instalaciones judiciales, pues después de un rato, cuenta el reportero, “funcionarios del Tribunal salieron a ondear banderas”, lo que en vez de calmar a los manifestantes, los irritó más, pues lo interpretaron como una provocación.

A manera de fuerza disuasiva, llegaron al Tribunal Electoral camiones con granaderos. Al final del mitin, el grito continuaba su lógica de intransigencia: “¡No hubo solución, habrá revolución!”.

La reacción enfurecida de los simpatizantes de AMLO porque no habían obtenido lo que pedían no atendía al razonamiento jurídico que los magistrados habían seguido para tomar su decisión.

El Tribunal aclaró que el análisis de la votación partía de las actas de casilla levantadas el día de la elección por las mesas directivas y representantes de los partidos. Cuando cada acta cumplía una serie de requisitos formales de llenado, entonces adquiría valor probatorio pleno, en el que se expresaba el resultado definitivo de la votación en la casilla correspondiente.

Un nuevo conteo de los votos podía hacerse sólo en los casos específicos en que las actas del paquete electoral y la del presidente del respectivo Consejo Distrital no coincidieran; cuando las actas contuvieran alteraciones evidentes que pudieran generar alguna duda sobre el resultado de la casilla; cuando no se encontrara alguna de esas dos actas, y cuando existieran errores evidentes en las actas.

El TEPJF aclaraba que los errores mencionados se referían a cualquiera que se presentara en alguna o algunas de las sumas o restas contenidas en las actas. Si se daba esa situación, el paquete electoral era susceptible de abrirse para un nuevo conteo a los tres días de la elección, durante el cómputo distrital.

Analizadas de esta manera, las irregularidades cobraban relevancia sólo en las casillas en que se hubieran cumplido las condiciones señaladas detalladamente en la ley. En otras palabras, la ley no preveía causas o situaciones generalizadas, como fundamento legal, que permitiera abrir todas las casillas.

Por otra parte, la elección presidencial sólo podía impugnarse

distrito por distrito. Entonces, si no se habían impugnado los 300 distritos, no se podía impugnar la totalidad de la votación. El PRD sólo había presentado 175 juicios de inconformidad para 174 distritos y para cierto número de casillas. Por lo tanto, resultaba jurídicamente imposible extender los efectos a distritos y casillas no impugnados.

Otros hechos invocados por la CBT, ajenos a los previstos en el sistema de medios de impugnación, continuaba el Tribunal Electoral, no correspondían a la etapa del conteo de votos, ni permitían conjeturar una acción concertada de ciudadanos o de los consejeros distritales para alterar los resultados de la votación.

En consecuencia, los magistrados negaron la petición de un nuevo recuento de la votación recibida en todas las casillas instaladas para la elección presidencial. Sin embargo, sí se llevaría a cabo el recuento en 11,839 casillas, que representaban poco más de 9% del total.

No se habían aceptado las impugnaciones: *a)* cuando las actas no mostraban ninguna alteración o inconsistencia, *b)* cuando el recuento ya lo había hecho el Consejo Distrital a satisfacción de todas las partes, *c)* cuando el error se presentaba en datos secundarios y no se había solicitado recuento, y *d)* cuando la casilla pertenecía a un distrito distinto al impugnado.

Para poder contar todas esas casillas nuevamente conforme a la ley, el Tribunal Electoral anunció que se valdría del auxilio de Magistrados Electorales de las Salas Regionales, así como de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y funcionarios de los Consejos Distritales Electorales. El recuento se realizaría en la sede de cada Distrito Electoral; en todos empezaría el 9 de agosto a las nueve de la mañana y terminaría a más tardar en cinco días naturales.

Se especificaba que el conteo sería supervisado, una vez más, por los representantes de los partidos políticos, como había ocurrido el día de la elección y en el cómputo distrital. Las actas de este nuevo conteo serían enviadas, debidamente firmadas —también por los representantes de partidos que desearan hacerlo— a la Sala Superior del Tribunal.

El mismo día en que se emitió esta resolución, el 5 de agosto, a las siete de la noche, López Obrador dio su respuesta en el Zócalo; para él, el Tribunal Electoral había actuado sin altura de miras y con un criterio muy estrecho. Cuando estaba en juego la certeza de la elección presidencial, dijo, no podían aceptarse “pretextos” por parte del Tribunal, como no haberse impugnado todas las casillas, o que no se hubiera entregado a tiempo alguna documentación. El Tribunal, en todo caso, debía “suplir las insuficiencias de la prueba”. Además, sin explicar de dónde obtenía el dato, AMLO aseguró que faltaban 900,000 boletas.

El tabasqueño afirmó que sostendrían la demanda del recuento total, por lo que seguirían con el movimiento de resistencia civil pacífica para insistir en que los magistrados rectificaran, pues la mayoría de los mexicanos, aseguraba, apoyaban la petición.

“Para nosotros está muy claro: si se niegan a abrir todas las casillas y contar todos los votos, es una prueba contundente de que ganamos”, concluyó.

Luego, pasó de lo electoral a la reivindicación social al aseverar que no aceptarían la imposición, porque no sólo se pisoteaba la voluntad popular, sino además se condenaba al pueblo a más pobreza y marginación, desempleo, reducción de salarios y aumento de la emigración, entrega de bienes nacionales a unos cuantos, privatización de la industria eléctrica y el petróleo, rechazo de jóvenes en universidades públicas, importación libre de maíz y frijol en perjuicio del campo.

Al día siguiente, domingo 6 de agosto por la mañana, en una nueva sesión de la asamblea permanente, López Obrador dejó de lado otra vez el campo electoral para referirse a la transformación profunda de las instituciones y del país.

Aseguró que el encono de quienes se creían dueños del país no era con su persona, sino con el proyecto alternativo de nación que proponía implantar. “Por eso han asumido una actitud irracional ante nuestra demanda tan justa, tan sencilla, tan democrática [...] apuestan a aplastarnos [...]”. En referencia a la resolución del TEPJF, AMLO reiteró que no lo aceptaban: “no queremos un diezmo de democracia, queremos democracia al cien por ciento”.

López Obrador cerraba así, cada vez más, toda posibilidad de diálogo y negociación. Al adoptar una posición de todo o nada, independiente de la razón jurídica, lo que pedía a los magistrados del Tribunal Electoral era un pronunciamiento político y no una resolución legal, lo que el TEPJF no podía ni debía hacer. Sin un lenguaje común, como venía ocurriendo desde el día de la elección, la situación se radicalizó.

Finalmente, AMLO convocó para que al día siguiente, lunes 7 de agosto, la sesión diaria de la asamblea permanente se realizara frente al Tribunal Electoral, a fin de pedir a los magistrados rectificar su decisión.

En su editorial del 8 de agosto, publicado en *Reforma*, Jorge Alcocer explica que al haber impugnado sólo 174 distritos electorales, la CBT había dado por buenos los otros 126. “Cabe considerar que la citada Coalición incluyó [...] 40,800 casillas, de las cuales 21,789 fueron por dolo o error en los cómputos. El último dato significa que [el TEPJF] ha otorgado a la CBT un nuevo escrutinio y cómputo en el 54.34% del total de casillas que impugnó por la causa que amerita tal procedimiento”. Por ello, afirmaba, AMLO no podía hablar de criterios estrechos.

Pero la causa jurídica no tenía un peso central en la relación de AMLO con sus seguidores. Se trataba de una relación política de masa y líder, con un discurso del dirigente en que, una y otra vez, se mostraba como víctima de una maniobra sucia, maquinada secretamente por quienes eran identificados como los enemigos del pueblo: los dueños del capital, los políticos corruptos, como sus adversarios del PRI, la ultraderecha insensible a la pobreza, los defensores de los peores intereses de México, como el presidente de la República.

La sesión de la asamblea permanente del 7 de agosto, frente a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue muy importante para AMLO. Después de todo, su estrategia estaba centrada en la presión a dicho órgano. Todo el día el campamento a las afueras del TEPJF recibió la visita y el refuerzo de simpatizantes, quienes coreaban sus consignas, algunas amenazantes, con gestos agresivos y expresiones ofensivas.

Cuando Andrés Manuel llegó, y junto con él algunos miembros

de su equipo, una sola voz colectiva lo aclamó saludándolo: “¡Obrador, Obrador, Obrador...!”; “¡Voto por voto, casilla por casilla...!” y muchas otras consignas. El candidato saludaba emocionado, levantaba los brazos, sonreía, abrazaba, pasaba libre entre su gente, identificado con ella.

Ricardo Monreal y Porfirio Muñoz Ledo abrieron el acto. Los dos insistieron en que la resolución final del Tribunal Electoral era decisiva para el futuro de la democracia en México. Ante la importancia que los magistrados le daban a la aritmética del conteo en las casillas, Muñoz Ledo expresó: “¡No estamos buscando contadores, estamos buscando jueces!”. Les pidió hacer a un lado “actitudes legaloides” y acabar, “para siempre, con la incertidumbre”.

Al tomar Andrés Manuel el micrófono, fue contundente. Desde luego que los magistrados debían atenerse a las normas, explicó, pues todos eran constitucionalistas y sabían que las constituciones históricas de México se habían elaborado, “no por la concesión graciosa de los hombres en el poder, sino por los movimientos sociales que ha habido en nuestro país”. Por esa razón, los magistrados debían atender el proceso histórico para decidir y no “ver nada más la casilla y estar pensando en una parte del problema [...] que no tiene nada que ver con las demandas fundamentales, históricas, de nuestro pueblo”.

En ese momento los magistrados tenían la gran oportunidad histórica de ser “los primeros en iniciar el proceso de transformación en nuestro país, a partir de la renovación de las instituciones”. Si no lo hacían, ellos mantendrían su movimiento el tiempo que fuera necesario, y ya no sólo para demandar el recuento. “Vamos a iniciar el movimiento para transformar a las instituciones de nuestro país [...] vamos a purificar la vida pública, vamos a llevar a cabo una renovación tajante”.

Y remató su discurso afirmando que Felipe Calderón “no tiene autoridad moral. Bien lo decía ese gran presidente, Benito Juárez: ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible’. Y parafraseando a Juárez, podemos decir: el triunfo de la derecha es moralmente imposible”.

Esto último provocó una buena cantidad de críticas. Varios articulistas señalaron que en la democracia ganaba quien recibiera más votos, fuera de derecha o de izquierda, y que la frase de Juárez había

sido sacada de contexto, pues se refería al triunfo del partido monarquista, que en aquella época implicaba la pérdida de la independencia nacional.

Para entonces el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, así como el vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar, habían hecho varios exhortos al jefe de gobierno del Distrito Federal con el fin de garantizar el derecho de libre tránsito de los ciudadanos, es decir, que gestionara el levantamiento del plantón, haciendo uso de las facultades que la ley le otorgaba.

Entre muchos de los directamente afectados por el bloqueo, entre sectores sociales conservadores, entre panistas y priístas, entre un buen número de comentaristas y entre simples ciudadanos que reprobaban el plantón, varios pedían el uso de la fuerza pública. “Le toca al gobierno del Distrito Federal poner un hasta aquí a Andrés Manuel López Obrador”, declaró el presidente del PAN, Manuel Espino, al periódico *Reforma* el 4 de agosto.

El dirigente se lamentaba de que Alejandro Encinas actuara más como militante que como autoridad y afirmaba que debía renunciar para asumir con toda libertad su militancia en las filas del PRD. Añadió, en tono amenazante, que si los perredistas se pasaban de la raya, desde el gobierno federal tendrían que “tomarse medidas”.

Otros, más cautos, pensaban que lo que López Obrador deseaba en el fondo era una represión que le proporcionara mártires a su movimiento, para así reunir a más personas en torno a su demanda.

Del otro lado, AMLO y sus seguidores afirmaban que su lucha era una defensa republicana de la verdadera democracia. Una y otra vez insistían en el carácter pacífico de su movimiento de resistencia civil. Los críticos, por su parte, subrayaban la violencia intrínseca de bloquear avenidas centrales de la ciudad. Ideas y lenguajes confrontados, sin salidas aparentes.

Otra corriente de opinión, al dimensionar el plantón dentro de un contexto nacional también estuvo en contra. Quienes sostenían este punto de vista destacaban que en ningún otro lado de la República se había presentado una situación semejante para impugnar la elección.

El caso de Oaxaca, donde desde mayo se había bloqueado el Centro Histórico de la capital estatal y con mucha más violencia, se debía a causas ajenas a los comicios del 2 de julio y de origen muy anterior. Dentro del mismo Distrito Federal, el bloqueo estaba bien delimitado, y aunque habían ocurrido otros actos de desobediencia, como el bloqueo de entradas a diversos edificios, habían sido momentáneos y esporádicos.

Varios analistas apuntaban que, aunque no se estuviera de acuerdo con el plantón, el intento de levantar por la fuerza los campamentos hubiera resultado probablemente muy violento, pues los partidarios de AMLO hubieran opuesto entonces una resistencia mucho mayor, con acciones de bloqueo extendidas por toda la ciudad.

Alejandro Encinas continuó negándose al uso de la fuerza pública y reiteró que se mantenía en contacto con el PRD para lograr mediante el convencimiento que se reabrieran las arterias bloqueadas. El jefe de gobierno argumentaba también que el plantón era el testimonio de un problema nacional, que, en todo caso, reclamaba la atención de instancias federales, como el Tribunal Electoral y la propia Secretaría de Gobernación.



Desde el 4 de agosto empezaron a aparecer en los medios de información, tanto escritos como electrónicos, resultados de encuestas en los que era evidente que la popularidad de AMLO, del PRD y de las autoridades capitalinas descendía conforme pasaban los días. La mayoría de la población, incluso en el Distrito Federal, consideraba incorrecto el bloqueo en el Centro Histórico y Reforma, además de ineficaz para lograr una resolución favorable del Tribunal Electoral.

Así, por ejemplo, ese día el periódico *Reforma* publicó una encuesta telefónica levantada en el Distrito Federal, según la cual 69% de los consultados no estaban de acuerdo con los campamentos y el bloqueo de vialidades, 57% creían que el gobierno del Distrito Federal destinaba recursos públicos para apoyar las movilizaciones a favor de AMLO y 62% pensaban que el Tribunal Electoral tomaría su decisión al margen de los bloqueos.

Otras encuestas, tanto en el Distrito Federal como nacionales, mostraban resultados similares. Además, en ellas se observaba que la mayoría de la población creía que Felipe Calderón había triunfado en la elección y que el TEPJF actuaría con apego a la ley.

Como lo había hecho durante el final de la campaña y con los mismos argumentos, López Obrador desestimó las encuestas: estaban hechas “a modo” y las difundían medios que no merecían credibilidad.

Asimismo, la crítica y descalificación constante a los medios que difundían puntos de vista ajenos o contrarios a su movimiento, siguió siendo una de las características de López Obrador. Varias veces durante las sesiones diarias de la asamblea permanente hizo referencia a un “cerco informativo” que los medios habrían impuesto. En ocasiones, señaló a órganos periodísticos y a periodistas específicos, como a Televisa, *Reforma* y *Ciro Gómez Leyva*. En sentido contrario, también avaló la seriedad de algunas publicaciones y comunicadores, principalmente *La Jornada*, *Carmen Aristegui* y *Ricardo Rocha*.

AMLO decía que los medios no informaban sobre las graves irregularidades que se habían cometido el día de la elección, como el “embrazo” de urnas. Esto demostraba, según el candidato perredista, que los medios de información estaban plegados a la derecha y al gobierno, y actuaban como “alcahuetes del régimen” al convalidar el fraude electoral.

Entre los comentaristas, esta posición fue muy criticada. Señalaban que atentaba contra la libertad de expresión y revelaba la verdadera naturaleza autoritaria de López Obrador.

El litigio postelectoral se extendió también a la prensa extranjera. Así, periódicos como *The New York Times* y *Financial Times*, este último de Londres, publicaron editoriales en favor del recuento total de votos para dar certidumbre a la elección, mientras que *The Washington Post* y *The Houston Chronicle* consideraban que esta medida era impropia.

## La vida en el plantón

Mientras tanto, en la ciudad de México el bloqueo de avenidas del Centro Histórico continuaba siendo motivo de controversia, no sólo en los medios de información, sino en lugares de trabajo, sitios de reunión y hogares. El encono entre actores políticos se reflejaba en la vida cotidiana, en amargas discusiones en que las partes no tenían un terreno común para llegar a un acuerdo.

Prácticamente no hubo medio que no hiciera uno o más reportajes sobre la vida en los campamentos. Por ejemplo, *El Universal* realizó una disección de cómo estaba organizado cada uno de los 16 asentamientos correspondientes a las delegaciones del Distrito Federal.

La conclusión era que había poco más de 100 organizaciones políticas y sociales sosteniendo los campamentos, la gran mayoría ligadas al PRD. Estas agrupaciones iban desde los tres partidos políticos que conformaban la Coalición por el Bien de Todos hasta comités vecinales y campesinos. El recuento era el siguiente: 3 partidos políticos; 43 organizaciones del Distrito Federal y el Estado de México; 20 organizaciones civiles, políticas y sociales diversas; 11 organizaciones de jóvenes y estudiantes; 7 organizaciones de comerciantes; 7 organizaciones obreras y campesinas; 7 grupos que apoyaban a candidatos electos de la CBT, y 4 sindicatos nacionales.

En todos los campamentos delegacionales existía representación del respectivo Comité Delegacional del PRD. En unos cuantos había brigadas del PT y de Convergencia. En algunas partes había representantes de las Redes Ciudadanas formadas con motivo de la campaña electoral de López Obrador.

Algunas de las organizaciones más importantes eran la Asamblea de Barrios, el Frente Popular Francisco Villa y la Unión de Colonias Populares. Estaban también presentes las grandes corrientes del PRD, como Izquierda Democrática Nacional, Nueva Izquierda, Unidad y Renovación y el Foro Nuevo Sol. En varios campamentos había representantes de la Revolución Blanca, un movimiento reciente formado por los pensionados del IMSS.

Uno de los grupos con mayor poder de movilización era el de Taxistas Panteras, cuya capacidad se veía reforzada por varias otras agrupaciones de taxistas irregulares, como Águilas Metropolitanas, SUTAU-PRD, Iskra y taxistas de los Pueblos de la Montaña. Según datos publicados en la prensa, los taxistas irregulares que circulaban en la ciudad sumaban aproximadamente 30,000. Todos ellos estaban organizados en agrupaciones que negociaban con las autoridades del Distrito Federal para que les permitieran trabajar. También había comerciantes ambulantes, estudiantes, así como organizaciones juveniles y vecinales, y sindicatos.

Quienquiera que recorriera las avenidas ocupadas, sobre todo en las tardes, pues en las mañanas la asistencia era bastante menor, podía comprobar que en los campamentos se vivía una cultura popular característica de los barrios de la ciudad. Había músicos solitarios, en duetos o en grupos; de rock, música tropical, grupera, trova, boleros, jazz e incluso música clásica. Varios de los músicos que participaron en los campamentos hicieron arreglos de canciones tradicionales, con letras a favor de la causa de AMLO y el voto por voto y casilla por casilla.

Durante el día, los jóvenes jugaban “cascaritas” de futbol sobre las avenidas, lo que para ellos era un lujo, pues no cualquiera podía hacerlo en pleno Paseo de la Reforma o Avenida Juárez. Abundaban los lugares donde se jugaba ajedrez y también dominó. Se ofrecieron talleres artísticos, como pintura y artes manuales. También hubo sitios para fomentar la lectura y académicos solidarios que dieron conferencias sobre temas de interés.

Varias de las actividades organizadas eran para niños. Como en ese momento transcurrían las vacaciones escolares de verano, muchos de los asistentes llevaban a sus hijos a divertirse y aprender. Para ellos, el plantón fue un campamento de verano divertido y emocionante.

En las carpas era visible el ánimo de festejo. Con frecuencia se organizaban animados bailes y juegos diversos, y se escuchaban bromas picantes, tanto entre hombres como entre mujeres. Varios grupos pasaban el tiempo cantando acompañados por alguna guitarra.

Claro que también había momentos tranquilos, e incluso de hastío, en los que los manifestantes veían televisión, alguna película en DVD,

leían, dormían una siesta o simplemente veían pasar a los peatones.

Andrés Manuel López Obrador pernoctaba en el Zócalo, donde se habían instalado los campamentos correspondientes a los estados de la República. Con frecuencia recorría todo el plantón saludando a sus seguidores, bromeando con ellos, explicándoles la seriedad de la situación, abundando sobre los argumentos que probaban cómo le habían robado la elección, deteniéndose a compartir algún alimento que le ofrecían.

Durante los primeros días, después de que la prensa crítica señaló que algunos de los candidatos electos llegaban “a pasar lista” en los campamentos y luego se iban a dormir a sus casas, AMLO les llamó la atención y les exigió compartir las difíciles condiciones con la gente que los seguía.

## **El camino del Tribunal Electoral**

En esos primeros días de agosto, además del plantón, el interés se centró en el recuento parcial de votos ordenado por el TEPJF. A raíz de ese anuncio, se creó la expectativa de que en esas 11,839 casillas los magistrados harían una especie de sondeo para ver si, en efecto, existían en ellas alteraciones de actas o boletas, o bien errores aritméticos que estuvieran sesgados en favor o en contra de AMLO, como éste lo afirmaba con total certeza.

Se pensaba que si el Tribunal Electoral encontraba indicios de fraude, podría entonces resolver la apertura de más casillas, y seguir así hasta llegar, en caso necesario, al recuento total de votos que demandaba la CBT. Con esta perspectiva, naturalmente el interés en esta fase del proceso era mayúsculo.

La prensa siguió el recuento día con día, aunque sin cifras, ni informes oficiales, sino con los datos que filtraban los representantes de los partidos. Por ejemplo, el 10 de agosto, los periódicos *Reforma* y *El Universal* informaron que el primer día se habían abierto y recontado las urnas de la votación presidencial en 1,888 casillas, 16% del total determinado por el TEPJF. En ellas, Calderón había perdido 296 votos, mientras que AMLO había ganado 489.

Si se tomaba en cuenta que las casillas determinadas por el Tribunal Electoral eran de sitios predominantemente panistas, de seguir la tendencia descrita, el resultado quedaría más o menos igual, a favor de Calderón.

En cambio, el mismo día *La Jornada* encabezaba sus ocho columnas asegurando que había “Irregularidades al por mayor al iniciar el conteo”. En la nota se informaba que en Jalisco se habían encontrado “cientos de urnas violadas” y que lo mismo había ocurrido en otros ocho estados.

Estos reportes diferenciados continuaron todos los días del recuento. Sin embargo, al finalizar el mismo, el 13 de agosto, el TEPJF anunció que no haría públicos los resultados finales, sino que remitiría las nuevas actas del recuento a los magistrados que habían resuelto abrir casillas, por distrito electoral. Serían ellos quienes en cada caso decidirían lo que correspondiera, tanto respecto al cómputo, como a los recursos que hubieran interpuesto los representantes de los partidos.

Este anuncio del Tribunal Electoral frustró las expectativas que la opinión pública se había formado acerca del recuento parcial, pues no se conocerían cifras oficiales de él. Los magistrados actuaron simplemente conforme a la normatividad que regía sus actividades, sin considerar lo que la opinión pública esperaba.

En el programa *Entre tres* del canal 13 de televisión, el lunes 14 de agosto, el jurista Pedro Salazar explicó que los magistrados no podían dar a conocer cifras oficiales, porque era posible que decidieran anular algunas de las casillas recontadas, en cuyo caso el resultado ya no sería el mismo. Por esto estaban imposibilitados para dar resultados parciales.

El jurista explicó también que el Tribunal Electoral había decidido abrir sólo un cierto número de casillas, porque había aplicado el “principio de inconexidad de las casillas”, que se desprendía de los procedimientos establecidos. De acuerdo con este principio, debía valorarse cada casilla impugnada, sin que pudieran generalizarse causales de anulación de una a otra u otras.

A falta de resultados oficiales, la prensa reprodujo los que dieron a conocer los principales interesados, la CBT y el PAN. Según el docu-

mento que la CBT expidió el 15 de agosto, el recuento parcial había demostrado con absoluta claridad que el 2 de julio se había efectuado “un operativo de defraudación organizado, masivo y sistemático para usurpar la voluntad ciudadana”. En 65% de las casillas recontadas —7,532—, se afirmaba, se habían sustraído o introducido votos de manera ilegal, lo que demostraba que se había dado una “falsificación dolosa” de las actas de escrutinio en esas casillas, mismas que, por lo tanto, debían ser anuladas.

Si se anularan esas casillas, los resultados cambiarían de la siguiente manera: Felipe Calderón perdería 651,538 votos introducidos en su favor fraudulentamente, más 149,653 producto de la falsificación de datos en las actas de escrutinio. En contraste, AMLO recuperaría “cerca de 692,299 votos” que le habían escamoteado.

Esto significaría que Andrés Manuel López Obrador había ganado la elección presidencial con cerca de 1.5 millones de votos. En conclusión, sobre la base del mismo recuento ordenado por el Tribunal Electoral, éste debía en justicia otorgar el triunfo a AMLO, decía la CBT.

En cambio, con base en sus cifras, César Nava, secretario general adjunto del CEN del PAN informó en una conferencia de prensa que en 98% de las casillas recontadas no se habían encontrado errores, mientras que sólo en cerca de 2% se reportaban fallas aritméticas superiores a los cinco votos, mismas que se distribuían por igual entre la CBT y el PAN, es decir, que no había “sesgo alguno a favor o en contra de algún candidato”.

El representante del PAN afirmó que la diferencia neta que arrojaría el recuento respecto a los resultados del IFE sería de aproximadamente “1,500 votos para uno o para otro lado”, es decir, alrededor de .04% de los cerca de 4 millones de votos recontados. Por lo tanto, el resultado final no sería muy distinto al original, y el triunfo correspondía a Felipe Calderón.

¿A quién creerle? Cada quien escogía según sus propias convicciones. Lo que sí se sabía, de acuerdo con las encuestas, era que la mayoría de la población creía que el Tribunal Electoral resolvería correctamente y que a esa decisión había que atenerse.

En una encuesta nacional telefónica levantada entre el 14 y el 15 de agosto por BGC, Beltrán & Asociados, 63% de la población consultada expresó mucha o regular confianza en el TEPJF, mientras un tercio manifestó poca o nula confianza. Asimismo, una proporción similar a la primera deseaba que AMLO aceptara lo que el Tribunal Electoral resolviera, a pesar de que cerca de la mitad consideraba que se debía realizar un recuento total de votos como lo exigía el candidato de la CBT.

Con los datos filtrados en la mayor parte de los medios de información, que favorecían la impresión de que el triunfo de Calderón sería ratificado por la máxima instancia judicial, empezó a hablarse insistentemente sobre la posibilidad de que toda la elección fuera anulada debido a las condiciones de inequidad en que se había desarrollado la contienda.

Esta posibilidad existía por el antecedente de que el TEPJF había anulado en años anteriores dos elecciones de gobernador, la primera en Tabasco y la segunda en Colima, por la llamada “causalidad de nulidad abstracta”. Esta causal se denominaba abstracta porque no se basaba en motivos concretos de distorsión de la votación en las casillas el mismo día de la elección, sino en condiciones de inequidad durante el proceso previo a la emisión de los sufragios.

Según explicó el jurista Pedro Salazar en el programa de televisión ya antes referido, la causalidad de nulidad abstracta se había originado en el hecho de que en los procesos electorales locales no participaba el TEPJF, sino los tribunales estatales, por lo que las distintas etapas de dichos procesos tenían que ser revisadas íntegramente por el Tribunal Electoral Federal, mismo que, al encontrar fallas graves en algunas de ellas, había resuelto anular el proceso completo.

Sin embargo, explicó el experto en derecho electoral, con el tiempo los magistrados del TEPJF se habían percatado de los inconvenientes de haber hecho a un lado el principio de definitividad de las etapas, que dominaba el conjunto de la legislación electoral mexicana. Según este principio, una vez que cada etapa era calificada como válida, no debía ser sometida nuevamente a revisión. Además, en los dos casos en los que se había aplicado la causalidad abstracta, habían ga-

nado los mismos candidatos que en la primera votación, lo que ponía en duda el alcance de ciertas conductas indebidas o de inequidad anteriores a los comicios.

Por otra parte, en el caso de las elecciones federales, el TEPJF sí había supervisado cada una de las etapas y cada una había sido declarada válida, por lo que en esta ocasión resultaba más factible que se aplicara la definitividad. Una razón más, explicó Pedro Salazar, era que un principio más fuerte adoptado en los 10 años de experiencia del Tribunal Electoral lo constituía la defensa del voto ciudadano, cuando se comprobaba que éste había sido emitido en condiciones de libertad.

### **La lucha más allá del Tribunal**

Lo que hoy parece indudable es que López Obrador veía venir con claridad un juicio adverso a su causa por parte del TEPJF, por lo que, una vez más, decidió elevar su apuesta, ya no tanto para presionar a los magistrados, sino para ir más allá del litigio legal sobre la elección, en lo que sería una nueva etapa de su lucha.

El 13 de agosto, en la sesión de la asamblea permanente, señaló que estaban “preparados para resistir el tiempo que sea necesario; podríamos estar aquí por años si así lo ameritan las circunstancias”.

Ante gritos de “¡Ni un paso atrás!”, AMLO propuso las siguientes acciones para entrar a una nueva etapa de movilización y de resistencia civil pacífica:

- Estar presentes con movilización el día y en el lugar en que se pretenda entregar la Constancia de presidente electo al candidato de la derecha.
- Estar presentes también el día primero de septiembre, fecha del Informe Presidencial de ese traidor a la democracia que es Vicente Fox.
- Que la noche del 15 de septiembre celebremos aquí el Grito de Independencia.
- Que al día siguiente de esa fecha histórica, el 16 de septiem-

bre, llevemos a cabo aquí una Convención Nacional Democrática, con representantes de todos los pueblos del país, para decidir, en definitiva, el papel que asumiremos en la vida pública de México.

La radicalización de López Obrador era previsible, tanto para los comentaristas y analistas de la prensa como para el público en general, que creía mayoritariamente que no aceptaría la resolución final del TEPJF si ésta le era desfavorable. La propuesta de presentarse de manera tumultuaria dondequiera que le fueran a dar a Felipe Calderón su Constancia de mayoría reflejaba que AMLO anticipaba una resolución contraria a su demanda.

Manifestarse en el Informe del “traidor a la democracia” concentraba los agravios acumulados contra Vicente Fox, entre los que se encontraban las muy intensas campañas de spots de radio y televisión del presidente de la República, que habían comenzado con su gobierno. Con la competencia electoral, a fines de 2005 y en enero de 2006; los anuncios incluyeron referencias a que había que seguir por el mismo camino de cambios que él había hecho, y así todo sería mejor en el futuro.

Las alusiones en favor de la continuidad para el próximo gobierno eran tan evidentes que desde febrero el IFE obligó al presidente a quitar de los spots la frase “si seguimos por este camino”, aunque estos promocionales se repitieron tanto, con ella y después sin ella, que no quedaba más remedio que asociarlos a la intención original. Asimismo, además de ataques constantes al populismo en sus discursos, Fox añadió una referencia todavía más explícita para el momento preelectoral, diciendo una y otra vez que el país iba tan bien que había que cambiar de jinete, pero no de caballo, es decir, no las políticas públicas impulsadas por su administración.

Después del 2 de julio, los seguidores de AMLO estaban absolutamente convencidos de que este uso de recursos al alcance del presidente había inclinado la balanza a favor del candidato del PAN. Olvidaban, sin embargo, que en 2003 campañas similares del presidente, quizá incluso más intensas, no rindieron frutos para obtener una mayoría en el

Congreso para “quitarle el freno al cambio”. De hecho, en la elección intermedia el PAN perdió curules a pesar del apoyo del primer mandatario y de su esposa, Marta Sahagún.

El odio perredista por Vicente Fox era, pues, muy explicable. De ahí que se propusieran echarle a perder la ceremonia de presentación del Informe Presidencial el primero de septiembre, así como la del tradicional Grito de Independencia en el Zócalo el 15 de septiembre.

Lo que resultaba más difícil de explicar era el reto implícito que AMLO le lanzaba, ni más ni menos, que al ejército mexicano, pues celebrar una Convención Nacional Democrática en el Zócalo, el 16 de septiembre, implicaba obstaculizar la realización del tradicional desfile militar con el que se celebra la Independencia nacional.

Animados por el inicio de una nueva etapa de la resistencia civil, azuzados por el encono que se respiraba en la ciudad y en el ámbito político a raíz del plantón y estimulados por la posibilidad de dañar a su enemigo Fox, al día siguiente, lunes 14 de agosto, un grupo de diputados electos del PRD, intentó establecer un plantón frente al Palacio Legislativo de San Lázaro.

La decisión había sido tomada por los integrantes de la coordinación general de campaña de AMLO, quizá para asegurarse un lugar desde el cual impedir la llegada del presidente a San Lázaro, el primero de septiembre. Según afirmó Dolores Padierna, dirigente de la corriente perredista Izquierda democrática nacional, la instrucción se la había transmitido Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno electo.

En su intento, los diputados fueron apoyados por manifestantes que habían estado en los campamentos de avenida Madero y que correspondían a las delegaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa. Iniciaron la instalación del campamento a las siete y media de la mañana. Para ello, colocaron un camión que bloqueaba la avenida, así como una camioneta de carga y pusieron tiendas de campaña.

A las nueve de la mañana, llegaron agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes impidieron que se acercaran más manifestantes a reforzar la acción. Durante algunas horas se intentó infructuosamente convencer a los perredistas de abandonar el lugar de manera pacífica.

A la una y media de la tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que llegaron en apoyo de la PFP montaron una valla alrededor de la movilización lopezobradorista. Como el levantamiento voluntario no fue posible, a las dos de la tarde con cuarenta y cinco minutos una grúa comenzó a mover los vehículos que bloqueaban el acceso a las instalaciones de San Lázaro. En ese momento, los diputados y sus acompañantes empezaron a arrojar piedras, botellas y otros objetos, y algunos legisladores se encaramaron en la grúa tratando de impedir su funcionamiento. Aunque moderadamente, los policías debieron usar la fuerza para mover a los manifestantes.

En la trifulca, algunos diputados fueron golpeados a pesar de que gritaban que como representantes populares gozaban de fuero y alegaban que la policía no podía tocarlos. La tensión en el lugar continuó por algunas horas después del desalojo. Los manifestantes lanzaban arengas contra la represión y denunciaban que la investidura de los legisladores había sido violada. A las seis de la tarde los perredistas volvieron caminando al Zócalo.

A las siete de la noche, en la sesión de la asamblea permanente en el Zócalo, AMLO dijo que Fox y Calderón se habían quitado las máscaras de demócratas y se revelaban como lo que realmente eran: políticos que usaban métodos como los de Victoriano Huerta y Gustavo Díaz Ordaz.

A partir de ese momento, la PFP y el Estado Mayor Presidencial rodearon totalmente el edificio de San Lázaro colocando una valla de acero de casi tres metros de altura para disuadir con una fuerza contundente cualquier otro intento de los lopezobradoristas. En el Congreso, los perredistas denunciaron repetidamente y con gran indignación la agresión de que habían sido objeto sus compañeros. También se unieron a la protesta legisladores del PRI. En los siguientes días, ésa fue una constante en las declaraciones de los diputados: su exigencia de que se levantara el cerco a San Lázaro.

El martes 15 de agosto, Andrés Manuel López Obrador dio detalles de lo que sería la Convención Nacional Democrática (CND), a la que enmarcó con referencias constitucionales y paralelismos históricos.

En la asamblea informativa del Zócalo, dijo que, ante el intento de una “minoría rapaz” de imponer autoridades para mantener y acrecentar sus privilegios, era necesario acudir al artículo 39 de la Constitución, que a la letra dice: ...“El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Con ese fundamento, llamaba a los ciudadanos libres “a construir las bases de un verdadero Estado social democrático de derecho y a llevar a cabo las transformaciones profundas que el país necesita”.

López Obrador explicó que el objetivo de la CND sería “decidir, con representantes de todos los pueblos del país, el papel que asumiremos en la vida pública de México ante la actual circunstancia”. Añadió que los asistentes serían “representantes electos en asambleas populares en pueblos, comunidades, municipios, organizaciones civiles, sociales y políticas”, así como quienes ocuparan cargos de elección popular que desearan asistir y “hombres y mujeres libres sin distinción de raza, credo, ideología o condición social”.

Los delegados deberían acreditarse ante una comisión organizadora, compuesta por ocho personas, la cual también invitaría a personalidades civiles y a movimientos sociales que participarían como observadores. Los delegados tendrían derecho a voz y voto y los invitados, sólo a voz. El transporte y alimentación correrían por cuenta de los delegados o colectivos a los que representarían. El reglamento, los proyectos de resolución, el temario y los procedimientos de discusión se darían a conocer con anticipación.

Para terminar, emocionado, hizo una remembranza: “Ahora recordé un hecho histórico. En un jacal entre Puebla y Morelos se firmó el Plan de Ayala y cuando lo firmó el general Zapata, salió y dijo: ‘El que no tenga miedo que pase a firmarlo’”, y pidió a todos los asistentes firmar la convocatoria.

Durante los siguientes días, AMLO siguió de manera consistente radicalizando su discurso, por una parte denunciando cada vez con más fuerza la corrupción de las instituciones y retando al presidente Fox, y por otra afinando el alcance que podría tener la Convención Nacional Democrática.

Así, por ejemplo, el 17 de agosto habló de la posibilidad de que Fox utilizara al ejército para desalojar los campamentos, rumor que corrió por el plantón más de una vez, ante lo que afirmó que no dejarían las avenidas y que ahí estarían el 16 de septiembre. Exaltado, afirmó que no permitirían que se usara al ejército para imponer a un pelele. Y si Fox decidía hacerlo, como Huerta o Díaz Ordaz, entonces “Adelante, ciudadano [Fox], aquí estamos!”, gritó al tiempo que daba un puñetazo sobre el atril desde el que hablaba.

En cada uno de sus discursos abundaba sobre los cientos de miles de votos que le habían sido arrebatados mediante maniobras fraudulentas en las casillas. Insistía en que se anularan 7,532 casillas con irregularidades que había detectado la CBT en el recuento parcial, pues así el resultado se voltearía en su favor.

El 20 de agosto, López Obrador arreció la carga contra el TEPJF. Afirmó, contundente: “No nos estamos chupando el dedo, sabemos que tienen sometidos a fuertes presiones a los magistrados y no es aventurado decir que están a la orden del día los cañonazos de dinero o los ofrecimientos de cargos públicos”.

Germán Martínez Cázares, representante del PAN ante el IFE, calificó al día siguiente como “inadmisibles y groseros” esta acusación contra los magistrados del TEPJF. Señaló que, como de costumbre, AMLO no se molestaba en probar su dicho, pues no daba nombres de quiénes podían estar incurriendo en un delito grave, ni a qué jueces podrían haberse hecho los ofrecimientos. Con esas actitudes, remató, el candidato perdedor “se encarga día con día de demostrarle a la ciudadanía que nuestra campaña tenía razón y que es un peligro para México”.

El 24 de agosto, López Obrador fue más allá, dijo que el Tribunal Electoral tenía dos caminos: “Actuar con rectitud, decoro y patriotismo, o la traición e irse a la historia, pero al basurero de la historia”. Al día siguiente, advirtió que si el TEPJF convalidaba el fraude, sería equivalente a dar un golpe de Estado. El desprecio que mostraba por el Tribunal Electoral iba en aumento.

Pablo Gómez, senador electo por el PRD, anunció el 24 de agosto que como muestra de rechazo a la traición a la democracia por parte

de Vicente Fox, era posible que los legisladores de su partido tomaran la tribuna del Congreso el primero de septiembre.

Al definir gradualmente lo que sería la Convención Nacional Democrática, AMLO fue cada vez más claro en que no reconocería de ningún modo a un gobierno que no fuera el de él mismo.

En una entrevista publicada por el periódico francés *Le Monde*, el 23 de agosto, el candidato perredista expuso por primera vez que la CND podría “nombrar a un presidente legítimo y a una coordinación de resistencia popular”. Aseguró que si el fraude se consumaba, él continuaría luchando “hasta la restauración de la República”, utilizando una frase que una vez más lo equiparaba con Benito Juárez.

Dado que todo indicaba que el Tribunal Electoral rechazaría la solicitud de la CBT y refrendaría el triunfo de Felipe Calderón, el 27 de agosto AMLO advirtió: “Ya no nos importa lo que hagan. No tenemos ningún respeto por sus instituciones porque no son las instituciones del pueblo, y nosotros vamos a crear nuestras instituciones, las del pueblo, de conformidad con el artículo 39 constitucional”.

La sociedad veía con creciente inquietud cómo AMLO y sus seguidores usaban un discurso cada vez más retador y se alejaban de las vías institucionales para canalizar su protesta.

Ese mismo 27 de agosto, el periódico *Reforma* publicó los resultados de una encuesta nacional en viviendas levantada del 18 al 20 de agosto: 69% de los encuestados no estaban de acuerdo con que AMLO hiciera una convención en el Zócalo el mismo día del desfile, mientras 23% sí lo estaba. Sobre la confianza en el TEPJF, 61% manifestaba tener mucha o algo y 35% poca o nada. En cuanto a la limpieza de la elección del 2 de julio, 33% creía que había habido fraude, 55% que había sido limpia y 12% declaró no saber.

## La elección en Chiapas

Además de su intensa actividad al frente del movimiento de resistencia civil en la ciudad de México, López Obrador se dio tiempo para apoyar al candidato de la Coalición por el Bien de Todos a la gubernatura

de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, quien había renunciado al PRI para ser postulado por el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia.

AMLO viajó varias veces a Chiapas para apoyar a Juan Sabines en sus actos de campaña. El 12 de agosto, denunció que el PRI y el PAN le querían “echar montón” al candidato de la CBT, pues el candidato del PAN, Francisco Rojas, al ver que las preferencias electorales por él eran mínimas, había declinado a favor del candidato del PRI, José Antonio Aguilar Bodegas, quien se encontraba abajo del perredista en las intenciones del voto, pero no muy lejos.

El domingo 20 de agosto se llevaron a cabo las elecciones chiapanecas. Al cerrarse el PREP estatal, la ventaja de Sabines era de apenas 0.22%. El Instituto Estatal Electoral (IEE), advirtió que con ese margen nadie podía declararse vencedor. La alianza PRI-PAN anunció que impugnaría el resultado, pues los comicios habían sido inequitativos por la participación del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía en favor del candidato de su partido. El candidato de la CBT, por su parte, declaró que aceptaría lo que el Tribunal resolviera.

Una vez verificado el cómputo distrital, el 27 de agosto el IEE declaró vencedor a Juan Sabines por apenas 6,282 votos, es decir, 0.53% de diferencia. Aguilar Bodegas insistió en que impugnaría ante el TEPJF, pero aclaró que no se manifestaría en las calles y aceptaría la resolución que se dictara.

Al saberse el resultado, el mismo domingo 27, durante la sesión de asamblea permanente AMLO se ufano: “Les ganamos limpiamente en Chiapas por 125,000 votos de ventaja [el 2 de julio] y les volvimos a repetir la medicina, la dosis, ahora en la elección estatal”.

Aparentemente López Obrador no se daba cuenta de la diferencia entre 125,000 votos a su favor en la elección presidencial y los 6,282 en la estatal a favor de Sabines. No quería ver lo que las encuestas seguían mostrando con toda claridad, que su actitud después del 2 de julio le estaba restando simpatías rápidamente, incluso en los estados en los que él había triunfado de manera holgada. De hecho, varios analistas se preguntaron si su presencia en Chiapas le había reducido votos al candidato de la CBT.

## La rebelión contra las instituciones

En este marco, el 28 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer la resolución sobre los 375 juicios de inconformidad que presentaron los distintos partidos políticos. De ellos, la mayoría, 240, correspondían a la CBT, 133 al PAN y dos a ciudadanos en lo individual. El resultado, votado por unanimidad, fue la anulación de 237,736 sufragios.

De los votos anulados, 81,080 se descontaron a Felipe Calderón y 76,897 a AMLO. De esta manera, la ventaja de Calderón Hinojosa sobre López Obrador se redujo en 4,183 votos, aunque la proporción se mantuvo igual: 0.58 por ciento.

Al fundamentar su decisión, los magistrados explicaron que habían privilegiado los principios de sufragio efectivo y de un ciudadano un voto. “Podemos decirle a la ciudadanía que sus votos valieron, que fueron contados; actuamos con todo cuidado y escrúpulo para que no se perdiera un solo voto”. El presidente del Tribunal, Leonel Castillo, indicó que cuando no se habían invocado hechos para configurar una hipótesis judicial, como al hablarse de “irregularidades múltiples en una gran cantidad de casillas”, ellos no habían procedido a investigarlas, pues sus facultades no eran las de fiscales. “Irregularidades”, abundó, era un mero calificativo, pero “se necesitan hechos a los cuales pueda recaerles ese calificativo”.

Asimismo, los magistrados expusieron que la CBT no había interpuesto juicios de recuento para la totalidad de los distritos; única forma en que se podía haber solicitado el recuento completo de la votación. Añadieron que, en vez de eso, la Coalición por el Bien de Todos había presentado escritos elaborados con machotes y llenos de generalidades.

Con esta resolución se daba por terminada la etapa de las impugnaciones y se entraba a la calificación sobre la validez de la elección. La demanda de la CBT para no declarar dicha validez se resolvería en los siguientes días.

Ese mismo día, por la noche, vino la respuesta de AMLO. Durante la asamblea permanente, afirmó que el TEPJF había decidido

convalidar el fraude [...] y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial. Con esta decisión se rompe el orden constitucional y [...] se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un golpe de Estado. Los siete magistrados del supuesto Tribunal Electoral asumieron una actitud cómplice al desechar pruebas contundentes y pretender ignorar lo que es de dominio público.

Por ello, López Obrador propuso desconocer el cómputo oficial del TEPJF y rechazar la usurpación no reconociendo a Felipe Calderón como presidente, ni a los funcionarios que designara.

Asimismo, planteó “que la Convención Nacional Democrática resuelva [...] con el voto libre de los delegados [...] si habremos de reconocer y ratificar a un presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos [...] a un jefe de Gobierno en Resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo o a un Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación”. Finalmente, propuso que la CND decidiera si el órgano de gobierno que se eligiera y quien lo representara “tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el primero de diciembre”.

Cuatro días después, el primero de septiembre, como lo habían anunciado, los diputados y senadores del PRD reventaron la ceremonia de presentación del Informe Presidencial. De nada sirvió el cerco establecido por fuerzas del orden en torno a la Cámara de Diputados, pues los legisladores perredistas lograron su objetivo rompiendo el orden de las intervenciones previas a la llegada del presidente de la República.

Así, cuando tocó su turno, el orador del PRD, el senador Carlos Navarrete, preguntó: “¿En qué momento, ciudadanos legisladores y legisladoras, cuándo este Congreso aprobó la suspensión de garantías?”, pues a eso equivalía “el impresionante e indignante operativo de fuerzas de seguridad” establecido alrededor del Palacio Legislativo “y a va-

rios kilómetros a la redonda”. Por ello, concluyó, “no pronunciaré el discurso que expresa la opinión del Partido de la Revolución Democrática, pues no existen las condiciones para que el Congreso sesione y no abandonaré, ni mis compañeros lo harán, esta tribuna hasta que se reanude la vigencia de las garantías constitucionales que han sido suspendidas de facto, en una parte de la ciudad de México, por el presidente Vicente Fox Quesada”.

Cuando empezaba esta última parte de su breve intervención, sus compañeros de partido se levantaron de sus asientos y se dirigieron a la tribuna, la cual ocuparon completamente ante la mirada sorprendida de las demás fracciones parlamentarias. Algunos llevaban carteles con la imagen de Fox y la leyenda “traidor a la democracia”, otros sostenían banderitas tricolores, unos más mostraban ejemplares de la Constitución con pastas negras.

De esta manera impidieron que el líder de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios Córdova —el último en el orden de intervenciones—, leyera la posición de su partido. Pero la consecuencia más importante sería la de evitar que el presidente Fox llegara a la tribuna y entregara ahí el informe por escrito como señala la Constitución.

En el Zócalo, desde donde López Obrador y sus partidarios seguían la ceremonia en pantallas gigantes, estallaron las ovaciones a sus representantes en el Poder Legislativo. Antes de que empezara el acto, a propuesta de AMLO, la asamblea había decidido no marchar hacia San Lázaro, como era el plan original. Esta determinación fue presentada por los perredistas como una actitud prudente y responsable.

Para quienes seguían desde sus hogares la transmisión y para quienes se encontraban en San Lázaro, comenzaron momentos de expectación, pues era una situación, como tantas otras de esa temporada, que nunca se había vivido. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Zermeño, intentó infructuosamente convencer al líder de los perredistas, Javier González Garza, de desalojar el espacio tomado; éste insistía en que lo harían hasta que se retiraran las fuerzas de seguridad.

La Cámara de Diputados era una competencia de gritos. Moles-  
tos por haber sido sorprendidos por la estrategia perredista, los dipu-  
tados y senadores panistas coreaban “¡Vicente, Vicente...!” apoyados  
por una parte del público en la galería y los palcos, mientras los legis-  
ladores del PRD se desgañitaban: “¡Voto por voto, casilla por casilla!”,  
y después “¡Sufragio efectivo, no imposición!”. El secretario de Gober-  
nación, Carlos Abascal, que se encontraba en el salón de plenos con todo  
el gabinete, salió apresurado a comunicarse con el presidente de la Re-  
pública, quien ya se encontraba en camino. Cuando llegó, unos minu-  
tos después, comentó con la comisión de cortesía que lo recibió en la  
puerta exterior que era “una verdadera lástima que en el país ocurra  
esto”.

Después de rápidas consultas se decidió que Rodolfo Dorador,  
secretario de la mesa directiva de la Cámara, saliera del salón al vestí-  
bulo y ahí recibiera el Informe de manos del presidente, con lo que se  
cumpliría lo dispuesto en la ley. Así se hizo, y en los aparatos de tele-  
visión en todo el país se pudo observar a Vicente Fox, humillado, leyendo  
una tarjeta al momento de entregar el Informe, con la explicación de  
que un grupo de legisladores había hecho imposible la lectura de su  
mensaje.

Los diputados perredistas cambiaron entonces sus consignas  
por la de “¡Entregas y te vas!”, recordando la vez que el presidente Fox  
le pidió a Fidel Castro retirarse luego de una comida. Una vez más, en  
el Zócalo, los partidarios de AMLO celebraron con gran bullicio la nue-  
va derrota presidencial. Después, López Obrador elogiaría el compor-  
tamiento “digno y decoroso” de los legisladores perredistas.

Luego de retirarse de San Lázaro, el presidente leyó un mensaje  
en cadena nacional de televisión. Explicó que quienes le habían impe-  
dido presentar su Informe en la Cámara no lo lastimaban a él, sino a  
la investidura presidencial y al pueblo de México. “En democracia —ex-  
presó— todas las voces deben ser escuchadas.”

Sin mencionarlo por su nombre, Fox le reprochó a AMLO pre-  
tender “someter a la democracia bajo el argumento de la democra-  
cia [...] acorralarla por la vía de la intransigencia y la violencia [...]”.

Advirtió que “... una sociedad dividida es una sociedad débil”. Al hacer un llamado a la unidad, el primer mandatario abogó por la prudencia contra la estridencia, por la razón contra la cerrazón, por la armonía contra la anarquía.

Dos días después los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado hablaron ante la multitud en la acostumbrada sesión de la asamblea permanente en el Zócalo. El senador Carlos Navarrete se ufano de haber hecho jirones “la vieja y carcomida institución presidencial” a las puertas del Congreso, y concluyó con orgullo: “Ya no hay institución presidencial”.

En su intervención ese día, López Obrador expresó que la Convención Nacional Democrática podría discutir la posibilidad de convocar a un nuevo Constituyente para refundar las instituciones. El mismo primero de septiembre, durante su intervención ante sus partidarios, AMLO había afirmado que estaba en marcha una revolución de las conciencias para que “podamos construir las instituciones que el pueblo decida. Vamos a la Convención porque vamos a tener un gobierno de la República. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones!”, terminó con furia.

Con esta frase López Obrador culminó la arremetida verbal contra las instituciones que había venido realizando en los últimos días. Esa expresión fue reproducida por todos los medios de información y con ella marcó el curso de sus siguientes acciones, separadas ya totalmente de la impugnación electoral.

Al analizarla, Jesús Silva-Herzog Márquez, en su artículo publicado en *Reforma* el 4 de septiembre, hacía ver que el llamado incendiario de AMLO incluía también al propio PRD, una de las instituciones más vitales de la democracia mexicana, así como a los gobiernos del Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán, Baja California Sur y Guerrero, encabezados por perredistas.

“Parlamentarios saboteando al parlamento. El PRD perjudicando al PRD. ¿No se dan cuenta los perredistas de que la casa que están tratando de demoler nos aloja a todos...? Es claro que el caudillo llama a quemarlo todo. Pero ¿puede su partido acompañarlo en esta tarea...? Deslealtad democrática en escena... Una cosa es clara: mandar al diablo

las instituciones es mandar al diablo la democracia liberal”, concluía el editorialista.

### **El Tribunal Electoral valida la elección**

Durante los siguientes días, cancelada la posibilidad de revertir el resultado de la elección presidencial a favor de AMLO, la CBT mantuvo viva en la opinión pública la alternativa de que el TEPJF decidiera anular el proceso completo por la causal de nulidad abstracta. En ese caso, sería necesario designar a un presidente interino quien, a su vez, debería convocar a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 18 meses.

Desde julio, en los medios se habían venido barajando varios nombres, pero los más mencionados fueron Cuauhtémoc Cárdenas y Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, a quien desde antes de las campañas electorales se le consideraba como posible candidato a la Presidencia.

Sin embargo, ambos personajes desestimaron esa posibilidad. De hecho, Cárdenas sostenía un enfrentamiento más bien abierto con AMLO y sus adeptos en el PRD, por lo que difícilmente hubiera podido fungir como un presidente interino que fuera aceptado por todos los contendientes. Por su parte, De la Fuente señaló categórico que, en su caso, tal posibilidad era “política ficción”.

Contra la expectativa alentada por la CBT, en los noticiarios de radio y televisión, en los programas de análisis político, en los artículos editoriales y en las columnas de los periódicos y revistas, se suponía, en general, que el Tribunal Electoral validaría la elección y entregaría la Constancia de mayoría a Felipe Calderón.

Y así sucedió. El 5 de septiembre —día anterior a que se venciera el plazo legal—, los magistrados dieron a conocer su veredicto final: la elección presidencial la había ganado Felipe Calderón.

Los resultados definitivos de la votación presidencial, que se presentaron en el dictamen correspondiente de manera desglosada, fueron: 14'916,927 votos para el candidato del PAN; 9'237,000 para el de la Alianza por México (PRI-PVEM); 14'683,096 para el candidato de la CBT

(PRD-PT-Convergencia); 397,550 para el de Nueva Alianza; 1'124,280 para la candidata de Alternativa Socialdemócrata, y 298,204 para candidatos no registrados.

El total de votos válidos fue de 40'657,057. Sumando los anulados e inválidos, el total de sufragios emitidos el 2 de julio ascendió a 41'557,430.

Las cosas, sin embargo, no fueron tan sencillas. En su valoración del proceso en su conjunto, los magistrados —que aprobaron el dictamen por unanimidad— señalaron que las intervenciones del presidente Fox en favor del candidato del PAN “se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios”. De hecho, al leer un resumen del dictamen, la magistrada Alfonsina Berta Navarro afirmó que ése había sido el mayor riesgo para la validez de las elecciones. Aclaró que hubiera sido mayor de no haber intervenido la autoridad para pedir al presidente retirar la frase ya mencionada de sus spots y que no se entrometiera más en el proceso, como lo había hecho el IFE.

Asimismo, los magistrados registraron como un riesgo la campaña de anuncios lanzada por el Consejo Coordinador Empresarial —en los que se alentaba la continuidad en el camino de México— en los días previos a los comicios.

En ambos casos, sin embargo, los magistrados consideraron que no era posible determinar el grado en el que se hubiera podido influir en los votantes con esas campañas. Además, anotaron que el IFE había intervenido al ordenar la suspensión de las campañas electorales en la llamada “tregua navideña” y la Suprema Corte de Justicia de la Nación había obligado al gobierno federal a incluir en sus spots la aclaración de que eran ajenos a la propaganda electoral.

Los magistrados citaron también el acuerdo y las reglas de neutralidad emitidos por el IFE y respetados por los partidos y las autoridades federales, estatales y municipales, en el sentido de no realizar promociones ni propaganda de ningún tipo durante los 40 días previos al 2 de julio y durante la jornada electoral, lo que en todo caso habría reducido cualquier influencia que las campañas citadas hubieran tenido sobre los electores.

De igual manera, indicaron que la CBT había sido una de las fuerzas políticas con mayor cantidad de financiamiento público y prerrogativas que la ley otorga. De hecho, precisaba el dictamen, de acuerdo con el seguimiento de medios realizado por el IFE, la CBT había sido la que mayor número de spots televisivos había difundido durante el mes anterior al día de la elección y había recibido la mayor cobertura en los medios electrónicos de información.

Respecto a la campaña negativa de los panistas en la que se decía que López Obrador era un “peligro para México” —a la que los perredistas llamaban “guerra sucia”—, los magistrados determinaron que el PRD había utilizado la misma técnica en una serie de spots de su campaña y que no se podía denunciar lo que uno mismo había puesto en práctica.

De esta manera, remataban los magistrados, “vistos en su conjunto los acontecimientos señalados, no generan convicción de una afectación importante a los principios rectores de las elecciones democráticas, principalmente la libertad del voto”, por lo que procedía a dar como triunfador de la elección a Felipe Calderón.

Analizados con todo detalle los requisitos de elegibilidad del candidato triunfador y cumplidos los mismos, el TEPJF lo declaró “presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo comprendido del primero de diciembre del año dos mil seis al treinta de noviembre del año dos mil doce”. La resolución se comunicaría a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a fin de que ordenara la publicación del bando solemne con esta declaración, y se notificaría a Felipe Calderón para que recibiera su Constancia de mayoría.

Ese y los días siguientes se suscitó una intensa discusión en la opinión pública sobre el dictamen del TEPJF. Hubo quienes consideraron que los magistrados habían fracasado en dar certeza total al proceso, porque habían reconocido graves irregularidades en él, pero de todos modos habían declarado la validez de la elección.

Entre quienes opinaron así hubo incluso algunos que calificaron el dictamen como una burla. Éste fue el caso del editorial institucional de *La Jornada* y de Miguel Ángel Granados Chapa en su columna

en *Reforma* publicadas al día siguiente. ¿Cómo era posible, se preguntaban, que se reconocieran conductas indebidas del presidente de la República y el Consejo Coordinador Empresarial y se dejaran sin sanción alguna, alentando así la impunidad?

Sin embargo, aun entre quienes objetaron la resolución, se manifestó la postura de que había que acatarla, pues así lo mandaba la Constitución. El Tribunal Electoral era, sin duda alguna, la última instancia, y, a riesgo de poner al país en una situación de ingobernabilidad, había que atenerse al resultado jurídico.

Del otro lado, se encomió la actitud del TEPJF, que había considerado hasta los más mínimos detalles de las impugnaciones recibidas y había resuelto cada una ponderándola con las demás. En este grupo se pensaba, como lo expuso el Tribunal Electoral, que se habían cumplido todos los pasos del proceso electoral desde su inicio y en cada etapa, hasta el 2 de julio, que los contrincantes habían hecho valer sus derechos y que habían aceptado la culminación de cada fase.

En el Zócalo, durante la asamblea informativa, AMLO calificó ese día de “aciago” y difícil para la democracia. Refrendó su decisión de desconocer la resolución del Tribunal Electoral y a Calderón como presidente, así como de encabezar el esfuerzo del pueblo por recuperar la soberanía nacional y darse las instituciones que le permitieran hacer valer sus derechos fundamentales.

Para ello, en primer lugar, tendrían que sacarse de la cabeza la idea de que debían obedecer lo que las instituciones corruptas resolvieran. En segundo término, irían a la Convención Nacional Democrática, en la que decidirían el rumbo que debía tomar el país para “crear una República auténtica”. Luego, López Obrador instó a los presentes a no sentirse menos que sus adversarios, pues eran ellos quienes debían avergonzarse, y preguntó: “¿Están tristes?”. Después de escuchar el “¡No!” colectivo, alentó: “Eso es. Que nadie se apachurre, vamos hacia adelante...”.

## Los pasos del presidente electo

Al día siguiente, 6 de septiembre, Felipe Calderón acudió a la

sede del TEPJF a recibir su Constancia de mayoría. Como lo habían anunciado en la asamblea del 13 de agosto, lo esperaban iracundos manifestantes de la CBT, que arrojaron huevos y consignas injuriosas a quienes llegaban como invitados. El presidente electo entró por una puerta trasera, lejos de los inconformes. Ahí, una vez más, se comprometió con la búsqueda del diálogo y de acuerdos, para encabezar desde ese momento “una etapa de conciliación entre los mexicanos”.

Desde que el IFE declaró que había obtenido la mayoría de los votos el 2 de julio, Felipe Calderón había venido llamando al diálogo a sus adversarios y, al mismo tiempo, defendiendo decididamente su triunfo.

Así, el 10 de agosto, en una reunión con sus partidarios en Toluca, y en varias ocasiones más, Calderón hizo llamados directos a sus adversarios a que encontraran juntos las mejores formas para impulsar el desarrollo y combatir a los verdaderos enemigos de México, que eran la pobreza, la inseguridad y el desempleo. El 18 de agosto, explicó que su agenda era coincidente en varios puntos con la de AMLO y el PRD, al grado de que, aseguró, “los vamos a rebasar por la izquierda”.

Al mismo tiempo, Felipe Calderón criticaba el comportamiento de AMLO contra las instituciones. Afirmaba que los lopezobradoristas no conseguirían con la movilización en la calle lo que no habían obtenido en las urnas. Se ufanaba: “Pésele a quien le pese y duélale a quien le duela, ganamos la Presidencia de la República”, como lo expresó en un encuentro nacional de diputados locales del PAN en Nuevo Vallarta, Nayarit, el 25 de agosto.

El mismo día en que recibió la Constancia de mayoría, por la mañana, se entrevistó por separado con los dirigentes de los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata. Con ellos habló sobre la necesidad de avanzar en la reforma política y trabajar en las reformas que el país necesitaba para impulsar el desarrollo.

También el 6 de septiembre concedió una conferencia de prensa. A preguntas expresas, dejó en claro que en su gobierno no se usaría más el símbolo nacional incompleto, el cual la opinión pública había

bautizado como el “águila mocha”, y que ejercería el poder de manera unipersonal como lo dispone la Constitución y no con una “pareja presidencial”. Ambas posiciones lo diferenciaban del estilo del presidente Fox.

En los días que siguieron, el presidente electo insistió una y otra vez en el llamado al diálogo, a dejar atrás las rivalidades electorales en beneficio del interés general y en acercarse a quienes serían la oposición durante su mandato. La respuesta de sus adversarios políticos fue diversa. A pesar de la línea dictada por AMLO, en el PRD, en general, los gobernadores mantuvieron una postura institucional, con excepción del jefe de gobierno del Distrito Federal.

El 8 de septiembre, Calderón acudió a la ceremonia en que la mandataria zacatecana, Amalia García, presentó su informe de gobierno y el mismo día fue a Michoacán a un evento con sus partidarios. Ese mismo día 8, el gobernador Lázaro Cárdenas, también perredista, reconoció públicamente a Calderón como presidente electo y dio a conocer que trabajaría con él. Explicó que no era un asunto de política, sino de derecho, pues el TEPJF había emitido su fallo definitivo.

En contraste, durante su visita a Morelia, partidarios de AMLO impidieron que Calderón hiciera una guardia de honor en el monumento a José María Morelos antes de su reunión con los panistas del estado. El encuentro fue en un recinto cerrado, que tuvo que rodearse de vallas metálicas que trataron de ser removidas por la fuerza por los seguidores de López Obrador, en un intento por frustrar el acto.

El presidente electo mostró su carácter cuando, al terminar la reunión con sus partidarios, regresó sorpresivamente al monumento a Morelos y cumplió su guardia de honor. Al enterarse, los perredistas, enojados, volvieron al lugar y quemaron la ofrenda floral que había depositado Calderón.

El 10 de septiembre, el presidente electo tuvo un festejo masivo con sus seguidores en la capital, en la Plaza de toros México. En su discurso, recordó que desde el comienzo de su campaña había sostenido que ganaría porque sus adversarios representaban el pasado, mientras que él representaba el futuro. “Y así fue, derrotamos al pasado que

amenazaba y aún amaga con atrapar a México en el odio y el rencor.” Añadió que el México de la ley y las instituciones le había ganado al pasado que despreciaba la ley y aborrecía a las instituciones. Por eso, remató, “ha ganado la fuerza de los pacíficos”.

Sus declaraciones levantaron ámpula. Dos días después, en una reunión con mandatarios estatales agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), la zacatecana Amalia García le reprochó haber caracterizado a quienes votaron por AMLO como violentos. Dijo que lo que se necesitaba en ese momento era comprender que resultaba urgente atender “las causas de la irritación social”.

En su intervención, Felipe Calderón expresó su acuerdo con la gobernadora y su deseo de que todos los actores políticos hicieran “su mayor esfuerzo para privilegiar el diálogo y garantizar la integridad constitucional”. Los mandatarios estatales perredistas no aceptaron en esa ocasión posar para la fotografía de grupo con el presidente electo, ni se despidieron de él. Sin embargo, durante la reunión, manifestaron su apego a la institucionalidad y que trabajarían con el gobierno de Calderón.

El 12 de septiembre, el presidente electo se entrevistó con el dirigente nacional y los coordinadores parlamentarios del PRI, quienes al salir del encuentro dijeron estar dispuestos a dialogar con el nuevo gobierno. En conjunto, llamaron a todos a construir “una agenda que nos permita transitar en esta etapa de tensión que vive el país”. Como lo había dicho el mismo Calderón otras veces, los priístas recalcaron que el espacio más importante para los acuerdos sería el Congreso. Explícitamente, reiteraron su respeto al fallo del TEPJF.

El conflicto postelectoral mexicano fue objeto de atención también fuera de nuestras fronteras. Después de la resolución definitiva del TEPJF, los gobiernos del mundo reconocieron casi unánimemente que el presidente electo de México era Felipe Calderón. El mismo día en que el tribunal emitió su fallo —el 5 de septiembre— lo felicitaron los gobiernos de Bélgica, Chile, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Al día siguiente, llegaron parabienes tanto de mandatarios de derecha como de izquierda: de los presidentes George Bush de Estados Unidos,

Jacques Chirac de Francia, Angela Merkel de Alemania, Michelle Bachelet de Chile, Hu Jintao de China y Luis Ignacio Lula Da Silva de Brasil.

Una semana después, dos excepciones fueron notables, la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con quien había sido comparado AMLO en los spots de la campaña sucia panista, y la del cubano Fidel Castro.

El 12 de septiembre, luego de cantar “México lindo y querido”, Hugo Chávez señaló que su país evaluaba con cuidado si reconocía el triunfo de la derecha en México, pues ahí habían “pasado cosas muy extrañas”.

El presidente venezolano, quien durante las campañas había expresado simpatía hacia el candidato de la izquierda mexicana, declaró el 15 de septiembre —día anterior a la Convención Nacional Democrática—, que se estaba gestando un nuevo México, pues se daría “un nuevo grito de libertad”, con el liderazgo de López Obrador.

Cuba tampoco emitió una felicitación al presidente electo, pero sí una declaración del ministro de Economía en el sentido de que esperaba que la relación con México mejorara, pues también se había deteriorado durante la administración del presidente Fox.

Si bien hubo medios de información de los Estados Unidos y Europa que en su momento aceptaron la pertinencia de la demanda del recuento total, prácticamente todos —quizá con la excepción del periódico *Granma* de Cuba, que daba como un hecho la existencia del fraude— opinaron que AMLO debía aceptar la resolución de la máxima autoridad electoral y admitir su derrota.

## **La disputa por los símbolos: el grito y el desfile militar**

Después de lo que consideró como un triunfo sobre Fox —impedir la ceremonia del primero de septiembre—, López Obrador mantuvo en vilo a la sociedad con el anuncio de que daría el Grito de Independencia en el Zócalo el 15 de septiembre y realizaría su Convención Nacional Democrática el día 16, fecha en que se efectuaba el tradicional desfile militar.

El vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar, afirmaba contundentemente en sus conferencias matutinas que Vicente Fox daría el grito, como cada año, desde Palacio Nacional, en el Zócalo, mientras López Obrador, en sus asambleas informativas, aseguraba que no darían ni un paso atrás y que daría el grito a la misma hora que el Presidente, a las once de la noche.

Los mexicanos temían que la sangre llegara al río en la forma de un enfrentamiento entre los lopezobradoristas y el Estado Mayor Presidencial, o bien con personas llevadas por el gobierno federal a la verbena que cada año tenía lugar en el Zócalo.

Quizá la preocupación más grande de la sociedad era el desafío de AMLO al ejército que implicaban sus reiteradas afirmaciones de que el plantón no se movería, porque el 16 se llevaría a cabo en el Zócalo la Convención Nacional Democrática. Aunque más de una vez expresó que no quería pleito con el ejército, también repetidamente llamó al mismo a no reprimir a su movimiento si se le ordenaba hacerlo, pues contribuiría a imponer a un gobierno producto del fraude.

Antes del diferendo sobre quién ocuparía el Zócalo el 16 de septiembre, cuando corrieron rumores a mediados de agosto de que los campamentos del plantón serían desalojados por la Policía Federal Preventiva, López Obrador dijo en distintas ocasiones que eso equivaldría a enfrentarse al ejército, pues la PFP estaba, como todos sabían, integrada por soldados. Si eso ocurría, señaló el primero y el 2 de septiembre, la responsabilidad recaería en el ejército.

Mientras en la prensa se especulaba sobre si el ejército estaba en pláticas con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, para negociar qué ocurriría el 16 de septiembre, y se discutía si podría suspenderse el desfile militar o cambiar su ruta tradicional para no pasar por los lugares ocupados por los campamentos de AMLO, el ejército fijó su postura públicamente.

El 22 de agosto, el secretario de la Defensa, general Clemente Vega García, fue entrevistado en Mérida, Yucatán, durante una gira del presidente Fox. A pregunta expresa de los reporteros, que lo asediaban después de la inauguración de un hospital militar, aseguró que el desfile

se llevaría a cabo en tiempo y forma, sin variación en su ruta. Asimismo, el titular de la Sedena descartó que el plantón significara una afrenta para el ejército.

Días después, el 4 de septiembre, durante la ceremonia de apertura y clausura de cursos del Colegio Militar, y frente al presidente Fox y el jefe de gobierno del Distrito Federal, el Secretario de la Defensa hizo en su discurso un llamado a la unidad de los mexicanos: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos por la tranquilidad de la patria en el futuro”.

Acto seguido, explicó que el desfile militar se realizaba cada año ante la sociedad y los Poderes de la Unión como un homenaje a los héroes que habían forjado la nación. Reiteró que ese año el desfile se llevaría a cabo como siempre, siguiendo su ruta tradicional, que tenía un significado histórico bien definido, lo que nadie debería olvidar.

Esta declaración dejó en claro lo que el ejército haría, pero no lo que AMLO y los suyos pensaban al respecto. La tensión y el temor de un enfrentamiento se mantuvieron hasta el domingo 10 de septiembre. Ese día, López Obrador propuso, en su asamblea informativa, que la CND comenzara a las tres de la tarde.

¿Por qué a esa hora? Porque vamos a permitir que el ejército mexicano lleve a cabo el desfile militar como lo tiene programado la Secretaría de la Defensa. Hemos dicho que somos respetuosos de esa institución que es fundamental para la defensa de la soberanía nacional [...] estamos muy conscientes de que la mayoría de la tropa, de los soldados, pertenecen al pueblo, son hijos, son familiares de gente que está en este movimiento.

La decisión destensó un poco el ambiente, pero todavía quedaba en pie el desafío del 15 de septiembre. La solución que más se mencionaba tenía antecedentes en sexenios anteriores: que el presidente diera el grito en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde lo había hecho Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, y donde lo hacía el mandatario en turno al final de su sexenio. El símbolo, después de todo, no era despreciable.

Sin embargo, conceder que AMLO diera el grito en un sitio consagrado para el presidente hubiera representado para Fox una segunda humillación, quizá simbólicamente más profunda que la del primero de septiembre. Vicente Fox no sólo era el presidente de la República, sino también el comandante supremo de las fuerzas armadas. De ese tamaño era el reto de López Obrador.

Los siguientes tres días Fox y AMLO, como dos vaqueros a punto de iniciar un duelo, emitieron señales de obstinación que le dieron sustento a los presagios más pesimistas.

A fin de cuentas, los dos políticos más importantes del país, que se habían pasado todo el sexenio en pleitos y controversias, estaban a punto de encontrarse cara a cara en el mismo espacio, el corazón de la nación. El enfrentamiento de estos dos personajes marcó el sexenio de la alternancia en la Presidencia y, en última instancia, estorbó la consolidación de la democracia o, si se prefiere, la puso a prueba. En la víspera del Grito de la Independencia, la sociedad veía con temor la posibilidad de que ese pleito derivara en muertos, o produjera agravios irreversibles.

Paradójicamente, la fiesta patria que más unía a los mexicanos, la única que se celebraba simultáneamente en las sedes de todos los gobiernos constitucionales del país, se había trastocado en manzana de la discordia y amenazaba convertirse en tragedia.

Desde el 13 de septiembre se empezaron a levantar los campamentos de la avenida Reforma para que el desfile transcurriera por ahí y también como una estrategia de López Obrador para ocupar con más simpatizantes el Zócalo y evitar que fuerzas del gobierno, especialmente del Estado Mayor Presidencial (EMP), intentaran hacerse de la plaza para la ceremonia del presidente.

La noche de ese día se dio un conato de bronca entre miembros desarmados del EMP y seguidores de AMLO, cuando los primeros intentaron colocar vallas metálicas frente a Palacio Nacional para ganar espacio. Los militares tuvieron que ceder ante la actitud amenazante de la multitud y conformarse con resguardar la parte posterior del edificio. Era un anuncio de lo que podía pasar.

Así amaneció el país el 14 de septiembre. Desde días antes, el

secretario de Gobernación se mantenía en contacto con el jefe de gobierno del Distrito Federal y con representantes de la CBT, para buscar alguna solución. Todos los comentaristas, con simpatías por alguno, neutrales o semineutrales, afirmaban que era imprescindible encontrar alguna salida negociada, pero ninguno imaginaba una en la que no hubiera vencedor, ni vencido. Nadie hacía explícita la tragedia posible, pero todos la tenían en la cabeza.

Ese día, por fin, los negociadores hallaron una solución imaginativa, que pudo romper el empecinamiento de AMLO y salvar el honor de Fox. Un grupo de senadores, encabezados por el coordinador de la bancada del PAN, propuso al pleno del Senado un acuerdo por el que se exhortaba al presidente de la República “a considerar el cambio de sede para la realización de la ceremonia denominada del Grito de la Independencia, el 15 de septiembre del año en curso”.

En los considerandos, se expresaba que el primer mandatario había “señalado públicamente su deseo de llevar a cabo la conmemoración del acto de independencia desde Palacio Nacional”, pero “los eventos alternos programados [...] podrían resultar en un desencuentro no deseado que puede afectar nuestras tradiciones republicanas, lo que hace propicio que esta Cámara de Senadores reflexione y se pronuncie en la salvaguarda de la cohesión social que debe de existir en esta conmemoración tan importante para todos los mexicanos”.

La Presidencia de la República anunció ese mismo día que, en atención al exhorto del Senado, el primer mandatario celebraría la ceremonia en Dolores Hidalgo.

Por su parte, durante la asamblea informativa de ese 14 de septiembre, López Obrador hizo una propuesta a sus partidarios: que el grito lo diera Alejandro Encinas, quien se había negado siempre a usar la fuerza y reprimir, que había sabido “evitar la confrontación y la violencia, y esto se tiene que reconocer”.

Lo propuso justo después de decir que estaban ahí “muy contentos, porque el traidor a la democracia no va a estar el día de mañana”. Cuando preguntó a la multitud si estaban de acuerdo, respondieron unánimemente que “Sí”.

Después, hizo “dos peticiones respetuosas” al jefe de gobierno: que aceptara la donación de una campana que les habían llevado de Santa Clara del Cobre, porque el grito se haría desde el edificio del Antiguo Ayuntamiento, donde estaba la oficina de Encinas y donde no había campana.

La segunda petición fue “que en nombre de todos los integrantes de este movimiento se invite para que lo acompañe una mujer extraordinaria, una luchadora social intachable, Rosario Ibarra de Piedra. Que ella nos represente en la noche del grito. Nosotros vamos a estar aquí, vamos a gritar con Alejandro”.

Parte del acuerdo fue que el jefe de gobierno del Distrito Federal invitara al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, a que lo acompañara en representación del presidente de la República. Esa noche todos los noticiarios de radio y televisión dieron a conocer con alivio la salida que se había encontrado.

Así, el 15 de septiembre por la noche, el presidente Fox dio el grito en la cuna de la Independencia, Dolores Hidalgo, y Alejandro Encinas en el Zócalo, desde el edificio del Ayuntamiento, flanqueado por el secretario de Gobernación y por la senadora Rosario Ibarra de Piedra.

Abajo, en la plaza, la fiesta fue de quienes habían militado en el plantón y otros simpatizantes de AMLO, mismo que observó la ceremonia desde el “templete de la resistencia”, desde donde había encabezado la protesta.

Al día siguiente, el desfile militar transcurrió con normalidad, con mucha asistencia de público, en el que se percibía una actitud relajada, al ver y sentir nuevamente el orden restablecido, las avenidas sin campamentos y las fuerzas armadas marchando como cada año, como símbolo de estabilidad.

## **La Convención Nacional Democrática**

El 16 de septiembre, en el Zócalo, se llevó a cabo la Convención Nacional Democrática. Después de un retraso provocado por un aguacero, a las cinco de la tarde con cinco minutos, Elena Poniatowska inau-

guró la CND. Cuando en su breve intervención mencionó a Cuauhtémoc Cárdenas, la multitud le dedicó una ruidosa rechifla y le gritó “¡Traidor, traidor...!”. La alusión se debió a que el día anterior el tres veces candidato a la Presidencia de la República había publicado una carta dirigida a ella explicando por qué no había apoyado la candidatura de AMLO.

La asistencia reportada por los organizadores fue de 1'025,724 “delegados”. Una minoría habían sido elegidos en asambleas locales y los demás habían sido aceptados como delegados con el único compromiso de reconocer lo que la mayoría votara. Las propuestas fueron aprobadas a mano alzada y con aclamaciones. La primera resolución adoptada fue rechazar la usurpación, por lo que se desconoció a Felipe Calderón como presidente, a los funcionarios que él designara “y todos los actos de su gobierno de facto”. Para refundar la República, se aceptó la propuesta de realizar “un plebiscito para impulsar un proceso constituyente con el propósito de que las instituciones sean efectivamente del pueblo y para el pueblo”.

Se aprobó que el primero de diciembre, cuando Felipe Calderón debía rendir protesta ante el Congreso de la Unión se concentraran “todas las energías del movimiento de resistencia civil contra la usurpación en una diversidad de acciones que convocará la Comisión Nacional para la Resistencia Civil”.

Como se esperaba, Andrés Manuel López Obrador fue declarado por aclamación “legítimo presidente de México”, después de reconocerse “su triunfo en las elecciones presidenciales”. Asimismo, la CND autorizó a AMLO a integrar un gabinete, a establecer su sede en la capital de la República —aunque su gobierno tendría carácter itinerante— y a recabar fondos propios.

Se acordó que López Obrador tomaría posesión de su cargo el 20 de noviembre en el Zócalo, a las tres de la tarde, con lo que una vez más se disputaría el espacio al presidente de la República, quien tradicionalmente encabezaba ese día por la mañana el desfile deportivo con el que se celebraba el comienzo de la Revolución mexicana. Una vez terminadas todas las votaciones, AMLO hizo uso de la palabra. Afir-

mó que no se rendiría, aclaró que no aceptaba el cargo por ostentación —sabía que sería atacado también por eso— y ofreció no traicionar sus ideales.

Mientras los asistentes se retiraban lentamente del Zócalo, iban coreando: “¡Se ve, se siente, ya tenemos presidente!”.

En la valoración de la CND, y en general de la posición adoptada por López Obrador, una vez más las opiniones se dividieron. Miguel Ángel Granados Chapa, en su columna publicada en *Reforma* dos días después, ponderaba los alcances de la CND. Ante el hecho de que AMLO hubiera sido declarado presidente legítimo, reflexionaba:

No significa que pretenda realizar acciones de gobierno [...] Sí trabajará, a la luz de las resoluciones asumidas por la multitud en el Zócalo, en la concepción y desarrollo de planes y programas susceptibles de convertirse en instrumentos de gobierno cuando los legisladores pertenecientes a los partidos agrupados en el Frente Amplio Progresista conciten apoyo de las restantes fracciones parlamentarias. De igual modo, el desconocimiento de Felipe Calderón como presidente de la República no implica privar de efectos jurídicos la declaración que en sentido contrario emitió el Tribunal Electoral. Ambas decisiones tienen la fuerza de la convicción ética y política de quienes se sienten agraviados por un fraude que juzgan evidente.

En cambio, Sergio Sarmiento, el mismo día y en el mismo periódico, opinaba que López Obrador había decidido crear su presidencia fuera de las instituciones como lo habían hecho en el siglo XIX los conservadores Félix Zuloaga y Miguel Miramón. Dado que AMLO contaba con varios millones de simpatizantes en el país, tenía la fuerza para desestabilizar a México, por lo que no había duda de que su actitud constituía un peligro para el país. “López Obrador le está asestando un fuerte golpe a la democracia mexicana”, concluía Sarmiento, pues aunque afirmaba que se oponía a la imposición, era “él quien está encabezando la imposición y atacando el orden constitucional”.

La decisión de Andrés Manuel López Obrador de conducir a

sus partidarios a declararlo “presidente legítimo” llevó su conflicto a un punto de no retorno, a una situación de eterno enfrentamiento. Es difícil saber si dicha determinación fue producto de su desesperación e impotencia ante el implacable proceso electoral institucional o si en verdad creía que podía revertir el resultado apoyado en la movilización social; si impedía la toma de posesión, o cuando menos la rendición de protesta de Felipe Calderón, como lo había hecho con Fox el día del Informe, tendría otra oportunidad de llegar al poder.

Si AMLO hubiera optado por alguna otra de las alternativas que planteó originalmente, como la de ser nombrado Coordinador de la Resistencia Civil Pacífica, se hubiera colocado de inmediato como la cabeza de una oposición formidable para impulsar su agenda en el próximo gobierno. En cambio, con la opción de “presidente legítimo” ahondaba su caída en las preferencias electorales, arrastrando a su partido a un descenso más severo y exponiéndose a la burla y aun al ridículo. Significaba, además, persistir en una actitud que profundizaba la polarización y la crispación social, así como los agravios de los grupos enfrentados, con lo que se mantendría a México en una situación de potencial violencia.



---

## POLÍTICOS AL BORDE DE UNA CRISIS DE NERVIOS

---

### La descomposición del Estado

**E**ra difícil determinar si la parálisis de los políticos se debía a que estaban al borde de una crisis de nervios o si, por su ineptitud, estaban a punto de provocársela a los ciudadanos. Al terminar el sexenio de Fox, los mexicanos habían perdido la confianza en sus políticos y la situación del país reflejaba un problema más profundo.

Luis F. Aguilar en su editorial del 8 de noviembre en el periódico *Reforma* comenta:

Lo que estamos viendo en el fin de este gobierno, más allá de las buenas o malas calificaciones de sus altos ejecutivos, es que cada día el país baja un escalón más en su caída, aparecen problemas más graves, se deshacen vínculos de cohesión y respeto social, se reta con mayor descaro a las autoridades, se alborota cualquier grupo porque sus intereses particulares no encuentran la respuesta deseada, se incrementan los ajusticiamientos y agravios del crimen, se salta de la inconformidad a la violencia. Las ocupaciones, marchas, bloqueos y barricadas de julio se han vuelto las explosiones de noviembre con los enmascarados en turno.

El gobierno llevaba tiempo deslizándose por inercia. Había bastado con que un número suficientemente grande de personas rompieran ley, para que las autoridades temieran reprimirlas.

El origen revolucionario de la nación, que en la escuela enseñan como una cuestión gloriosa, le da a los mexicanos mayor tolerancia al quebranto de la ley cuando alguien protesta por una causa que llama justa. Además, la decisión del presidente Gustavo Díaz Ordaz de reprimir con el ejército a una manifestación de estudiantes el 2 de octubre de 1968 —lo que causó decenas de muertos— quedó marcada en la memoria colectiva como un hecho siniestro. A partir de entonces, en la sociedad mexicana domina un rechazo absoluto a la represión gubernamental. Esto ha llevado a que las autoridades teman usar legítimamente la fuerza del Estado para enfrentar los retos a la gobernabilidad.

Así ocurrió en enero de 1994, cuando un grupo guerrillero, el EZLN, desafió al Estado mexicano; se repitió en abril de 1999, cuando unos cuantos alumnos ultraradicales impusieron un paro de labores en la Universidad Nacional Autónoma de México, que duró nueve meses, y se repitió en 2002, cuando los macheteros de Atenco impidieron la construcción de un aeropuerto que hubiera beneficiado al país y a ellos mismos.

La política era el problema, porque la economía marchaba bien. Y en la política, la incompetencia y la irresponsabilidad estaban bien repartidas.

El gobierno del PAN no podía lidiar con los problemas que desafiaban al Estado. La izquierda estaba secuestrada por radicales, que todo lo querían resolver con movilizaciones intimidantes. El 5 de noviembre, en el periódico *Reforma*, Enrique Krauze explicaba:

Aunque ha perdido fuerza, López Obrador domina aún varias organizaciones premodernas. Son las bases clientelares que con manifestaciones y plantones paralizaron una zona de la ciudad: sindicatos de instituciones públicas, comerciantes informales, taxistas piratas. ¿De dónde obtienen el dinero? ¿Quién pagó las mantas que en un santiamén cubrieron el Paseo de la Reforma? Imposible saberlo con certeza. Hasta ahora, al parecer, han bastado las fuentes presupuestales del Distrito Federal, que el PRD maneja a discreción, tal como le enseñó su hermano mayor, el viejo PRI. Estas organizaciones se mezclan con decenas de gru-

pos radicales —la militancia antimoderna—, que no constituyen propiamente una guerrilla pero sí representan una especie de “revolución blanda”, una agresiva movilización de contingentes que no sólo acosará al presidente Calderón y a su gabinete, sino que se propondrá desquiciar la vida normal de los habitantes en zonas sensibles del país, todo en nombre de una supuesta “resistencia pacífica” contra “la usurpación”.

El PRI, por su parte, buscaba la forma de sacar el mayor provecho de la coyuntura política. Para evitar el enojo de sus militantes, el tricolor defendió al gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz, aun cuando la mayoría de la población, a nivel nacional, consideraba que debía renunciar. Y el PAN, para evitar el enojo del PRI, que amenazaba con reventar la toma de posesión del presidente electo, optó por votar contra la desaparición de poderes en Oaxaca. Esta forma de actuar sólo conducía a la descomposición del Estado.

Los cacicazgos residuales del PRI, los sindicatos excluyentes y corruptos, las empresas monopólicas, los medios de información sin una clara responsabilidad social, las burocracias improductivas, las universidades sin sentido crítico, los intelectuales cortesanos completaban la problemática escena política nacional que describe Krauze en su artículo.

Aunque crítica, esta visión de los actores políticos y de las instituciones no hacía pensar que la mesa estaba puesta para el crecimiento de la guerrilla. No obstante, la historia de lo que estaba ocurriendo en Oaxaca era alarmante e indicativa de la incapacidad de una sociedad moderna para enfrentar fuerzas con otra visión del mundo.

Al terminar el plantón de López Obrador en el Zócalo capitalino, los ojos de todos los mexicanos voltearon a ver a Oaxaca, donde la dimensión del conflicto de ingobernabilidad afectaba ya a toda la nación.

Oaxaca es una entidad con niveles socioeconómicos todavía muy bajos, que está dividida en 570 municipios y tiene una composición étnica múltiple. Constituye la suma de muchas realidades, lo que la hace muy difícil de entender.

El conflicto en el estado empezó el 22 de mayo, con un plantón

indefinido que establecieron los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en protesta porque el gobernador Ulises Ruiz no respondió al pliego petitorio que le presentaron el primero de mayo. En él le solicitaban, una vez más, la rezonificación económica de los maestros del Estado, lo que en los hechos implicaba un aumento en sus salarios.

El primero de junio, los profesores bloquearon los cinco accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca. El 2 y el 7, organizaron marchas en repudio al gobierno estatal, con la participación, en cada caso, de cerca de 80,000 personas. En respuesta, Ulises Ruiz los emplazó a regresar a clases el 5 de junio, pero el 8, una comisión de maestros viajó a la ciudad de México para entrevistarse con autoridades federales.

En este contexto, es comprensible que el gobernador quisiera frenar el desorden, pero logró lo contrario. El 14 de junio, al practicar una represión selectiva, a la que el secretario de Gobernación se oponía, porque consideraba que sería inútil dada la dimensión del problema, agravó la situación. El operativo —agresivo y torpe— fracasó, pues no pudo desalojar el centro de la ciudad. De inmediato la demanda gremial se convirtió en una exigencia política: la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.

Los actores del conflicto no eran nuevos en la dinámica política de Oaxaca. Muchos de los que estaban ahora confrontándose tenían una larga historia y una gran tradición de lucha, de movilización y de presencia política en la entidad, incluso algunos hasta físicamente eran los mismos.

Entre el 17 y el 21 de junio se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO. Esta especie de confederación de grupos inconformes reflejaba el enorme sentimiento de insatisfacción y de coraje legítimo de los oaxaqueños por la marginación y la pobreza en que viven. A partir de entonces, al conflicto magisterial se sumaron muchas organizaciones, algunas de ellas muy radicales, acostumbradas a la presión y al chantaje político. La Sección 22 del SNTE simpatizaba con la APPO, pero no eran lo mismo. Esta última estaba llena de agrupaciones de diferente carácter, calado y alcances.

La APPO resultó una organización muy aguerrida, violenta, en la que floreció un radicalismo que los mexicanos no habían visto desde hacía mucho tiempo. Sus integrantes establecieron un toque de queda para los habitantes de la ciudad de Oaxaca y cerca de 2,000 barricadas. Además, realizaban pintas a los comercios que no se sometían a sus intimidaciones.

Esta asamblea hizo pública una representación. Flavio Sosa fue visto, desde octubre, casi todos los días en los medios de información, fijando posiciones, dando opiniones, respondiendo, ubicando. Sin embargo, como líder decidía poco, pues le preocupaba que sus bases rechazaran, o pudieran considerar como traición, las decisiones que adoptaba. La APPO tenía una gran cultura asambleística, proveniente de los usos y costumbres de un pueblo acostumbrado a poner autoridades que obedecen al mandato popular y a removerlas cuando no funcionan, por simple decisión de esa asamblea.

Como piezas adicionales a este complejísimo rompecabezas, había también grupos de guerrilleros no afines al EZLN que se habían desplazado de Chiapas a Oaxaca y Guerrero. Básicamente, se trataba del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Precisamente un motivo de inquietud social fueron las agrupaciones radicales incrustadas en la APPO. Estos grupos no estaban dispuestos a dialogar o a pactar, no les interesaba tener representación formal, pues no creían en la democracia representativa; estaban convencidos de que el país necesitaba un levantamiento armado. El reconocimiento de estos grupos reforzó la invocación a que el gobierno ejerciera la violencia legítima necesaria para restablecer el orden social.

En este sentido, las consecuencias del conflicto oaxaqueño podían ser muy graves, porque una fragmentación del movimiento de oposición podría dar lugar al surgimiento de pequeños grupos guerrilleros. En contrapartida, en la prensa también se habló de la existencia de guardias blancas del gobernador, de los presidentes municipales y de algunos empresarios.

A ello se añadía el surgimiento de bandas de narcotraficantes en distintos lugares del país que, por supuesto, estaban armadas y tenían la posibilidad de unirse a las guardias blancas o a los movimientos guerrilleros, según les conviniera. Estos factores convertían a Oaxaca en un coctel muy explosivo.

Las autoridades federales, ajenas a los problemas de un gobierno priísta, se mantuvieron, durante mucho tiempo, ausentes, y no se esforzaron por recanalizar el conflicto. El gobernador del estado, por su parte, fue acusado por sus adversarios de estar más ocupado en la campaña del candidato priísta a la Presidencia que en resolver el problema. Pasadas las elecciones federales, la dimensión del conflicto resultó inmanejable para las autoridades locales.

En Oaxaca, los acontecimientos se sucedieron sin parar y fueron escalando el conflicto. Sin ánimo de proceder de manera exhaustiva, se hace un recuento de algunos de los más sonados.

El 22 de junio, el gobierno local convocó a una marcha en demanda de la liberación de Oaxaca. En respuesta, los disidentes, acordaron mantener el plantón en el centro de la ciudad y realizar una megamarcha en contra de Ulises Ruiz, el 28 de junio.

El 2 de julio, día de las elecciones federales, el PRI perdió casi la totalidad de los distritos en Oaxaca. El 11, los manifestantes impidieron que se llevara a cabo el festival tradicional de la Guelaguetza.

El primero de agosto, cientos de mujeres rebeldes marcharon por las calles y, de manera inaudita, ocuparon las instalaciones de radio y televisión del Estado, así como las estaciones privadas 96.9 FM y 680 AM. El 9 de ese mes, organizaciones sociales transmitieron en "Radio Cacerola" mensajes en los que llamaban a organizar retenes en las carreteras. El 19 de agosto, se creó y fracasó el autodenominado "Consejo de representantes ciudadanos", formado por quienes creyeron tener la autoridad moral para hacerlo: Samuel Ruiz, Francisco Toledo, Pablo González Casanova, Carlos Monsiváis y Rodolfo Stavenhagen. El 21 de agosto, después de varias noches en que se oyeron disparos y detonaciones cerca del lugar, se cortaron las transmisiones del Canal 9 de televisión, pues se destruyeron algunos de sus equipos.

El 21 de septiembre comenzó la Marcha por la Dignidad de los Pueblos de Oaxaca a la ciudad de México. El 23, Ulises Ruiz “reapareció” en la capital oaxaqueña y amenazó con rescindir el contrato de los maestros si no regresaban a clases el lunes siguiente. El 24, se registraron nuevos hechos de violencia en el centro de Oaxaca: integrantes de la APPO entraron al Hotel Camino Real a buscar al gobernador. La sangre no llegó al río y los funcionarios que ahí se encontraban fueron rescatados por policías vestidos de civiles. El 28 fracasó el paro de labores convocado por la iniciativa privada. El día 30, aviones y helicópteros militares asustaron a la población al sobrevolar, la ciudad de Oaxaca con fines de “reconocimiento”.

El 3 de octubre, la APPO y la Sección 22 rechazaron ir a dialogar a la Secretaría de Gobernación. El 8, luego de caminar 500 kilómetros, los marchistas oaxaqueños se plantaron a las afueras del Senado de la República. El 11, una subcomisión del Senado, con representantes del PRI, PAN y PRD, que iba a constatar la existencia de poderes inició una visita oficial a Oaxaca. El 12, esta subcomisión se reunió en un hangar del aeropuerto con el gobernador, cuya oficina tenía meses de ser itinerante. El 14 y el 18 de ese mes, unos hombres armados abrieron fuego contra algunas barricadas de los inconformes.

En las negociaciones con la Secretaría de Gobernación, el mismo 11 de octubre, el propio titular de la dependencia generó la expectativa de que se iba a separar a los maestros de la Sección 22 de los grupos de la APPO, ofreciendo la rezonificación económica originalmente solicitada por los maestros. La disposición de éstos a aceptar su oferta se vio fortalecida por la decisión de Elba Esther Gordillo, líder nacional del magisterio, anunciada el 15 de octubre, de crear otra sección sindical en Oaxaca, aprovechando que existía, desde tiempo atrás, una disidencia de izquierda en la sección 22 del SNTE. En condiciones normales, esos maestros inconformes no hubiesen podido entenderse con la profesora Gordillo. Sin embargo, ahora parecían apoyarla. Los miembros de la Sección 22 midieron su riesgo sindical y acordaron, el 19 de octubre, que retornarían a las aulas y comenzarían, tardíamente, el curso 2006-2007. El 19, en apariciones televisivas independientes, el gobernador,

el líder de la APPO y el dirigente de los maestros aseguraron que las clases se reanudarían, a más tardar, el día 30. El 28 de octubre se registró el enfrentamiento más violento en cinco meses de conflicto. Hubo cuatro muertos, entre ellos el periodista estadounidense Bradley Will, lo que le dio un tono internacional al problema oaxaqueño. El 29 de octubre, la Policía Federal Preventiva entró al zócalo de la ciudad y liberó a la televisión estatal. La APPO se replegó en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

El primero de noviembre, la PFP avanzó en la recuperación de los espacios tomados por la APPO y desmanteló la barricada instalada en la autopista Oaxaca-México. El 2, el enfrentamiento entre la PFP y la APPO duró más de seis horas, pero no se liberaron las instalaciones de la UABJO. El saldo fue de 13 heridos. El 5, hubo una megamarcha en la que la APPO evitó confrontar a la PFP. El 6 de noviembre tres explosiones, de intensidad mayor, se registraron en diferentes puntos del Distrito Federal: el PRI, el TEPJF y una sucursal de Scotiabank. Cinco grupos de guerrilleros se adjudicaron el estallido de los artefactos y advirtieron que continuarían con sus acciones “mientras Ulises Ruiz permanezca oficialmente en la gubernatura oaxaqueña”.

En este prolongado enfrentamiento popular, todos los días, casi cada hora, se fueron incorporando nuevos elementos. Algunas agrupaciones tenían que ver con la defensa de los derechos humanos o educativos, otras eran organizaciones con una larga experiencia de movilización y de lucha. Sin embargo, todas fueron quedando supeditadas a los grupos más radicales, que seguían exigiendo, como punto fundamental para sentarse a negociar, la salida del gobernador. Su posición era extrema, maximalista.

No se podía hablar de guerra civil, porque las armas eran piedras, palos, petardos y bombas molotov, pero la crispación social había llegado ya a niveles que muchos consideraban intolerables.

Lo que se estaba viviendo en la ciudad de Oaxaca podía ser descrito con objetividad como un secuestro. Además de la parálisis económica y educativa, un segmento muy amplio de la sociedad oaxaqueña, así como las organizaciones de empresarios, de restauranteros, de ho-

teleros del centro histórico, de organizaciones civiles reclamaban, con justicia, que los dejaran ejercer sus derechos constitucionales de libre tránsito, de acceso al trabajo, de clases regulares, de desempeño de su actividad económica, de ir a la plaza, de reunirse. La sociedad local no sólo estaba indignada, sino desesperada porque se arreglara el conflicto, como fuera, pero que se solucionara.

Muchos ciudadanos en Oaxaca querían que se recuperaran las condiciones de normalidad cuanto antes, pero no estaban de acuerdo con el gobierno de Ulises Ruiz. En el actual sistema político electoral la legitimidad de un gobernante se construye todos los días, no sólo el día de los comicios. El hecho de haber sido elegido por mayoría simple no le da a un gobernante patente de corzo en el ejercicio del gobierno. Oaxaca es el mejor ejemplo de ello. La animadversión popular contra la administración local era muy grande. Al respecto, la empresa BGC, Beltrán & Asociados hizo una encuesta en octubre y encontró que la mayoría de los oaxaqueños, más del 50%, querían la renuncia del gobernador, pero también la mayoría de los oaxaqueños, más del 50%, estaban en desacuerdo con la APPO y con la actitud de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

De las posturas de los partidos políticos respecto al conflicto, la del PRI fue incomprensible. Argumentó que no se podía permitir que un movimiento popular tirara a un gobernador, sin reconocer que las condiciones en que se dieron las elecciones en la entidad dejaron insatisfecho a la mitad del electorado. El líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, llegó incluso a aseverar que defendería a Ulises Ruiz “hasta la muerte”. Esta declaración, del lunes 30 de octubre, fue hecha una semana después de que los senadores del PRI habían votado un exhorto para la salida de Ulises Ruiz.

En Oaxaca el PRI trató de negociar a precio de oro lo que ya parecía un cadáver político. El PRD infló el precio con su intransigencia frente a la elección de Felipe Calderón. Así que al PAN no le quedó más opción que negociar con el PRI para sacar la toma de protesta y, a partir de ahí, la agenda legislativa del presidente electo.

Por otro lado, la ausencia de normas y leyes agravaba la situa-

ción. Oaxaca tenía una ley electoral muy rezagada, carecía de transparencia y su Procuraduría de Justicia había venido actuando de una manera que sus opositores calificaban de “facciosa”. Esta vulnerabilidad legal permitió, por muchos años, la existencia de gobiernos autoritarios. La pasada administración de José Murat y la de Ulises Ruiz tenían un continuismo básico, aunque Ruiz había metido a la cárcel o perseguido penalmente a algunos miembros del gobierno anterior. Baste señalar, como ejemplo, que quien era el secretario de gobierno de Murat, Héctor Anuar Mafud, fungía como Presidente del Tribunal de Justicia del Estado en la administración de Ulises Ruiz. La falta de transparencia del gobierno oaxaqueño ocultó a la opinión pública durante cierto tiempo un elemento que resultó clave para la formación de la APPO y su entrada en escena en el conflicto: los recursos para el manejo clientelar.

En el curso de los seis años del gobierno de José Murat, y de los dos primeros de Ulises Ruiz, Oaxaca recibió casi 93,000 millones pesos del famoso ramo 33, correspondiente a las aportaciones federales. El gobierno oaxaqueño había mantenido cerradas las cuentas de su uso, argumentando un asunto de soberanía. El asunto empezó a salir a la luz en agosto de 2006, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en el sentido de que sí procedían las investigaciones que estaba realizando la Auditoría Superior de la Federación al gobierno oaxaqueño. El 6 de noviembre, la Secretaría de la Función Pública informó que había problemas en una auditoría aplicada al gobierno de Ulises Ruiz, lo que abrió la expectativa de que el gobierno federal utilizara esa carta para doblar al gobernador.

No obstante, se filtró en los medios que José Murat le entregaba a grupos que formaban parte de la APPO 400 millones de pesos anuales, mismos que Ulises Ruiz les retiró. Esos recursos se empleaban, conforme a viejos modos caciquiles, para controlar a los inconformes. Pero cada gobernador tiene su forma de matar pulgas, y según algunas interpretaciones aparecidas en la prensa, Ulises Ruiz no midió la reacción de esos grupos, ni alcanzó a implantar otros mecanismos de cooptación.

Cuando el conflicto disputaba la atención de los medios con la ceremonia de protesta de Felipe Calderón —que los perredistas amenazaban con impedir— las cosas dieron un giro. Las autoridades endurecieron su postura. El 13 de noviembre, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca reanudó actividades y el 15 la PFP la cerró por considerar que no había suficiente seguridad. El 21, la APPO advirtió que cercaría a la PFP en el centro de la capital oaxaqueña, tomaría oficinas gubernamentales e iniciaría una huelga de hambre. El 22, los elementos de la PFP y los miembros de la APPO se enfrentaron durante cuatro horas en el centro de la ciudad. Los “apistas” incendiaron el edificio del Tribunal Estatal de Justicia, una docena de comercios y otros tantos autos. Además, tomaron 11 garitas de las carreteras México-Cuernavaca y México-Puebla.

El 28 de noviembre, los operativos policiacos ejecutaron órdenes de aprehensión contra los principales líderes de la APPO, los cuales se resguardaron en el anexo del Templo de la Virgen de los Pobres. Durante estas acciones fueron detenidos un hermano de Flavio Sosa y más de otros cien apistas. La APPO pidió entonces diálogo a la Secretaría de Gobernación. El 29, la APPO perdió sus dos últimos reductos: Radio Universidad y sus barricadas en el estratégico cruce de Cinco Señores. Este cambio en la capacidad de respuesta de las autoridades fue atribuido por algunos a que Felipe Calderón ya estaba gobernando, aunque formalmente todavía no hubiese tomado el poder.

El conflicto hirió y dividió, en el sentido profundo de la palabra a la sociedad oaxaqueña. Los enconos que dejó eran brutales, y seguirían porque el veneno, por desgracia, había sido inyectado por ambos bandos. El agravio era la característica más palpable, porque en el enfrentamiento se vio a los profesionales de la política, pero también a mujeres desesperadas aventando piedras y a jóvenes con la furia en el rostro que no se sabía bien a bien de qué lado estaban. La recomposición del tejido social, que ya de por sí era muy complejo, iba a llevar mucho tiempo y esfuerzo.

Aunque la situación oaxaqueña era extrema, lo cierto es que el país vivió durante todo 2006 circunstancias similares de descrédito de

las autoridades y de reto a la gobernabilidad que evidenciaron la descomposición del Estado.

El año empezó complicándose de manera casi buscada. El 20 de enero se desató un conflicto minero que pudo haberse evitado y que costó dos vidas. Ese día, Elías Morales levantó una demanda en contra de Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), por presuntos delitos patrimoniales relacionados con un fideicomiso por 55 millones de dólares constituido entre Industrial Minera México y el sindicato, a partir de la privatización de Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea.

El 17 de febrero, personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informó a Napoleón Gómez Urrutia que, a petición del Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato, se había tomado nota de su destitución como Secretario General del SNTMMSRM y, con él, de su Comité Ejecutivo Nacional. Desde luego, Gómez Urrutia consideró falsa dicha solicitud.

No quedaba claro por qué la Secretaría del Trabajo se metía en un pleito interno del sindicato. Muchos lo interpretaron como un servicio a grupos empresariales que querían manejarse como si fueran el Estado, pero que pronto aprenderían que la cosa no era tan fácil.

El 19 de febrero tuvo lugar una explosión en la mina Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila, propiedad de una filial del Grupo México. En el accidente perecieron 65 trabajadores que quedaron sepultados en su interior. Durante siete días, mientras se determinaba si los mineros realmente estaban muertos, la nación estuvo en vilo. El malestar que esto generó hizo que el secretario del Trabajo, Francisco Salazar, fuera abucheado por los mineros y el gobernador de la entidad, Humberto Moreira, tomara el asunto en sus manos, y declarara, en múltiples ocasiones, que dicho funcionario no era una persona grata en su estado.

En respuesta al embate contra Gómez Urrutia, surgieron huelgas en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Guerrero, en Sonora y en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán.

El 20 de abril, la policía estatal intentó desalojar a los huelguistas de Sicartsa. Agentes armados irrumpieron en las instalaciones de esa planta a petición de la empresa Villacero y con el aval del gobernador Lázaro Cárdenas Batel. En la refriega, muchos quedaron golpeados o heridos y dos trabajadores murieron por impacto de bala. A partir de esos hechos fue en aumento el acoso del gobierno contra el sindicato y el malestar de los mineros.

La huelga siguió hasta el 21 de agosto, en que el gobierno de Michoacán estuvo dispuesto a conceder todas las condiciones que le habían solicitado los trabajadores, pues la situación de agitación y pobreza de la región había llegado a un extremo insostenible. Las escenas del enfrentamiento y la información constante sobre el deterioro de las condiciones de vida de los mineros lastimaron a muchos mexicanos.

Por otro lado, en Atenco, el 3 mayo, el desplazamiento de ocho vendedores irregulares de flores de las afueras del mercado local provocó una confrontación con la policía municipal. Hubo un segundo enfrentamiento, en la carretera Texcoco-Lechería, en el que los comerciantes ya contaban con el apoyo de los pobladores del lugar y de grupos externos. Los macheteros hirieron a varios policías y retuvieron a 15 rehenes, a fin de intercambiarlos por la libertad de su líder Ignacio del Valle. Con ese fin cerraron el acceso a Atenco.

A las dos de la tarde, alrededor de 400 policías intentaron romper el bloqueo. Durante dos horas y media, los inconformes arrojaron palos, piedras, bombas molotov y petardos a los uniformados, los cuales iban desarmados y, ante las cámaras de televisión, retrocedieron, luciendo torpes y descoordinados. En la refriega murió Javier Cortés Santiago, de 14 años.

Ese miércoles 3 por la noche, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, informó que se aplicaría la ley en contra de quien hubiera orquestado esta acción. Al día siguiente, 3,000 elementos de las policías federales, estatales y municipales entraron y, con lujo de fuerza, detuvieron a 220 personas.

Dado que las mujeres aprehendidas en Atenco sufrieron supuestas violaciones y abusos sexuales —propios de una lógica militar con-

trarrevolucionaria que desea crear terror para establecer dominio—, muchos consideraron que el verdadero motivo de la acción había sido desbaratar grupos sociales incómodos y organizaciones guerrilleras, como el Comité Cerezo, el Colectivo Corazón y el Movimiento Zapatista.

Varios analistas comentaron con preocupación que, cuando el Estado por fin se decidía a usar la fuerza pública, como ocurrió en Atenco, los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos tuvieron que denunciar los abusos cometidos por elementos de las policías y formular recomendaciones que las autoridades minimizaban. Con ello, se reforzaba en la población la idea de que el uso de la fuerza pública equivalía al abuso del gobierno sobre los ciudadanos.

Por otra parte, el imperio del crimen organizado, o desorganizado, se convertía en el principal azote en muchas plazas de la República, como es descrito por René Delgado en su artículo publicado el 11 de noviembre en el periódico *Reforma*:

Hay carreteras donde, como en el viejo oeste, hay que integrar convoyes o caravanas para poderlas transitar con un margen de seguridad no garantizado. La existencia de auténticos ejércitos de criminales que, sin el menor recato, disputan el territorio a la autoridad civil, deja claramente establecido que el monopolio de la fuerza pública ya no es sólo del Estado, también lo es del narco... El cierre de casas de juego en el norte del país por instrucciones del narco porque quiere establecer “contratos de protección” con los dueños de esos establecimientos, pone en claro quién fija los impuestos [...] Tal es la impunidad, tal la falta de justicia, tal la ausencia del Estado que asombra, no el estallido de los petardos en la ciudad [de México, el 6 de noviembre], sino la sorpresa que causa en la autoridad.

Junto a estos terribles acontecimientos, hubo otros que también fortalecieron el desprecio de la población por sus gobernantes. Tal fue el caso del mandatario poblano Mario Marín, quien el 14 de febrero de 2006 dejó grabada en la conciencia nacional la bochornosa

conversación telefónica que tuvo con el empresario Kamel Nacif. En ella, el gobernador le describió el escarmiento que le iba a dar, y le dio parcialmente, a la periodista Lydia Cacho por andar involucrando a su interlocutor en delitos relacionados con la prostitución infantil.

La descomposición y la ineficacia gubernamental llevaron a Fernando Escalante a señalar, en la revista *Nexos* de diciembre de 2006:

La debilidad del Estado mexicano es un lugar común, algo que se da casi por descontado. Es curioso. En los últimos meses, sin que mediase ninguna discusión seria, hemos descubierto todos que tenemos un Estado débil, de instituciones frágiles e ineficaces. No es una novedad —no tendría por qué serlo— pero se habla de ello con un sentido de urgencia que llama la atención, sobre todo porque hasta hace poco era casi unánime la idea contraria: el enemigo para casi todos era el Estado que asfixiaba al mercado, que inhibía las iniciativas de la sociedad y en la práctica hacía imposible la existencia de una verdadera ciudadanía [...] El detonador de la reciente ansiedad fue una frase: “¡Al diablo con las instituciones!”. Si podía decirse eso, si un líder nacional podía decir eso, las instituciones eran bien poca cosa: lo mismo pensaron los que estaban de acuerdo y aplaudieron, y los que estaban en desacuerdo. La crisis de Oaxaca sólo ha servido para reafirmar a unos y a otros la misma idea.

### **El tormentoso camino al cambio de gobierno**

A mediados de septiembre, la política nacional vivía una situación de aparente calma. Definido el presidente electo y sin la presencia de los perredistas en el Zócalo, la confrontación parecía aquietarse, con excepción de la violencia en Oaxaca.

No obstante, el país estaba en serios problemas, pues 30% de los mexicanos creían que había habido fraude electoral. Para ellos López Obrador había sido frenado por “el aparato”, que cumplía así el propósito no logrado por el desafuero.

Construir puentes con esa izquierda dolida, dispuesta a iniciar

una larga movilización social, se veía como una tarea muy difícil. Los lopezobradoristas se proponían darle a su movimiento la dimensión suficiente como para asegurar que Calderón no pudiera definir una agenda nacional sin tomar en cuenta la de sus opositores, lo cual era muy razonable. Para ello, acordaron, desde antes de la Convención Nacional Democrática del 16 de septiembre, formar el Frente Amplio Progresista (FAP), que tendría como objeto principal enfrentar al bloque “conservador” en el Congreso.

El FAP se creó el jueves 14 de septiembre para conservar la unidad del PRD, Convergencia y el PT. Era una figura que permitía a los partidos unirse —dice la legislación electoral— “para alcanzar objetivos sociales y políticos compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes”. Los partidos que integran un frente, aclara el código respectivo, “conservan su personalidad jurídica, su registro y su identidad”. Eso significa que podían construir su propio espacio político y continuar con su movimiento de resistencia civil sin tener que sujetarse a las regulaciones jurídicas que debía enfrentar un partido político.

Lo que ya se salía de lo razonable, pues suponía una transgresión a la institucionalidad, era el nombramiento de Andrés Manuel López Obrador, el 20 de noviembre, como “presidente legítimo”. Finalmente, resultaba violenta la propuesta de impedir la toma de posesión de Felipe Calderón, pues implicaba romper el orden constitucional.

López Obrador y sus partidarios optaron por seguir una doble ruta en sus acciones. Algunos de sus miembros formaban parte del gobierno y otros se movían en las calles agitando la resistencia contra ese mismo gobierno.

Los segmentos tradicionales de la izquierda se hundieron en la depresión postelectoral, pues lamentaban que una lucha de décadas por ganarle espacio en la vida institucional al pensamiento de izquierda estuviera ahora instalado en el espejismo de los “hombres fuertes”, y viviera del aliento de Andrés Manuel López Obrador.

El PRD, que desde su nacimiento había sido una coalición de federaciones políticas, se encontraba centrado en una sola persona. Este

neocaudillismo, que se creía que había desaparecido en México, en los años treinta del siglo pasado, estaba sacando del ámbito institucional a la izquierda.

Una de las primeras víctimas de este proceso fue Cuauhtémoc Cárdenas, el fundador del partido. El político michoacano aclaró paradas en una carta dirigida a la escritora Elena Poniatowska y publicada el 14 de septiembre. En ella, dejaba ver su rechazo a la nota “Marcos y Cárdenas no apoyaron a AMLO por envidia”, aparecida el 10 de septiembre en el periódico *La Jornada*. En la nota se atribuía a la escritora la siguiente expresión: “Si estos tres personajes [en el texto se agrega a Patricia Mercado] se hubieran sumado, si no se hubieran echado para atrás, no habría la menor duda del triunfo de López Obrador, pero no lo hicieron por envidia”.

En su misiva, afirmó que sus diferencias con López Obrador no eran personales, sino que se referían a aspectos programáticos, los cuales estaban claramente establecidos en los respectivos libros que habían publicado. Criticó que AMLO se hubiera rodeado de expriístas, pues “no sería por sus antecedentes y falta de deslindes, un gobierno identificado con los principios y las luchas del PRD y de manera más amplia con aquellos de la izquierda mexicana”.

En la parte fuerte del texto, señaló:

Yendo a otros temas, me preocupa profundamente la intolerancia y satanización, la actitud dogmática que priva en el entorno de Andrés Manuel para quienes no aceptamos incondicionalmente sus propuestas y cuestionamos sus puntos de vista y sus decisiones, pues con ello se contradicen principios fundamentales de la democracia, como son el respeto a las opiniones de los demás y la disposición al diálogo.

Me preocupa, asimismo, que esas actitudes se estén dando dentro del PRD y en sus cuadros dirigentes, pues se inhibe el análisis y la discusión de ideas, propuestas y alternativas entre compañeros, más allá de que esa cerrazón se extiende también a lo que pueda llegar de afuera del partido; que la conducción política y las decisiones tomadas después del 2 de julio, como

el bloqueo de Madero, Juárez y el Paseo de la Reforma —excluyo la ocupación de la plancha del Zócalo— se estén traduciendo en pérdidas y desgaste del movimiento democrático en lo general y del PRD en lo particular [...]

En reciente documento suscrito por Andrés Manuel se plantea que la convención que él ha convocado para celebrarse el 16 de septiembre “decida si el órgano de gobierno y quien lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el primero de diciembre de 2006” [...]

No pienso que así deba procederse. Hacerlo sería un craso error, de altísimo costo para el PRD y para el movimiento democrático en su conjunto. Por el contrario, estoy de acuerdo con la sensatez y sabiduría de Luis Villoro, que en un artículo reciente dice que la discusión de un proyecto nuevo de nación requiere de tiempo para su debate y no puede aprobarse en un acto declaratorio en el Zócalo, al calor de un discurso, pues haría falta por lo menos la consulta y la anuencia de delegados de toda la República.

Por su parte, los gobernadores del PRD no actuaron de manera uniforme. En tanto que el jefe de Gobierno electo, Marcelo Ebrard, mantuvo el compromiso de no reconocer al “presidente espurio” Felipe Calderón, otros mandatarios emanados del PRD, como Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán, y Zeferino Torreblanca, de Guerrero, criticaron los errores cometidos en la campaña de López Obrador y se prepararon a tratar con el presidente Calderón, a pesar de considerar que hubo irregularidades en el proceso electoral. Amalia García, de Zacatecas, declaró a Gloria Leticia Díaz —en la entrevista que obtuvo con ellos para la revista *Proceso* del 15 de octubre— que esperaba a ver el comportamiento del nuevo gobierno para definir su postura.

En este contexto tan intranquilizante, se dio la contienda por la gubernatura de Tabasco. Andrés Manuel López Obrador centró sus baterías en apoyar la campaña de su amigo César Raúl Ojeda, quien por tercera vez competiría, el 15 de octubre, por ese cargo, ahora contra el priísta Andrés Granier.

Esta campaña cobró relieve nacional, pues muchos analistas comentaron que López Obrador se estaba jugando su proyecto en esta elección. Desde el 30 de agosto, López Obrador envió miles de cartas a las casas de los tabasqueños con el siguiente mensaje:

Estimado paisano: Las elecciones de Tabasco son parte fundamental del Movimiento Nacional por la Justicia y la Democracia. Si Raúl Ojeda gana la gubernatura, será un triunfo para millones de mexicanos que luchan, sin rendirse, contra la mafia del PRIAN que pretende perpetuar la corrupción y los privilegios...

También ten presente que nuestros adversarios van a querer golpearme políticamente en las elecciones de Tabasco, porque si perdemos echarán a andar una campaña nacional para vociferar que ya ni en mi estado natal represento nada.

Con malicia, varios articulistas apuntaron que, en caso de perder Ojeda, el movimiento de AMLO no recibiría “los apoyos” que pudiera brindarle un gobernador que le debía su triunfo.

En los mítines de campaña de Ojeda, AMLO hablaba durante 45 minutos, mientras el candidato lo veía desde atrás. Fuera de Tabasco, la gente preguntaba “quién es ese ‘peloncito’ que está al lado de Andrés Manuel López Obrador”.

A principios de octubre, todas las encuestas le daban una ventaja de 10 puntos a Granier sobre Ojeda. Los perredistas vieron estos datos como una estrategia mediática de Granier para posicionarse como ganador anticipado, y no consideraron que eran resultado de la pérdida de popularidad de López Obrador a raíz del plantón Zócalo-Reforma. Durante ese periodo, la imagen de AMLO cayó 25 puntos en el aprecio de los mexicanos.

El candidato del PAN, Juan Francisco Cáceres, sólo tenía entre 3 y 5 por ciento de las preferencias, por lo que, después de los comicios federales, su partido decidió unirse al PRI como “voto útil”. Los perredista vieron esta declinación como una prolongación de la “guerra” desatada en su contra por Felipe Calderón.

Así como Andrés Manuel López Obrador apoyó con todo la cam-

paña de Ojeda, el gobernador Manuel Andrade lo hizo con la de Granier. Ambos echaron mano de sus expertos electorales.

El PRD y el PRI entraron en una confrontación abierta. Los perredistas cazaban “mapaches” y descubrían “sus madrigueras”, como llamaban a los centros de acopio de los priístas, en tanto que el gobernador ordenó un operativo para detener a cualquier persona que viajara en autos con placas de otros estados. Con ello buscaba frenar que llegaran “fuereños y chilangos” a “reventar” los comicios. Manuel Andrade ensució la elección al ofrecer todo tipo de beneficios a quienes apoyaran a Andrés Granier y creó en los medios un ánimo de enfrentamiento y miedo que condujo a detenciones arbitrarias y otros abusos.

El 15 de octubre, Granier triunfó con 53% de los sufragios contra 43% del aspirante de la Coalición por el Bien de Todos.

Quizá, como lo señalaron muchos perredistas y algunos medios, el tres veces derrotado Ojeda no fue un buen candidato. Sin embargo, resultó significativo el hecho de que su ventaja en las encuestas se fue desplomando, como consecuencia de la intolerancia que la CBT mostró tras la elección presidencial. Con su actitud, López Obrador revivió la imagen de un PRD violento, que mandaba al diablo a las instituciones y utilizaba los bloqueos de vías de comunicación como arma de presión política. Al apostar todo al triunfo en esta elección y no obtenerlo, AMLO dio un aviso de que el PRD podía ser el gran perdedor en los comicios de 2009.

Para demostrar que no se rendía, el 25 de octubre López Obrador se reunió, a puertas cerradas, en el auditorio Valentín Campa, de la antigua sede del PRD, con los excoordinadores de la Redes Ciudadanas, Socorro Díaz y José Agustín Ortiz Pinchetti y con los líderes perredistas Leonel Cota y Martí Batres. Ahí les propuso un plan de acción para las 10 primeras semanas de 2007: él visitaría 1,000 municipios y quería que, para marzo, los coordinadores de su movimiento hubiesen afiliado a 5 millones de personas. Confirmó que efectuaría una gira por ciudades de 10 estados antes de su toma de protesta el 20 de noviembre. Por último, dijo: “Vamos bien, cuando la gente les pregunte qué vamos a hacer, díganle que vamos a hacer más que el presidente espurio”.

Pese a su pérdida de popularidad y a que López Obrador iba en una ruta distinta a la que convenía a su partido, el PRD logró crear la sensación de que tenía de rodillas a Felipe Calderón, con la amenaza de que si no pactaba con él, en sus términos, no permitiría la toma de protesta.

Así, Felipe Calderón tenía que negociar con el PRI, pero ahí las cosas tampoco estaban fáciles. Durante su campaña, había propuesto abiertamente llegar a una fórmula de gobierno de coalición. Sin embargo, semanas antes de su toma de posesión no había ninguna señal pública de que se estuvieran tejiendo políticas conjuntas. El PRI, precisamente por ser un partido fuerte en las regiones y tener votos en el Congreso, era una hidra de muchas cabezas. ¿Con quién negociar? ¿Quién podía hacer que se cumpliera qué acuerdo?

Además, estaba el conflicto de Oaxaca. El que los priístas defendieran la cabeza de Ulises Ruiz pudo ser uno de los obstáculos para que Calderón empezara algún tipo de proyecto con el PRI. La conversación del líder de los diputados de ese partido, Emilio Gamboa, con el desprestigiado empresario Kamel Nacif, el 12 de septiembre, recordó la malhadada plática del mismo personaje con el gobernador Mario Marín. Esto creó una fisura por donde brotó la desconfianza de la sociedad en ese tipo de políticos.

Como se había anunciado, el viernes 3 de noviembre tuvo lugar la presentación del gabinete de AMLO. Poco después de las cinco de la tarde, en el Teatro de la Ciudad, la escritora Laura Esquivel dio comienzo a la ceremonia. En pocas líneas explicó la diferencia entre las palabras “legítimo” y “espurio”, y se ganó una ovación al señalar que el “llamado presidente legal asumirá un gobierno que es fruto de un contubernio entre los inciertos y los ilícitos”.

Enseguida César Yáñez, quien sería nombrado director de comunicación social del “pejegobierno”, dio a conocer a los integrantes del gabinete. Se trataba de un equipo de 12 personas con experiencia en la administración pública. En él, AMLO incluyó a siete secretarios y ex-secretarios del gobierno capitalino, entre ellos a Claudia Sheinbaum en Patrimonio Nacional; Asa Cristina Laurel en Salud; Berta Luján en

Trabajo, y Laura Itzel Castillo seguía en Desarrollo Urbano y Vivienda. En puestos relevantes quedaron Gustavo Iruegas, para Relaciones Exteriores, y José Agustín Ortiz Pinchetti, para Relaciones Políticas.

En su discurso, López Obrador empleó un lenguaje más combativo que el que usaba en el plantón del Zócalo. Tachó de “neofascista” a la clase dominante y arremetió contra el periodismo, al que calificó de “la peor calaña”. A Cuauhtémoc Cárdenas lo aludió cuando habló de los “dirigentes que en otros tiempos dirigieron causas populares, pero ya se cansaron de pensar y ser como eran”. Estas palabras dan cuenta del tamaño que había adquirido su hígado, el cual seguramente creció por la poca cobertura que tuvo el evento.

Como hemos narrado, la inquietud se apoderó de nuevo de los capitalinos cuando estallaron seis bombas en la ciudad de México la madrugada del 6 de noviembre. Dos explotaron en el edificio del PRI, otras tantas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dos más en una sucursal de Scotiabank en Tlalpan. Otros dos artefactos no estallaron, uno en un Sanborns frente a la sede del PRI y otro en la sucursal de Scotiabank ubicada en el Eje 3 Oriente.

La intención, parecería, era sembrar miedo y preocupación, aprovechando que el ambiente estaba cargado políticamente, pues Oaxaca se encontraba al rojo vivo, se aproximaba la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como “presidente legítimo” y, por supuesto, el primero de diciembre sería la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

Algunos calificaron los bombazos de “terrorismo light”: se colocaron los explosivos en lugares donde no había gente, por lo que no se mató a nadie, ni se hirió a persona alguna. No obstante, sí constituyó un acto de terrorismo que, desgraciadamente, tenía muchos antecedentes. El más reciente había sido un mes antes, el 2 de octubre, cuando hubo bombazos en bancos situados en Oaxaca. Un año antes, el 18 de noviembre, estallaron petardos en bancos del Estado de México, y poco más atrás, en 2004, en Cuernavaca.

Cinco grupos se proclamaron autores de los bombazos en el Distrito Federal: Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pue-

blo, Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, Organización Independiente Primero de Mayo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre y Brigadas Populares de Liberación.

Sin embargo, el miércoles 8 de noviembre, Wilfrido Robledo Madrid, uno de los policías que mejor conocía la guerrilla en México, aseguró que detrás de las organizaciones que reivindicaron los atentados del lunes anterior sólo estaba el Ejército Popular Revolucionario. Robledo comentó a la prensa que este grupo guerrillero tenía entre 250 y 300 miembros con preparación militar. Añadió que reclutaba a su personal entre organizaciones radicales de choque, como el Frente Popular Francisco Villa.

El horno no estaba para bollos. El presidente Fox terminaba su sexenio en medio del descrédito y con una sensación de mucho encono, lo que se traducía en burla. En diversas estaciones de radio empezaron a hacer un conteo regresivo de su salida, como el que se realizaba para el año nuevo. Incluso se crearon canciones chuscas, como el son “Entregas y te vas”, que pronto adquirieron popularidad.

Vicente Fox inició su gobierno con una sobrecarga de expectativas, que él mismo generó al decir que en cuanto sacara al PRI de Los Pinos, hasta los baches estarían tapados la mañana siguiente. Con su ánimo fundacional y su convicción de que podía lograr todo gracias a su popularidad, hizo que su administración naufragara estrepitosamente.

Fue un presidente que no pudo llevar adelante su agenda; no se lanzó a perseguir los peces gordos que anunció; no contuvo a los sindicatos; no disciplinó a su gabinete, ni paró las ambiciones de su mujer. Fox tomó la decisión del desafuero, abandonó la política exterior, dio rienda suelta a su sentido patrimonialista y a su afán mercadotécnico, y, lo peor de todo, no pudo frenar el crecimiento de la inseguridad y la ingobernabilidad.

Al despedirse, sus orgullos fueron de continuidad: el modelo económico que preservó y la política social que mantuvo con algunos retoques. Su mérito central fue, sin duda, haber logrado la alternancia política.

Su figura, después del primero de septiembre, resultaba ya las-

timosa. Muchos se manifestaban desesperados; deseaban que ya cambiara el gobierno, para que México realmente tuviera un presidente con el ánimo de serlo.

La tensión crecía por todos lados. El 10 de noviembre, los 250 consejeros nacionales del PRD se reunieron para analizar un documento distribuido por Leonel Cota llamado "Balance electoral 2006". En él, se reconocía que el exceso de confianza había dominado a Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de trabajo durante la campaña presidencial.

El documento, realizado por integrantes del CEN y un grupo de 20 representantes de las distintas corrientes partidistas, enumeraba 11 "desaciertos" en la campaña. Entre ellos destacaron la confrontación de AMLO con el presidente Fox, su inasistencia al primer debate y su descalificación continua de las encuestas.

A pesar de esta crítica interna, López Obrador siguió adelante con su movimiento. Muy dado a apoyarse en símbolos, AMLO ha tratado de presentar como episodios históricos los acontecimientos políticos que protagoniza. La sobreutilización de este recurso fue su autopromoción como "presidente legítimo" en el aniversario de la Revolución mexicana.

El 20 de noviembre, en el Zócalo, armó una escenografía para el acto. En un templete ubicado frente a Palacio Nacional, se colocó un telón de fondo color vino con dos banderas nacionales en los extremos y en el centro, resplandeciente, en tonos de plata, el águila republicana, vista de frente y no de perfil. Ahí estaban alineadas, en dos grupos de seis, las 12 sillas de los miembros del gabinete.

A las cinco de la tarde, la cantante Regina Orozco leyó los nombres de los integrantes del gabinete, que fueron entrando al escenario para ocupar sus respectivos lugares. Entonces llegó López Obrador, con el pelo revuelto por el viento. Tras entonar el Himno Nacional, junto con la plaza que lo cantaba a voz en cuello, se convirtió en el eje de una breve entrega de símbolos.

Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez colocaron en sus manos un pergamino extendido por la Convención Nacional Democrática

que lo reconocía como “presidente legítimo”. Después, un maestro y una estudiante de la UNAM le dieron un distintivo para la solapa con la “insignia presidencial” y, de inmediato, la senadora Rosario Ibarra de Piedra le trajo la banda tricolor, que el ventarrón trató de arrancarle del cuello por un instante.

Cada vez más despeinado por el aire y con un gesto exaltado, López Obrador recordó las distintas etapas de la lucha electoral de julio y la secuela de anomalías que lo llevó a proponer a la gente, como divisa para enfrentar los nuevos tiempos: “¡Al diablo con las instituciones corruptas!”. Luego, leyó un programa de acción de 20 puntos. Los más notables fueron: conformar un nuevo marco constitucional; crear iniciativas de ley para enfrentar a monopolios económicos que lesionaban impunemente la economía popular; defender el patrimonio energético y la soberanía nacional; exigir la apertura de los medios y presentar una contrarreforma a la llamada “Ley Televisa”, y pedir, por no decir ordenar, al gobierno del Distrito Federal, en funciones y próximo, que realizara todas las gestiones para que la leche Liconsa siguiera costando 3.50 y no 4.50 pesos —precio al que se estaba vendiendo por un aumento recientemente aprobado.

Después, entre fuertes aplausos, gritos y cohetones, López Obrador desanduvo, ahora con la banda tricolor al pecho, el camino hasta Pino Suárez, saludando a la gente. Muchos de los asistentes a la ceremonia se quedaron celebrando en calles, restaurantes y cantinas del primer cuadro de la ciudad de México hasta bien entrada la noche.

El acto efectuado en el Zócalo capitalino fue la culminación formal de una ruptura nacional largamente gestada.

Para sus seguidores, López Obrador buscaba mantener, dentro de cauces pacíficos y legales, el vasto descontento político, económico y social que existía en el país. Trataba de crear estructuras de participación en donde las instituciones habían resultado incapaces de hacerlo. Quería construir consensos entre quienes estaban marginados en la sociedad mexicana: ese enorme sector de la población que no participaba de la esfera política democrática, de debate racional, sino que se movía en el terreno del mundo afectivo, pasional, casi teológico.

La duda que surgía al ver la ceremonia del 20 de noviembre era si AMLO podría expresar el malestar social y crear un orden nuevo o si simplemente actuaba como un iluminado.

El diario madrileño *El País* lo calificó severamente: “Si algo ha logrado López Obrador con su permanente y escasa consideración con las instituciones democráticas del Estado y con sus decisiones es el oprobio de poner en peligro la convivencia pacífica y la paz civil de esa gran nación que es México”.

Quienes consideraban que la democracia es algo más complejo de lo que se puede expresar en una plaza pública, algo que supone un mecanismo de instituciones, garantías y procedimientos, vieron el acto del 20 de noviembre como una transgresión a las instituciones.

Resultaba esquizofrénico pensar que podía haber dos presidentes recorriendo simultáneamente el país. Estaba fuera de los límites de una oposición leal llamar espurio y pelele al Presidente Constitucional. Se trataba de acciones que iban contra las instituciones.

La encuesta de opinión publicada por el periódico *Milenio* ese 20 de noviembre señalaba que tres de cada cuatro mexicanos (73%) estaban en desacuerdo con el hecho de que Andrés Manuel López Obrador asumiera y se hiciera llamar “presidente legítimo” de México, mientras que sólo dos de cada diez (22%) respaldaban su autonombamiento. El 61% creían que con ello lastimaba al país. En círculos cada vez más amplios, la crítica se expresaba en forma de chunga, de guasa.

Nadie cuestionaba que López Obrador y los partidos del Frente Amplio Progresista mantuvieran una posición crítica frente al gobierno de Calderón. Pero su estrategia de descalificación y confrontación sí era percibida como algo que excedía a una oposición razonable o responsable, en una democracia moderna. Sin embargo, aunque eso los estaba llevando a perder electores, todos los grupos del PRD y el FAP reafirmaron públicamente su apoyo a AMLO como “presidente legítimo” de México.

Así, Dolores Padierna aseveró, aguerrida, en la entrevista publicada el 26 de noviembre en *La Jornada*: “Nosotros fundamos un partido para la toma del poder, no para jugar a las elecciones... La realidad es que ganamos la Presidencia, nos la robaron, y mientras existan estas

reglas de juego, el PRD tiene que hacer dos luchas que deben armonizarse, la institucional y la resistencia y desobediencia civil [...]”.

“No vamos a tragarnos el anzuelo de nuestros adversarios que pretenden separar al Partido de la Revolución Democrática del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador” dijo, en una entrevista también publicada por *La Jornada* el 3 de noviembre, Carlos Navarrete, coordinador de los senadores perredistas. El legislador explicó: “La posición de Andrés [...] es de ser símbolo de la resistencia, la energía social atrás de él, la figura que no transa, no se dobla, no transita por ningún acuerdo: ése es su papel. Pero la vía del Congreso es buscar las transformaciones sobre la base de acuerdos legislativos”. Estas afirmaciones recuerdan conceptos marxistas de la dialéctica, donde los avances se dan mediante la alternancia de las contradicciones.

Las expresiones de los perredistas hacían que surgiera la duda: ¿Deseaban realmente socavar al próximo gobierno hasta hacer insostenible su ejercicio o estaban pensando en arrinconarlo para imponer su agenda?

La incertidumbre sobre lo que iba a pasar el primero de diciembre comenzó a crear un ambiente muy tenso. Impedir que Felipe Calderón protestara como Presidente Constitucional ante el Congreso implicaría romper la continuidad de la vida institucional del país. Con eso, ni más ni menos, amenazaba el Partido de la Revolución Democrática.

Los días pasaban y nadie sabía si sería necesaria la intervención del Estado Mayor Presidencial para garantizarle al presidente de la República su entrada y salida del recinto parlamentario donde debía rendir su protesta solemne. Había la preocupación de que se desatara la violencia física.

Los medios de información reseñaban con detalle las negociaciones entre los líderes de los partidos políticos, y su fracaso cotidiano. A partir del 13 de noviembre, se empezó a manejar en los medios la versión de que los legisladores perredistas habían pactado una toma de protesta de Calderón sin contratiempos a cambio de que se aprobara una agenda legislativa mínima que presentaron. Al enterarse, López Obrador envió a Porfirio Muñoz Ledo a regañar a los legisladores. Según

informan Jesusa Cervantes y Gloria Leticia Díaz en la revista *Proceso* del 26 de noviembre, éste les advirtió en esa ocasión que “no debíamos permitir la toma de posesión de Calderón, que es una ilegalidad y que habría que hacer hasta lo imposible para que eso no sucediera”.

El viernes 17 de noviembre, los coordinadores parlamentarios del PRD, Javier González Garza y Carlos Navarrete, se reunieron con AMLO, quien les soltó: “Ustedes tienen un compromiso y saben si lo cumplen o no”. Los perredistas anunciaron entonces que la decisión de impedir la protesta de Felipe Calderón como presidente de la República estaba tomada y que no habría marcha atrás.

Frente al anunciado conflicto, desde el 15 de noviembre el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Zermeno, solicitó la intervención del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal Preventiva para el resguardo del Palacio Legislativo de San Lázaro. Ello llevó a que se levantara un muro antimotines de acero y se instalaran más de 20 retenes en un perímetro de tres kilómetros alrededor del recinto parlamentario. Los perredistas y los priístas se quejaron de la militarización de la zona y la suspensión, de facto, de las libertades civiles en 10 colonias.

A diferencia del primero de septiembre, los representantes del PAN estaban ahora preparados para enfrentar a sus pares. En las columnas políticas se habló de que los panistas tenían previstas acciones que iban desde anticiparse al PRD en el asalto a la tribuna, montar una valla humana para abrirle paso al presidente electo hasta, como último recurso, desalojar por la fuerza a los legisladores del PRD, aprovechando su ventaja numérica de casi dos a uno.

Dadas las circunstancias, el PAN decidió recurrir a los mismos medios del PRD para la defensa física de la tribuna. Lamentablemente, los diputados habían venido escalando sus acciones, sentando precedentes de impunidad. Basta recordar que Alfonso Ramírez Cuéllar, en diciembre de 2002, entró a caballo al recinto parlamentario encabezando una protesta del Barzón y, sin embargo, después pudo ser diputado federal. De igual manera, la toma de tribuna de la Cámara Baja por parte de miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

que se quedaron a dormir ahí, no trajo otra consecuencia que el desprestigio de los parlamentarios.

En una presentación sobria y breve, el martes 21 de noviembre, Felipe Calderón designó a quienes lo acompañarían en las secretarías del sector económico. Agustín Carstens quedó en Hacienda y Crédito Público, Georgina Kessel en Energía, Eduardo Sojo en Economía, Luis Téllez en Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano en Trabajo y Previsión Social y Rodolfo Elizondo repetiría en Turismo. Estos nombramientos fueron vistos como una señal de que habría continuidad en las políticas públicas. Además, se evaluó positivamente la capacidad técnica de los designados. El presidente electo les pidió: “Trabajar por alcanzar nuestro objetivo final: una economía competitiva y generadora de empleos”.

El viernes 24, Calderón presentó a los futuros secretarios del área social: Beatriz Zavala Peniche en Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota en Educación Pública, Alberto Cárdenas Jiménez en Agricultura, José Ángel Córdova en Salud, Juan Rafael Elvira en Medio Ambiente e invitó a repetir en Reforma Agraria a Abelardo Escobar. En este sector del gabinete, totalmente panista, quien desató más comentarios fue el futuro Secretario de Salud, porque en el pasado se había opuesto a la píldora del día siguiente. Estos nombramientos despertaron el temor de que la moral panista se impusiera en el ámbito de la vida privada y de que las áreas que reparten dinero quedaran en un grupo tan monocolor. Además, con excepción de Josefina Vázquez Mota, se les consideró con menos experiencia.

Unos días después, el martes 28, el presidente electo dio a conocer a su gabinete político. Francisco Ramírez Acuña en la Secretaría de Gobernación, Germán Martínez Cázares en la Función Pública, Juan Camilo Mouriño en la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República y Patricia Espinosa Castellano en Relaciones Exteriores. Este gabinete, en el que confió “que hagan cumplir las leyes”, mezcló firmeza y experiencia.

Las designaciones del gabinete de seguridad, encargado de iniciar una batalla contra el narcotráfico, la criminalidad y la delincuencia or-

ganizada, fueron anunciadas por Calderón el 30 de noviembre. Guillermo Galván Galván como secretario de la Defensa Nacional, Francisco Saynez Mendoza en Marina, Genaro García Luna en Seguridad Pública y Eduardo Medina Mora en la Procuraduría General de la República.

Esa semana, la anterior a la transmisión del poder presidencial, ante la agresividad desatada en Oaxaca y las amenazas de los perredistas de que no dejarían a Felipe Calderón tomar protesta de su cargo como Presidente Constitucional, todos los mexicanos tuvieron, una vez más, el alma en un hilo.

El martes 28, los diputados perredistas y panistas protagonizaron una trifulca en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Se desató un huracán cuando los diputados del PAN, hartos de las amenazas perredistas y ante el rumor de que éstos intentarían tomar la tribuna, decidieron proteger las escalinatas de la misma para impedir el sabotaje a la ceremonia de traspaso de poderes. Esta movilización provocó que los perredistas también trataran de tomar la tribuna y entonces la tensión se transformó en violencia. El Palacio Legislativo de San Lázaro se convirtió en una arena de lucha. A pesar de las exhortaciones de sus coordinadores, los diputados no se movieron de los lugares que habían ganado en la gresca y anunciaron que ahí permanecerían. Empezaron entonces las negociaciones para desalojar la tribuna.

Los legisladores, que de día se agredían, de noche se transformaban y actuaban como si estuvieran en una especie de cantina. Olvidaban sus rencores y se dedicaban a la bohemia, a la música y, en la mañana, a los tamales.

El miércoles 29 hubo nuevos intentos fallidos de negociación en la Cámara de Diputados para asegurar que se efectuara la ceremonia de toma de protesta de Calderón. Esa semana tortuosa los medios dieron cuenta de las propuestas de los negociadores, varias de las cuales implicaban ceder al chantaje perredista.

Los priístas, que no eran parte en conflicto, presionaban para que se negociara, y pedían que el PAN cediera en algún aspecto, para venderle algo a los perredistas: otro lugar para tomar la protesta del presidente electo o que no asistiera Vicente Fox.

El PRD quería forzar a Felipe Calderón a caer en algún error jurídico y, así, seguir el litigio no solamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino en las calles y en los medios. Era la manera de que Andrés Manuel López Obrador y su movimiento pudieran mantenerse en la agenda mediática.

En este crítico ambiente, tuvo lugar una ceremonia sin precedentes, que fue televisada en cadena nacional. En el primer minuto del primero de diciembre, Vicente Fox Quesada le entregó la banda presidencial, la cual se deslizó entre sus manos y casi se le cayó al suelo, a un cadete del Colegio Militar. Felipe Calderón Hinojosa asumió el cargo de presidente de la República, y con él las responsabilidades de jefe del Estado y de gobierno. En el acto, Calderón recibió una bandera nacional, que lo acompañará durante todo su sexenio.

Asimismo, se llevó a cabo la ceremonia de entrega-recepción del gobierno federal y el presidente Calderón dio posesión de sus cargos a los miembros del gabinete de seguridad. Luego, emitió su primer mensaje como Presidente de México.

No ignoro la complejidad del momento político que vivimos, ni nuestras diferencias, pero estoy convencido de que hoy debemos poner punto final a nuestros desencuentros, y a partir de ahí iniciar una nueva etapa que tenga como único objetivo anteponer el interés nacional por encima de nuestras diferencias... Apelo al respeto a la investidura del Congreso, a la necesidad de fortalecer la vida institucional y al patriotismo de los legisladores para que todo se haga con pleno respeto a la Carta Magna.

El primero de diciembre, poco antes de la ceremonia de cambio de poderes, legisladores del PAN y del PRD se enfrascaron en un enfrentamiento por el control de los accesos al salón de sesiones de la Cámara de Diputados. A las ocho de la mañana en que se acabó el acuerdo de no confrontación —único resultado visible de las negociaciones—, los perredistas se abalanzaron sobre los accesos a la sala de sesiones, re-

partiendo golpes en el camino, con la expectativa de impedir la entrada de los priístas y, de esa manera, evitar la formación del quórum. Encadenaron las puertas e hicieron una barricada con las curules. Se creó un ambiente verdaderamente tenso. Nadie sabía qué iba a suceder.

Quienes seguían la ceremonia en los medios oían una contienda entre los silbatazos del PRD y las porras del PAN. Era un ambiente de enfrentamiento a la mexicana, que no pasó de empujones, una pierna lastimada y pisotones severos. Para vergüenza de todos, mientras esto sucedía, estaban llegando a San Lázaro los invitados especiales y personalidades como el príncipe de Asturias o el expresidente George H. Bush.

Se vivieron momentos muy dramáticas, de enorme incertidumbre, de gran tensión política, por la posibilidad de una crisis institucional como no se había vivido antes. Había el intento deliberado del grupo parlamentario del PRD de impedir que se cumpliera con los requisitos establecidos por la Constitución.

Cuando entraron los priístas, portando banderitas nacionales, y se formó el quórum, los panistas aplaudieron y el público se tranquilizó un poco. La asistencia de los miembros del Congreso se certificó notarialmente, pues los perredistas habían desconectado el tablero electrónico.

Los panistas lograron resguardar la puerta conocida como “tras banderas”, por donde entró el presidente. Y Felipe Calderón cumplió con su palabra. En medio de vítores panistas y silbatazos perredistas, pronunció las palabras solemnes de su toma de protesta en la sede central del Congreso, como lo establece la Constitución. Fue una decisión arriesgada y valiente, que mandó un mensaje de firmeza. Cuatro minutos bastaron para que Calderón Hinojosa jurara como Primer Mandatario y recibiera la banda presidencial. Fue la ceremonia de cambio de poderes más breve de la historia.

En el segundo acto del día, Felipe Calderón tomó la protesta de su gabinete en el Auditorio Nacional de la ciudad de México. Ahí hizo un llamado a todos los actores políticos a dejar de lado los enconos para buscar acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Invitó al diálogo, pero

aclaró que la negativa a dialogar de algunos sectores no impediría que cumpliera con su trabajo.

Por otra parte, señaló que su primera prioridad sería la lucha contra la delincuencia. En ese sentido, reconoció la urgencia de reformar a las instituciones responsables de la seguridad pública. Su segunda prioridad fue el combate a la pobreza y la protección de los que menos tienen, a través de la reorientación del gasto público. Anunció que todos los niños mexicanos que nacieran a partir de ese día contarían con un seguro médico.

Luego, Calderón Hinojosa dio a conocer su decisión de reducir su sueldo, así como el de los altos funcionarios de su gobierno. Por último, expresó toda su disposición a emprender una reforma política encaminada a bajar el costo y dotar de transparencia a los procesos electorales.

El viernes primero de diciembre existió la posibilidad de una ruptura en la vida constitucional del país. El Partido de la Revolución Democrática actuó con ese fin de manera consciente, pública y explícita. Esto es algo que muchos mexicanos no van a olvidar.

Los lopezobradoristas, siempre recordando y manifestando sus agravios, no se dieron cuenta de que con sus acciones estaban agraviando a la mayoría de la nación.



---

## ÍNDICE DE NOMBRES

---

- Abascal, Carlos, 104, 124, 138  
Aceves Navarro, Gilberto, 51  
Aguilar Bodegas, José Antonio, 120  
Aguilar, Luis F., 143  
Aguilar, Rubén, 104, 134  
Agúndez, Narciso, 55  
Alternativa Socialdemócrata, 127, 130  
Andrade, Manuel, 162  
Anuar Mafud, Héctor, 152  
Aristegui, Carmen, 50, 66, 106  
Asamblea de Barrios, 107  
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), 146, 147, 149, 150, 151,  
152, 153  
Avilés, Jaime, 88
- Bachelet, Michelle, 133  
Barrón, Juliana, 45  
Bartra, Roger, 78, 79, 90  
Batres, Martí, 162  
Beltrones, Manlio Fabio, 75  
Bonilla, Héctor, 55, 94  
Bush, George H., 174  
Bush, George W., 33, 132

- Cáceres, Juan Francisco, 161
- Cacho, Lydia, 157
- Calderón Hinojosa, Felipe, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 84, 85, 93, 96, 103, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 119, 121, 122, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 139, 140, 141, 145, 151, 153, 158, 160, 161, 163, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
- Camacho Solís, Manuel, 21, 41, 62, 65, 66, 74
- Campa, Valentín, 162
- Cárdenas Batel, Lázaro, 64, 131, 155, 160
- Cárdenas Jiménez, Alberto, 171
- Cárdenas Solórzano, Cuauhtémoc, 74, 80, 126, 139, 159, 164
- Carstens, Agustín, 171
- Castillo, Laura Itzel, 164
- Castillo, Leonel, 62, 84, 121
- Castro, Fidel, 124, 133
- Cerisola, Pedro, 34
- Cervantes, Jesusa, 170
- Chávez, Hugo, 133
- Chirac, Jacques, 133
- Coalición por el Bien de Todos (CBT), 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 55, 56, 59, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 95, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 118, 119, 120, 121, 126, 128, 130, 137, 162
- Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), 25, 62, 78
- Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 65
- Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), 132
- Convención Nacional Democrática (CND), 114, 115, 116, 117, 119, 122, 125, 129, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 158, 166
- Cordera, Rolando, 94
- Córdova, José Ángel, 171
- Córdova, Lorenzo, 53
- Corral, Javier, 66
- Cortés Santiago, Javier, 155
- Cota, Leonel, 162, 166
- Covarrubias, Ana Cristina, 17

- Creel Miranda, Santiago, 75  
*La Crónica* (periódico), 65, 78, 95  
 Cuevas, José Luis, 52
- Da Silva, Luis Ignacio (*Lula*), 133  
 De la Fuente, Juan Ramón, 43, 74, 75, 126  
 Delgado, René, 51, 156  
 Díaz Ordaz, Gustavo, 116, 118, 144  
 Díaz, Gloria Leticia, 160, 170  
 Díaz, Socorro, 162  
 Dorador, Rodolfo, 124  
 Duarte, Horacio, 45, 53, 69, 73, 81, 82, 85
- Ebrard Casaubon, Marcelo, 20, 34, 55, 115, 160  
*The Economist* (periódico), 65  
 Ejército Popular Revolucionario (EPR), 147, 165  
 Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), 147  
 Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 144, 147  
 Elizondo, Rodolfo, 171  
 Elvira, Juan Rafael, 171  
 Encinas, Alejandro, 55, 62, 87, 93, 104, 105, 134, 137, 138  
 Enríquez, Juan, 70, 71  
 Escobar, Abelardo, 171  
 Esparza, Martín, 64  
 Espino, Manuel, 17, 96, 104  
 Espinosa Castellano, Patricia, 171  
 Esquivel, Laura, 163
- Felguérez, Manuel, 52  
 Fernández Noroña, Gerardo, 46, 61, 79, 86  
*Financial Times* (periódico), 43, 106  
 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), 69, 81,  
 82  
 Foro Nuevo Sol, 107

- Fox Quesada, Vicente, 18, 26, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 49, 56, 84, 90, 91, 93, 98, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 127, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 143, 165, 166, 172, 173
- Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia, 12, 17, 95, 107, 120, 127, 140, 158, 168
- Frente Popular Francisco Villa (FPFV), 107
- Galván Galván, Guillermo, 172
- Gamboa Patrón, Emilio, 75, 151, 163
- García Laguna, Eliana, 83
- García Luna, Genaro, 172
- García Medina, Amalia, 55, 131, 132, 160
- Giménez Cacho, Daniel, 55
- Gómez Leyva, Ciro, 106
- Gómez Urrutia, Napoleón, 154
- Gómez, Pablo, 95, 118
- González Casanova, Pablo, 148
- González Garza, Javier, 123, 170
- González Luna, Teresa, 81, 82
- González Parás, Natividad, 48
- González Torres, Víctor, 77
- Gordillo, Elba Esther, 24, 34, 48, 49, 69, 78, 85, 149
- Granados Chapa, Miguel Ángel, 40, 60, 128, 140
- Granier, Andrés, 160, 161, 162
- Grupo de Economistas y Asociados (GEA), 17
- Guardia, Maribel, 52
- Gutiérrez Vivó, José, 66, 67
- Harper, Stephen, 33
- Hernández, Auldárico, 67
- Hernández, Eugenio, 34, 48, 69
- Herrera, Fidel, 84
- The Houston Chronicle* (periódico), 106
- Huerta, Bolívar, 38
- Huerta, Victoriano, 116, 118

- Ibarra de Piedra, Rosario, 55, 138, 167
- Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE), 52
- Instituto Estatal Electoral (IEE), 120
- Instituto Federal Electoral (IFE), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 68, 69, 71, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 97, 111, 114, 118, 127, 128, 130
- Iruegas, Gustavo, 164
- Izquierda Democrática Nacional, 107
- Jintao, Hu, 133
- La Jornada* (periódico), 24, 33, 37, 41, 46, 63, 75, 88, 90, 92, 93, 98, 106, 110, 128, 159, 168, 169
- Juárez, Benito, 103, 119
- Kessel, Georgina, 171
- Krauze, Enrique, 144, 145
- Larios Córdova, Héctor, 75, 123
- Laurel, Asa Cristina, 163
- León, Eugenia, 55, 57
- Letras Libres* (revista), 91
- López Dóriga, Joaquín, 47
- López Obrador, Andrés Manuel, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 173
- Loret de Mola, Carlos, 61, 66
- Lozano, Javier, 171
- Luján, Berta, 163

Madrazo Pintado, Roberto, 19, 23, 24, 28, 42, 49  
Mandoki, Luis, 55  
Marín, Mario, 156, 163  
Martínez Álvarez, Jesús, 95  
Martínez Cázares, Germán, 82, 118, 171  
Medina Mora, Eduardo, 172  
Mercado, Patricia, 159  
Merkel, Angela, 133  
*Milenio* (periódico), 26, 168  
Miramón, Miguel, 140  
*Le Monde* (periódico), 119  
Monreal, Ricardo, 26, 45, 46, 52, 53, 58, 73, 75, 85, 103  
Monsiváis, Carlos, 41, 55, 94, 97, 148  
Montemayor, Carlos, 95  
Morales, Elías, 154  
Moreira, Humberto, 154  
Mouriño, Juan Camilo, 47, 171  
Muñoz Ledo, Porfirio, 103, 169  
Murat, José, 152

Nacif, Kamel, 157, 163  
Nava, César, 111  
Navarrete, Carlos, 122, 125, 169, 170  
*The New York Times* (periódico), 67, 106  
Nueva Izquierda, 107  
Núñez, Alberto, 65  
Núñez, Arturo, 53, 73, 74, 85

Ojeda Zubieta, Raúl, 67, 160, 161, 162  
Olivares Alonso, Emir, 75  
Ordóñez, Daniel, 83  
Orozco, Regina, 55, 76, 166  
Ortega, Concepción, 13  
Ortega, Jesús, 17, 19, 34, 35, 61, 65, 66, 85  
Ortiz Pinchetti, José Agustín, 162, 164

- Pacheco, Ricardo, 78, 79  
 Padierna, Dolores, 115, 168  
*El País* (periódico), 64, 168  
 Palacios Alcocer, Mariano, 19  
 Partido Acción Nacional (PAN), 16, 17, 18, 23, 30, 35, 45, 50, 52, 54, 59, 64, 66, 72, 74, 75, 76, 82, 84, 95, 96, 104, 110, 111, 114, 115, 118, 120, 121, 123, 126, 127, 130, 137, 144, 145, 149, 151, 161, 170, 172, 173, 174  
 Partido de la Revolución Democrática (PRD), 11, 16, 17, 26, 39, 40, 41, 46, 47, 49, 57, 58, 61, 64, 67, 71, 73, 75, 78, 80, 89, 90, 95, 98, 100, 104, 105, 107, 108, 115, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 144, 149, 151, 158, 159, 160, 162, 163, 166, 168, 169, 170, 173, 174, 175  
 Partido del Trabajo (PT), 17, 107, 120, 127, 158  
 Partido Nueva Alianza (PANAL), 24, 48, 49, 127, 130  
 Partido Revolucionario Institucional (PRI), 12, 19, 23, 24, 34, 42, 48, 49, 74, 75, 78, 102, 116, 120, 126, 132, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 161, 162, 163, 164, 165  
 Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 126  
 Peña Nieto, Enrique, 48, 155  
 Pérez Mendoza, Alberto, 49  
 Pérez, Matilde, 75  
 Pitol, Sergio, 55, 97  
 Policía Federal Preventiva (PFP), 115, 116, 134, 150, 153  
 Poniatowska, Elena, 37, 55, 63, 90, 95, 97, 138, 159, 166  
 Portilla, Santiago, 13  
 Portillo, Francisco, 38  
 Prats, Mariagna, 34  
*Proceso* (revista), 160, 170  
 Procuraduría General de la República (PGR), 77  
 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 120
- Ramírez Acuña, Francisco, 171  
 Ramírez Cuéllar, Alfonso, 170  
 Ramírez, Cynthia, 91  
 Ramos, Jorge, 79  
*Reforma* (periódico), 39, 40, 44, 51, 58, 70, 102, 104, 105, 106, 109, 119, 125, 129, 140, 143, 144, 156

- Regino, Gabriel, 54  
Revolución Blanca, 107  
Reyes Heroles, Federico, 39  
Reyes Heroles, Jesús, 49  
Reyes Zapata, Mauro Miguel, 83  
Riva Palacio, Raymundo, 23  
Robledo Madrid, Wilfrido, 165  
Rocha, Ricardo, 106  
Rodríguez Zapatero, José Luis, 33  
Rodríguez, Agustín, 94  
Rodríguez, Jesusa, 55, 63, 75, 76, 166  
Rojo, María, 77  
Rojo, Vicente, 52  
Ruiz, Ricardo, 76  
Ruiz, Samuel, 148  
Ruiz, Ulises, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 163
- Sabines Guerrero, Juan, 120  
Sáenz, Gastón, 64  
Salazar Mendiguchfa, Pablo, 120  
Salazar, Francisco, 154  
Salazar, Pedro, 110, 112, 113  
Samaniego, Fidel, 28  
Sarmiento, Sergio, 140  
Saynez Mendoza, Francisco, 172  
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 76, 91, 116  
Sheinbaum, Claudia, 66, 73, 163  
Silva-Herzog Márquez, Jesús, 71, 125  
Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), 94  
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 64  
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 48, 78, 146, 149, 151  
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), 154  
Sodi, Demetrio, 77  
Sojo, Eduardo, 171

Solís Acero, Felipe, 82, 83  
 Solís, Miguel Ángel, 50  
 Sosa, Flavio, 147, 153  
 Stalin, José, 65  
 Stavenhagen, Rodolfo, 148

Téllez, Luis, 171  
 Toledo, Francisco, 148  
 Torreblanca, Zeferino, 160

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 26, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 140, 150, 164

Ugalde, Luis Carlos, 15, 16, 17, 28, 29, 39, 41, 46, 54, 81, 83  
 Unidad y Renovación, 107  
 Unión de Colonias Populares, 107  
*El Universal* (periódico), 21, 23, 28, 41, 47, 51, 64, 90, 107, 109  
 Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), 150, 153

Valle, Diego, 60  
 Vargas Llosa, Mario, 79  
 Vázquez Mota, Josefina, 47, 64, 171  
 Vázquez, Lilia, 76  
 Vega García, Clemente, 134  
 Villoro, Juan, 97  
 Villoro, Luis, 160

*The Washington Post* (periódico), 48, 106  
 Will, Bradley, 150  
 Woldenberg, José, 60, 97

Yáñez, César, 71, 163

Zavala Peniche, Beatriz, 171

Zermeño, Jorge, 123, 170

Zuloaga, Félix, 140



---

Esta obra fue impresa en febrero de 2007  
en los talleres de Edamsa Impresiones, S.A. de C.V.,  
que se localizan en la Av. Hidalgo (antes Catarroja) 111,  
colonia Fracc. San Nicolás Tolentino, en la ciudad de México, D.F.  
La encuadernación de los ejemplares se hizo  
en los mismos talleres.



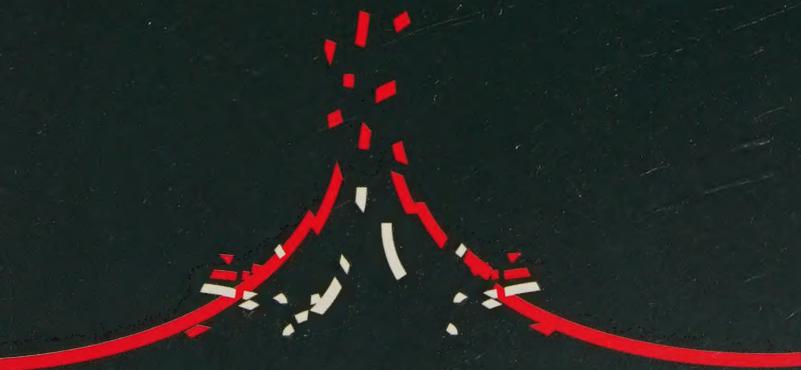
Alejandra Lajous, historiadora de profesión, es autora de *Los orígenes del partido único en México* (1979), *El PRI y sus antepasados* (1982), *Los partidos políticos en México* (1985), *¿Dónde se perdió el cambio?* (2003) y más recientemente *AMLO, entre la atracción y el temor* (2006); este último publicado por Editorial Océano. Es coautora de *Los inicios de la institucionalización en México. La política del Maximato* (1978), e *Identities in North America. The Search for Community* (1995).

De 1976 a 1982 trabajó en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De 1982 a 1990 fue cronista de la Presidencia de la República. Bajo su dirección se publicaron siete volúmenes de *Las razones y las obras. Gobierno de Miguel de la Madrid* y en 2004 fue coautora, con el expresidente, del libro *Cambio de rumbo. Testimonio de una presidencia, 1982-1988*.

De 1990 a 2000 fue directora general de Canal Once de Televisión, del Instituto Politécnico Nacional.

Actualmente trabaja en forma independiente.



¿Hubo realmente un fraude electoral en la elección para presidente de la República? Si así fue ¿cómo se orquestó y quiénes habrían sido los responsables? ¿Cuáles son las pruebas de este presunto fraude? ¿Cumplió cabalmente el Instituto Federal Electoral con la función que le es propia? ¿Hasta qué punto el poder federal influyó en los resultados? ¿En qué medida el sistema político mexicano quedó debilitado por tales sucesos? La autora emprende en estas páginas el recuento pormenorizado de una serie de hechos que agitaron la vida política y social del país durante 2006 y parte de 2007 y que giran en torno a la muy competida elección presidencial. El seguimiento de los acontecimientos recoge las diversas voces que se alzaron durante el conflicto y con ellas estructura una crónica que, más allá de preferencias partidistas o simpatías personales, consigna los hechos con objetividad. Ello no impide, por supuesto, el análisis crítico a los que obliga un conflicto de esta magnitud.



**OCEANO**  
www.oceano.com.mx

ISBN 970-777-314-6



9 789707 773141